

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

45ª REUNIÓN — 18ª SESIÓN ORDINARIA
16 DE NOVIEMBRE DE 1994

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDUARDO MENEM**,
del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don **ORALDO N. BRITOS**
del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
ingeniero **FAUSTINO M. MAZZUCCO**
y del señor presidente de la Comisión de Legislación General,
doctor **RICARDO A. BRANDA**

Secretarios: doctor **EDGARDO RENÉ PIUZZI** y señor **EDGARDO P.V. MURGUÍA**
Prosecretarios: señor **JUAN JOSÉ CANALS** y doctor **DONALDO ANTONIO DIB**

PRESENTE

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
AVELÍN, Alfredo
BITTEL, Deólindo F.
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo N.
CABANA, Fernando V.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
HUMADA, Julio C.
JUÁREZ, Carlos A.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo

MIRANDA, Julio
MOLINA, Pedro E.
OYARZÚN, Juan Carlos
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SNOPEK, Guillermo E.
STORANI, Conrado H.
VERNA, Carlos Alberto
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTES, CON AVISO:

COSTANZO, Remo J.
SOLANA, Jorge D.

EN COMISION:

CENDOYA, Jorge J.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
VACA, Eduardo P.

POR ENFERMEDAD:

CAFIERO, Antonio F.
OTERO, Edison

SUMARIO

1. Por invitación del señor **presidente provisional del Honorable Senado**, el señor senador por San Juan doctor **Alfredo Avelín** procede al izamiento de la **bandera nacional** en el mástil del recinto. (Pág. 4374.)
2. **Lectura y aprobación del plan de labor** para la sesión de la fecha. (Pág. 4374.)
3. **Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación** del señor senador **Aguirre Lanari** por el que se solicita la **asignación de las partidas correspondientes para la refacción y remodelación del Mausoleo del Libertador General San Martín**. (S.-1.344/94.) Se aprueba. (Pág. 4374.)
4. **Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de las comisiones de Industria, de Comercio, de Asistencia Social y Salud Pública, de Ciencia y Tecnología y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en distintos proyectos de ley sobre patentes de invención y modelos de utilidad**. (S.-93/93, S.-700/93, S.-368/94, S.-476/94, S.-1.226/94.) Se aprueba el dictamen en mayoría con **modificaciones**. (Pág. 4375.)
5. **Apéndice: Sanciones del Honorable Senado**. (Pág. 4456.)

—En Buenos Aires, a las 16 y 47 del miércoles 16 de noviembre de 1994:

Sr. Presidente (Menem). — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito al señor senador por San Juan del bloque de la Cruzada Renovadora doctor **Alfredo Avelín** a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador **Alfredo Avelín** procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se va a dar lectura al plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión de presidentes de bloque celebrada ayer a los fines de su consideración por el cuerpo.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee) "Plan de labor parlamentaria para la reunión del 16 de noviembre de 1994: Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del senador **Aguirre**

Lanari por el que solicita incorporar al presupuesto la asignación de las partidas que sean necesarias para la refacción y remodelación del Mausoleo del Libertador General San Martín. (S.-1.344/94.)

Consideración de la preferencia votada con anterioridad: dictámenes en los proyectos de ley sobre patentes de invención y modelos de utilidad (P.E.-53/93), teniendo a la vista los expedientes S.-93/93 (senador **Lafferrère**), S.-700/93 (senador **Storani** y otros), S.-368/94 (senador **Massat** y otros), S.-476/94 (senador **Alasino**) y S.-1.226/94 (senador **Molina** y otros).

Pasar a cuarto intermedio hasta el jueves 17 a las 10 y 30.

Para la reunión del 17 de noviembre de 1994: asuntos entrados.

Sesión ejecutiva de acuerdos, si hubiese dictámenes.

Pasar a sesión en tribunal de juicio político, si hubiera proyectos sobre el particular.

Consideración de los órdenes del día 780, 817 a 848, 850, 851 y 854.

Asuntos que hayan sido reservados sobre la mesa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el plan de labor.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobado el plan de labor.

3

MAUSOLEO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde proponer el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador **Aguirre Lanari** por el que se solicita la asignación de las partidas correspondientes para la refacción y remodelación del Mausoleo del Libertador General San Martín, de acuerdo a lo ordenado por la ley 24.219.

A esos fines tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: no es necesario abundar en consideraciones cuando se trata de honrar la memoria de nuestro héroe máximo; y más que honrar la memoria, cumplir con un deber filial al proceder a la restauración del mausoleo donde se encuentran sus restos mortales.

Por otra parte, existe una ley de la Nación que ha sido votada inicialmente por este Senado y luego por la Cámara de Diputados que así lo ordena. Pero en el proyecto del presupuesto, aunque existen partidas globales que podrían inducir a la inclusión de esta obra, de ninguna manera se especifica y es conveniente que no vuelva a pasar el tiempo dado que la ley que así lo ordena fue votada en junio de 1993.

Por esta razón solicito la aprobación de la Cámara para el proyecto de comunicación. Y lo hago a efectos de que lleguemos en tiempo a nuestros colegas de la Cámara de Diputados para que específicamente se asignen las partidas que correspondan.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Corrientes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuizzi). — (*Lee*)

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo incorpore al proyecto de presupuesto de la Nación que está en estudio en la Honorable Cámara de Diputados la asignación de las partidas que sean necesarias para la refacción y remodelación de las estructuras y pintura del Mausoleo del Libertador General San Martín dando cumplimiento a lo ordenado por la ley 24.219.

Juan R. Aguirre Lanari.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Oportunamente, a raíz de una iniciativa originada en el Senado por un proyecto de mi autoría, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 24.219, que ordenaba la ejecución de todas las obras que sean necesarias para la refacción y remodelación de las estructuras y pintura del Mausoleo en donde se encuentra la tumba del Libertador General José de San Martín, en la Catedral Metropolitana. Para la ejecución de las obras se destinaba hasta la suma de doscientos mil pesos (\$ 200.000).

Dicha ley está en vigencia pues naturalmente no fue vetada. Pero hasta el momento no hemos recibido noticia alguna de su cumplimiento.

Por lo tanto, correspondería que para evitar nuestras trabas burocráticas, en el proyecto de ley del presupuesto de la Nación que está siendo considerado en la Honorable Cámara de Diputados se incluya la referida obra para su ejecución.

Confío en que esta vez se concrete esta decisión del Honorable Congreso de la Nación, ligada al respeto y reverencia que merece el Padre de la Patria, para cuya memoria tan poco se reclama en el asunto materia del presente proyecto de comunicación.

Juan R. Aguirre Lanari.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

4

PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde a continuación el tratamiento de la preferencia que había sido votada.

De acuerdo con el plan de labor que se acaba de aprobar, se trata de los dictámenes de las comisiones de Industria, de Comercio, de Asistencia Social y Salud Pública, de Ciencia y Tecnología y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, en distintos proyectos de ley sobre patentes de invención y modelos de utilidad, en mayoría y en minoría.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuizzi). — (*Lee*)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Industria, de Comercio, de Asistencia Social y Salud Pública, de Ciencia y Tecnología (en minoría) y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios han considerado el mensaje del Poder Ejecutivo 940/93 y proyecto de ley de patentes y modelos de utilidad (P.E.-53/93); y, habiendo tenido a la vista los proyectos de ley sobre el mismo tema del señor senador don Ricardo Lafferrière (expediente S.-93/93), del señor senador don Conrado Storani y otros (expediente S.-700/93), del señor senador don Jorge Massat y otros (expediente S.-386/94), del señor senador don Augusto Alasino (expediente S.-476/94) y del señor senador don Pedro Molina y otros (expediente S.-1.226/94); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Las invenciones en todos los géneros y ramas de la producción conferirán a sus autores los derechos y obligaciones que se especifican en la presente ley.

Art. 2º — La titularidad del invento se acreditará con la concesión de los siguientes títulos de propiedad industrial:

- a) Patentes de invención, y
- b) Certificados de modelos de utilidad.

Art. 3º — Podrán obtener los títulos de propiedad industrial regulados en la presente ley las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, que tengan domicilio real o constituido en el país.

TITULO II

De las patentes de invención

CAPÍTULO I

Patentabilidad

Art. 4º — Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

- a) A los efectos de esta ley, se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre;
- b) Asimismo, será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica;
- c) Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. Para el caso de los modelos de utilidad se considerarán únicamente los conocimientos técnicos que se hayan hecho públicos en el país;
- d) Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente;
- e) Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiéndose al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

Art. 5º — La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de un (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta ley.

Art. 6º — No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación;
- d) Las formas de presentación de información;
- e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y
- f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Art. 7º — No son patentables:

- a) Las invenciones cuya explotación en el territorio de la República Argentina deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente;
- b) La totalidad del material biológico y genético, existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza;
- c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para su producción, sin perjuicio de la protección especial conferida por la ley 20.247 y la que eventualmente resulte de conformidad con las convenciones internacionales de las que el país sea parte.

CAPÍTULO II

Derecho a la patente

Art. 8º — El derecho a la patente pertenecerá al inventor o sus causahabientes quienes tendrán el derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia. La patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin perjuicio de lo normado en los artículos 36, 37, 102 y 103 de la presente ley:

- a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente;

- b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del mismo.

Art. 9º — Salvo prueba en contrario, se presumirá inventor a la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de patente o de certificado de modelo de utilidad. El inventor o inventores tendrán derecho a ser mencionados en el título correspondiente.

Art. 10. — Invenciones desarrolladas durante una relación laboral:

- a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de servicios con el empleador, que tengan por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador;
- b) El trabajador, autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa y empleador excede de manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo.

Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso a), cuando el trabajador realizara una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma. El empleador deberá ejercer tal opción dentro de los noventa (90) días de realizada la invención;

- c) Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve el derecho de explotación de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador; en el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención el pago de hasta cincuenta por ciento (50%) de las regalías efectivamente percibidas por éste;
- d) Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta un (1) año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento;
- e) Las invenciones laborales en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas;
- f) Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en este artículo.

Art. 11. — El derecho conferido por la patente estará determinado por la primera reivindicación aprobada, las cuales definen la invención y delimitan el alcance del derecho. La descripción y los dibujos o planos, o en su caso, el depósito de material biológico servirán para interpretarlas.

CAPÍTULO III

Concesión de la patente

Art. 12. — Para obtener una patente será preciso presentar una solicitud escrita ante la Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con las características y demás datos que indiquen esta ley y su reglamento.

Art. 13. — La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por sus causahabientes o a través de sus representantes. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de un (1) año de la presentación originaria.

Art. 14. — El derecho de prioridad enunciado en el artículo anterior, deberá ser invocado en la solicitud de patente. El solicitante deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma.

Adicionalmente, para reconocer la prioridad, se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

- I) Que la solicitud presentada en la República Argentina no tenga mayor alcance que la que fuera reivindicada en la solicitud extranjera; si lo tuviere, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a la solicitud extranjera.
- II) Que exista reciprocidad en el país de la primera solicitud.

Art. 15. — Cuando varios inventores hayan realizado la misma invención independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida, en su caso, más antigua. Si la invención hubiera sido hecha por varias personas conjuntamente, el derecho a la patente pertenecerá en común a todas ellas.

Art. 16. — El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento de la tramitación. En caso de que la solicitud corresponda a más de un solicitante, el desistimiento deberá hacerse en común; si no lo fuera, los derechos del renunciante acrecerán a favor de los demás solicitantes.

Art. 17. — La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan con este requisito habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

Art. 18. — La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue a la Admi-

nistración Nacional de Patentes creada por la presente ley:

- a) Una declaración por la que se solicita una patente;
- b) La identificación del solicitante;
- c) Una descripción y una o varias reivindicaciones aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la presente ley.

Art. 19. — Para la obtención de la patente deberá acompañarse:

- a) La denominación y descripción de la invención;
- b) Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción;
- c) Una o más reivindicaciones;
- d) Un resumen de la descripción de la invención y las reproducciones de los dibujos que servirán únicamente para su publicación y como elemento de información técnica;
- e) La constancia del pago de los derechos;
- f) Los documentos de cesión de derechos y de prioridad.

Si transcurrieren noventa (90) días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud sin que se acompañe la totalidad de la documentación, ésta se denegará sin más trámite, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada. La falta de presentación dentro del mismo plazo de los elementos consignados en el inciso f), originará la pérdida del derecho a la prioridad internacional.

Art. 20. — La invención deberá ser descrita en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención, y los elementos que se empleen, en forma clara y precisa.

Los métodos y procedimientos descritos deberán ser aplicables directamente en la producción.

En el caso de solicitudes relativas a microorganismos, el producto a ser obtenido con un proceso reivindicado deberá ser descrito juntamente con aquél en la respectiva solicitud, y se efectuará el depósito de la cepa en una institución autorizada para ello, conforme a las normas que indique la reglamentación.

El público tendrá acceso al cultivo del microorganismo en la institución depositante, a partir del día de la publicación de la solicitud de patente, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Art. 21. — Los dibujos, planos y diagramas que se acompañen deberán ser lo suficientemente claros para lograr la comprensión de la descripción.

Art. 22. — Las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección, debiendo ser claras y concisas. Podrán ser una o más y deberán fundarse en la descripción sin excederla.

La primera reivindicación se referirá al objeto principal, aunque las restantes estar subordinadas a la misma.

Art. 23. — Durante su tramitación, una solicitud de patente de invención podrá ser convertida en solicitud de

certificado de modelo de utilidad y viceversa. La conversión sólo se podrá efectuar dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de su presentación, o dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la Administración Nacional de Patentes lo requiera para que se convierta. En caso de que el solicitante no convierta la solicitud dentro del plazo estipulado, se tendrá por abandonada la misma.

Art. 24. — La Administración Nacional de Patentes realizará un examen preliminar de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o se subsanen omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento, en un plazo de ciento ochenta días se considerará abandonada la solicitud.

Art. 25. — La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

Art. 26. — La Oficina de Patentes procederá a publicar la solicitud de patente en trámite dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la presentación. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.

Art. 27. — Previo pago de la tasa que se establezca en el decreto reglamentario, la Administración Nacional de Patentes procederá a realizar un examen de fondo, para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el título II, capítulo I de esta ley.

La Administración Nacional de Patentes deberá requerir copia del examen de fondo realizado por oficinas extranjeras examinadoras en los términos que establezca el decreto reglamentario y podrá también solicitar informes a investigadores que se desempeñen en universidades o institutos científico-tecnológicos del país, quienes serán remunerados en cada caso, de acuerdo a lo que establezca el decreto reglamentario.

Si lo estimare necesario el solicitante de la patente de invención podrá requerir a la Administración la realización de este examen en sus instalaciones.

Si transcurridos tres años desde la presentación de la solicitud de patente, el peticionante no abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida.

Art. 28. — Cuando la solicitud merezca observaciones, la Administración Nacional de Patentes correrá traslado de las mismas al solicitante para que, dentro del plazo de sesenta (60) días, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuera requerida. Si el solicitante no cumple con los requerimientos en el plazo señalado, su solicitud se considerará desistida.

Todas las observaciones serán formuladas en un solo acto por la Administración Nacional de Patentes, salvo cuando se requieran aclaraciones o explicaciones previas al solicitante.

Cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de patentes y agregar prueba documental dentro del plazo de sesenta (60) días a contar de la publicación prevista en el artículo 26. Las observaciones deberán consistir en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión.

Art. 29. — En caso de que las observaciones formuladas por la Administración Nacional de Patentes no

esen salvadas por el solicitante se procederá a denegar la solicitud de la patente comunicándose por escrito al solicitante, con expresión de los motivos y fundamentos de la resolución.

Art. 30. — Aprobados todos los exámenes que correspondan, la Administración Nacional de Patentes procederá a extender el título.

Art. 31. — La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero con mejor derecho que el solicitante y sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre el que recae.

Art. 32. — El anuncio de la concesión de la Patente de invención se publicará en el Boletín que editará la Administración Nacional de Patentes. El aviso deberá incluir las menciones siguientes:

- a) El número de la patente concedida;
- b) La clase o clases en que se haya incluido la patente;
- c) El nombre y apellido, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante y en su caso del inventor, así como su domicilio;
- d) El resumen de la invención y de las reivindicaciones;
- e) La referencia al boletín en que se hubiere hecho pública la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones;
- f) La fecha de la solicitud y de la concesión; y
- g) El plazo por el que se otorgue.

Art. 33. — Sólo podrán permitirse cambios en el texto del título de una patente para corregir errores materiales o de forma.

Art. 34. — Las patentes de invención otorgadas serán de público conocimiento y se extenderá copia de la documentación a quien la solicite, previo pago de los aranceles que se establezcan.

CAPÍTULO IV

Duración y efecto de las patentes

Art. 35. — La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 36. — El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

- a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;
- b) La preparación de medicamentos realizada en forma habitual por profesionales habilitados y por unidad en ejecución de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados;
- c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país;

- d) El empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo de vehículos extranjeros, terrestres, marítimos o aéreos que accidental o temporariamente circulen en jurisdicción de la República Argentina, si son empleados exclusivamente para las necesidades de los mismos.

Art. 37. — El titular de una patente no tendrá derecho a impedir que, quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de la solicitud de la patente hubieran explotado o efectuado inversiones significativas para producir el objeto de la patente en el país, puedan continuar con dicha explotación.

CAPÍTULO V

Transmisión y licencias contractuales

Art. 38. — La patente y el modelo de utilidad serán transmisibles y podrán ser objeto de licencias, en forma total o parcial en los términos y con las formalidades que establece la legislación. Para que la cesión tenga efecto respecto del tercero deberá ser inscripta en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 39. — Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas comerciales restrictivas que afecten la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciatario, restrinjan la competencia e incurran en cualquier otra conducta tales como, condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez, las que impongan licencias conjuntas obligatorias o cualquiera otra de las conductas tipificadas en la ley 22.262 o la que la modifique o sustituya.

Art. 40. — Salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o modelo de utilidad, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo.

Art. 41. — La persona beneficiada con una licencia contractual tendrá el derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan al titular de los inventos, sólo en el caso que éste no las ejercite por sí mismo.

CAPÍTULO VI

Explotación de las patentes

Art. 42. — El titular de una patente de invención estará obligado a explotar la invención patentada, bien por sí o por terceros, mediante la ejecución de la misma en el territorio de la República Argentina. Dicha explotación comprenderá la producción, la distribución y comercialización en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional.

Asimismo, se dará por cumplida la obligación si ésta se lleva a cabo en el territorio de los Estados miembros de Acuerdos y zonas de libre comercio, mercado común o unión aduanera de los que la Argentina forme parte, bajo las siguientes condiciones de reciprocidad:

- a) Que otorgue a la Argentina el mismo beneficio en cuanto a ámbito de ejecución de la explotación;
- b) Que otorgue protección patentaria similar a la de la presente ley.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial determinará el cumplimiento de lo prescrito en el presente

artículo, pudiendo admitir excepciones cuando la razonabilidad económica y técnica así lo indiquen o cuando el ejercicio del derecho de propiedad intelectual pueda tener un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente.

Art. 43. — Los titulares de las licencias voluntarias o de otros usos de la patente sin autorización de su titular tendrán las mismas obligaciones que el titular de la patente, en cuanto a lo mencionado en el artículo 42.

CAPÍTULO VII

Excepciones a los derechos conferidos

Art. 44. — El Instituto Nacional de Propiedad Industrial por sí o a requerimiento de la autoridad competente respectiva, podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente, entre otras causas, cuando se trate de nuevos productos que ofrezcan avances significativos necesarios para proteger la salud y la nutrición de la población o para promover el interés público de sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país. La concesión de esos usos no deberá atentar de manera injustificable contra la explotación de la patente ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

CAPÍTULO VIII

Otros usos sin autorización del titular de la patente

Art. 45. — Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del artículo 46 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de 150 días corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades creadas por la ley 22.262 o la que la modifique o sustituya, que tutela la libre concurrencia a los efectos que correspondiere.

Art. 46. — Transcurridos tres años desde la concesión de la patente o cuatro desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada en los términos a que aluden los artículos 42 y 43, salvo fuerza mayor o no se hayan realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de un año, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin autorización de su titular.

Se considerarán como fuerza mayor, además de las legalmente reconocidas como tales, las dificultades objetivas de carácter técnico legal, tales como la demora en obtener el registro en organismos públicos para la autorización para la comercialización, ajenas a la voluntad del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento. La falta de recursos económicos o la falta de viabilidad económica de la explotación no constituirán por sí solos circunstancias justificativas. El INPI notificará al titular de la patente el incumplimiento de lo pres-

crito en el párrafo precedente antes de otorgar el uso de la patente sin su autorización.

La autoridad de aplicación, previa audiencia de las partes, y si ellas no se pusieran de acuerdo, fijará la remuneración que percibirá el titular de la patente, la que será fijada teniendo en cuenta la tasa de regalías promedio para el sector de que se trata en contratos de licencias comerciales entre partes independientes. Las decisiones referentes a la concesión de estos usos deberán ser adoptadas dentro de los noventa días hábiles de presentada la solicitud y ellas serán apelables por ante la justicia federal en lo civil y comercial. La sustanciación del recurso no tendrá efectos suspensivos.

Art. 47. — Será otorgado a terceros el uso de una patente, sin autorización de su titular, cuando la autoridad competente haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 45.

A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes:

- a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados; en particular, cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto;
- b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones comerciales razonables;
- c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas;
- d) Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas punibles por la ley 22.262 o la que la reemplace o sustituya.

Art. 48. — El Poder Ejecutivo nacional podrá, por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional, disponer la explotación de ciertas patentes mediante la concesión de su uso; su alcance y duración se limitará a los fines de la concesión.

Art. 49. — Se concederá el uso sin autorización del titular de la patente para permitir la explotación de una patente —segunda patente— que no pueda ser explotada sin infringir otra patente —primera patente— siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que la invención reivindicada en la segunda patente suponga un avance técnico significativo, de una importancia económica considerable, con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b) Que el titular de la primera patente tenga derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y
- c) Que no pueda cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Art. 50. — La concesión de los usos de los derechos conferidos por las patentes sin autorización de sus titu-

lares la dispondrá el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, se extenderá a las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricación para permitir su explotación en los términos del artículo 42, tendrán carácter no exclusivo y no podrán cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que la integre. Serán autorizados para abastecer principalmente el mercado interno y el titular de los derechos percibirá una remuneración, en concepto de regalías, la que será fijada teniendo en cuenta la tasa de regalía promedio para el sector de que se trate en contratos de licencia comercial entre partes independientes.

Art. 51. — En todos los casos las decisiones relativas a los usos no autorizados por el titular de la patente estarán sujetos a revisión judicial, como asimismo lo relativo a la remuneración que corresponda cuando ésta sea procedente.

Art. 52. — Los recursos que se interpusieren con motivo de actos administrativos relacionados con el otorgamiento de los usos previstos en el presente capítulo, no tendrán efectos suspensivos.

Art. 53. — Quien solicite alguno de los usos de este capítulo deberá tener capacidad económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada y disponer de un establecimiento habilitado al efecto por la autoridad competente.

CAPÍTULO IX

Patentes de adición o perfeccionamiento

Art. 54. — Todo el que mejorase un descubrimiento o invención patentada tendrá derecho a solicitar una patente de adición.

Art. 55. — Las patentes de adición se otorgarán por el tiempo de vigencia que le reste a la patente de invención de que dependa. En caso de pluralidad, se tomará en cuenta la que venza más tarde.

TÍTULO III

De los modelos de utilidad

Art. 56. — Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que se justificará por títulos denominados certificados de modelos de utilidad.

Este derecho se concederá solamente a la nueva forma o disposición tal como se la define, pero no podrá concederse un certificado de modelo de utilidad dentro del campo de protección de una patente de invención vigente.

Art. 57. — El certificado de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez (10) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeto al pago de los aranceles que establezca el decreto reglamentario.

Art. 58. — Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición de estos certificados que los inventos contemplados en este título sean nuevos y tengan carácter industrial; pero no constituirá impedimento el

que carezca de actividad inventiva o sean conocidos o hayan sido divulgados en el exterior.

Art. 59. — Con la solicitud de certificado de modelo de utilidad se acompañará:

- a) El título que designe el invento en cuestión;
- b) Una descripción referida a un solo objeto principal de la nueva configuración o disposición del objeto de uso práctico, de la mejora funcional, y de la relación causal entre nueva configuración o disposición y mejora funcional, de modo que el invento en cuestión pueda ser reproducido por una persona del oficio de nivel medio y una explicación del o de los dibujos;
- c) La o las reivindicaciones referidas al invento en cuestión;
- d) El o los dibujos necesarios.

Art. 60. — Presentada una solicitud de modelo de utilidad, se examinará si han sido cumplidas las prescripciones de los artículos 53 y 56.

Practicado dicho examen y verificado lo expuesto en el párrafo anterior, o subsanado cuando ello fuere posible, se expedirá el certificado.

Art. 61. — Son aplicables al modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención que no le sean incompatibles.

TÍTULO IV

Nulidad y caducidad de las patentes y modelos de utilidad

Art. 62. — Las patentes de invención y certificados de modelos de utilidad serán nulos total o parcialmente cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley.

Art. 63. — Si las causas de nulidad afectaran sólo a una parte de la patente o del modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

Cuando la nulidad sea parcial, la patente o el certificado de modelo de utilidad seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubiesen sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de un modelo de utilidad o de una patente independiente.

Art. 64. — La declaración de nulidad de una patente no determina por sí sola la anulación de las adiciones a ellas, siempre que se solicite la conversión de éstas en patentes independientes dentro de los noventa (90) días siguientes a la notificación de la declaración de nulidad.

Art. 65. — Las patentes y certificados de modelos de utilidad caducarán en los siguientes casos:

- a) Al vencimiento de su vigencia;
- b) Por renuncia del titular;
- c) Por no cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento al que estén sujetos; fijados los vencimientos respectivos el titular tendrá un plazo de gracia de ciento ochenta (180) días para abonar el arancel actualizado, a cuyo vencimiento se operará la caducidad, salvo que el pago no se haya efectuado por causa de fuerza mayor;

- d) Si transcurrido un año de concedido el uso, sin autorización del titular de la patente no se llegara a satisfacer los objetivos para los cuales esos usos fueron concedidos en los términos de los artículos 47 y 48 de la presente ley;
- e) Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invención en un plazo de dos años por causas imputables al titular de la patente;
- f) Si dentro de los ciento ochenta (180) días corridos de vencidos los plazos previstos en el artículo 46 no se presentare solicitud de uso;
- g) Cuando ello fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana, animal o vegetal o para evitar serios perjuicios al medio ambiente, la autoridad de aplicación declarará la caducidad de la patente, de oficio o por petición de parte;
- h) Si transcurridos nueve (9) años desde la solicitud de la patente u ocho (8) años desde su concesión no se explotara la misma en los términos de los artículos 42 y 46 de la presente ley por cualquier motivo ésta caducará de pleno derecho.

La decisión administrativa que declara la caducidad de una patente será recurrible judicialmente. La apelación no tendrá efecto suspensivo.

Art. 66. — No será necesaria declaración judicial para que la nulidad o caducidad surtan efectos de someter al dominio público al invento; tanto la nulidad como la caducidad operan de pleno derecho.

Art. 67. — La acción de nulidad o caducidad podrá ser deducida por quien tenga interés legítimo.

Art. 68. — Las acciones de nulidad y caducidad pueden ser opuestas por vía de defensa o de excepción.

Art. 69. — Declarada en juicio la nulidad o caducidad de una patente o de un certificado de utilidad, y pasada la sentencia en autoridad de cosa juzgada se cursará la correspondiente notificación al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

TITULO V

Procedimientos administrativos

CAPÍTULO I

Procedimientos

Art. 70. — Las solicitudes deberán ser firmadas por el interesado o su representante legal y estar acompañadas del comprobante de pago de los aranceles correspondientes. Si faltara cualquiera de estos elementos la Administración Nacional de Patentes rechazará de plano la solicitud.

Art. 71. — Cuando las solicitudes sean presentadas por medio de representante legal, éste deberá acreditar su personería mediante:

- a) Poder o copia de poder certificada que lo faculte;
- b) Poder otorgado de conformidad con la legislación aplicable en el lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el representante sea una persona jurídica extranjera;
- c) En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personería del representante, siendo

suficiente una copia simple de la constancia, registro, si el poder se encontrara inscrito en el registro general de poderes que obrará en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 72. — En toda solicitud, el solicitante debe constituir domicilio legal dentro del territorio nacional, comunicar a la Administración Nacional de Patentes cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé aviso del cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por válidas en el domicilio que figure en el expediente.

Art. 73. — Hasta la publicación referida en el artículo 26, los expedientes en trámite sólo podrán ser consultados por el solicitante, su representante o personas autorizadas por el mismo.

El personal de la Administración Nacional de Patentes que intervenga en la tramitación de las solicitudes, estará obligado a guardar confidencialidad respecto del contenido de los expedientes.

Se exceptúa de lo anterior a la información que sea de carácter oficial o la requerida por la autoridad judicial.

Art. 74. — Los empleados del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no podrán directa ni indirectamente tramitar derechos en representación de terceros hasta dos (2) años después de la fecha en que cese la relación de dependencia con el citado instituto, bajo pena de exoneración y multa.

CAPÍTULO II

Recursos de reconsideración

Art. 75. — Procederá el recurso de reconsideración:

- a) Contra la resolución que deniegue la concesión de una patente, o modelo de utilidad;
- b) Contra la resolución que haga lugar a las observaciones previstas, en los términos del artículo 28 de la presente ley.

En ambos casos se presentará por escrito ante el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo perentorio de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se le acompañará la documentación que acredite su procedencia.

Art. 76. — Analizados los argumentos que se expongan en el recurso y los documentos que se aporten, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial emitirá la resolución que corresponda.

Art. 77. — Cuando la resolución que dicte el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial negare la procedencia del recurso deberá notificarse por escrito lo resuelto al recurrente. Cuando la resolución sea favorable se procederá en los términos del artículo 32 de esta ley.

TITULO VI

Violación de los derechos conferidos por la patente y el modelo de utilidad

Art. 78. — La defraudación de los derechos del inventor será reputada delito de falsificación y castigada con prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa.

Art. 79. — Sufrirá la misma pena del artículo anterior el que a sabiendas, sin perjuicio de los derechos conferidos a terceros por la presente ley:

- a) Produzca o haga producir uno o más objetos en violación de los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad;
- b) El que importe, venda, ponga en venta o comercialice o exponga o introduzca en el territorio de la República Argentina, uno o más objetos en violación de los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad.

Art. 80. — Sufrirá la misma pena aumentada en un tercio:

- a) El que fuera socio mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o sus causahabientes y usurpe o divulgue el invento aún no protegido;
- b) El que corrompiendo al socio, mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o de sus causahabientes obtuviera la revelación del invento;
- c) El que viole la obligación del secreto impuesto en esta ley.

Art. 81. — Se impondrá multa al que sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los mismos, se sirve en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al público en error en cuanto a la existencia de ellos.

Art. 82. — En caso de reincidencia de delitos castigados por esta ley la pena será duplicada.

Art. 83. — Se aplicará a la participación criminal y al encubrimiento lo dispuesto por el Código Penal.

Art. 84. — Además de las acciones penales, el titular de la patente de invención y su licenciatario o del modelo de utilidad, podrán ejercer acciones civiles para que se prohíba la continuación de la explotación ilícita y para obtener la reparación del perjuicio sufrido.

Art. 85. — La prescripción de las acciones establecidas en este título operará conforme a lo establecido en los códigos de fondo.

Art. 86. — Previa presentación del título de la patente o del certificado de modelo de utilidad, el damnificado podrá solicitar bajo las cauciones que el juez estime necesarias, las siguientes medidas cautelares:

- a) El secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción, o la descripción del procedimiento incriminado;
- b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado.

Art. 87. — Las medidas que trata el artículo anterior serán practicadas por el oficial de justicia, asistido a pedido del demandante, por uno o más peritos.

El acta será firmada por el demandante o persona autorizada por éste, por él o por los peritos, por el titular o encargados en ese momento del establecimiento y por el oficial de justicia.

Art. 88. — El que tuviere en su poder productos en infracción deberá dar noticias completas sobre el

nombre de quien se las haya vendido o procurado, su cantidad y valor, así como sobre la época en que haya comenzado el expendio, bajo pena de ser considerado cómplice del infractor.

El oficial de justicia consignará en el acta las explicaciones que espontáneamente o a su pedido, haya dado el interesado.

Art. 89. — Las medidas enumeradas en el artículo 86, quedarán sin efecto después de transcurridos quince (15) días sin que el solicitante haya deducido la acción judicial correspondiente, sin perjuicio del valor probatorio del acta de constatación.

Art. 90. — El demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso que éste quisiera seguir adelante con ella y en defecto de caución podrá pedir la suspensión de la explotación, dando él a su vez en su caso, si fuera requerido, caución conveniente.

Art. 91. — A los efectos de los procedimientos civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto la autoridad judicial podrá ordenar a partir del 1º de enero del año 2000, que el demandado pruebe que el procedimiento empleado para obtener idéntico producto, es diferente del procedimiento patentado siempre que dicho producto sea nuevo a esa fecha en los términos del artículo 4º de la presente ley.

Art. 92. — Serán competentes para entender en los juicios civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario, los jueces federales en lo civil y comercial y en las acciones penales, que seguirá el trámite del juicio correccional, los jueces federales en lo criminal y correccional.

TITULO VII

De la organización del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Art. 93. — Créase el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, como organismo autárquico, con personería jurídica y patrimonio propio, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Será la autoridad de aplicación de la presente ley, de la ley 22.362, de la ley 22.426 y del decreto ley 6.673 del 9 de agosto de 1963.

El patrimonio del instituto se integrará con:

- a) Los aranceles y anualidades emergentes de las leyes que aplica y las tasas que perciba como retribución por servicios adicionales que preste;
- b) Contribuciones, subsidios, legados y donaciones;
- c) Los bienes pertenecientes al Centro Temporal para la Creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
- d) La suma que el Congreso de la Nación le fije en el presupuesto anual de la Nación.

Art. 94. — El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial será conducido y administrado por un directorio integrado por cinco (5) miembros designados por el Poder Ejecutivo nacional. Elegirán de su seno a los directores que ejercerán la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Los tres miembros restantes actuarán como vocales.

Los miembros del mencionado directorio tendrán dedicación exclusiva en su función, comprendiéndoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos y sólo podrán ser removidos de sus cargos por acto fundado del Poder Ejecutivo nacional.

Prevía a la designación, renovación o remoción de cada director o del directorio el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a una Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, integrada por tres senadores y tres diputados de la Nación. Esta Comisión deberá emitir opinión dentro del plazo de treinta días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida favorablemente la misma, o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo. No podrán ejercer las funciones de director del instituto aquellos candidatos a directores cuya nominación haya sido rechazada por la Comisión Bicameral mencionada, del mismo modo no podrá renovarse el mandato de los directores ni removerlos de sus cargos sin dictamen favorable de la misma.

Por último los directores del instituto durarán 4 años en sus cargos pudiendo ser renovados indefinidamente.

Art. 95. — El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tendrá las siguientes funciones:

- a) Asegurar la observancia de las normas de la presente ley y de las leyes 22.362 y 22.426 y del decreto-ley 6.673/63;
- b) Contratar al personal técnico y administrativo necesario para llevar a cabo sus funciones;
- c) Celebrar convenios con organismos privados y públicos para la realización de tareas dentro de su ámbito;
- d) Administrar los fondos que recaude por el arancelamiento de sus servicios;
- e) Elaborar una memoria y balance anuales;
- f) Establecer una escala de remuneraciones para el personal que desempeñe tareas en el instituto;
- g) Editar los boletines de marcas y patentes y los libros de marcas, de patentes, de modelos de utilidad y de los modelos y diseños industriales.
- h) Elaborar un banco de datos;
- i) Promocionar sus actividades;
- j) Dar a publicidad sus actos.

Art. 96. — Serán funciones del directorio del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial:

- a) Proponer al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, las modificaciones reglamentarias y de política nacional que estime pertinentes en relación con las leyes de protección a los derechos de propiedad industrial;
- b) Emitir directivas para el funcionamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial;
- c) Ejercer el control presupuestario de los fondos que perciba el instituto;
- d) Realizar concursos, certámenes o exposiciones y otorgar premios y becas que estimulen la actividad inventiva;

- e) Designar a los directores de marcas, modelos, diseños industriales, de transferencia de tecnologías y al comisario y subcomisario de patentes;
- f) Designar a los refrendantes legales de marcas, modelos y diseños industriales y de transferencia de tecnología;
- g) Disponer la creación de un Consejo Consultivo;
- h) Dictar reglamentos internos;
- i) Entender en los recursos que se presenten ante el instituto;
- j) Otorgar los usos contemplados en el título II capítulo VIII de la presente ley.
- k) Determinar las condiciones y el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 42 de la presente ley.
- l) Toda otra atribución que surja de la presente ley.

Art. 97. — Créase la Administración Nacional de Patentes, dependiente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. La administración será conducida por un comisario y un subcomisario de patentes, designados por el directorio del instituto.

Art. 98. — El Poder Ejecutivo reglamentará el ejercicio de las funciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

TITULO VIII

Disposiciones finales y transitorias

Art. 99. — Tanto el monto de las multas como el de los aranceles y anualidades y la forma de actualizarlos se fijarán en el decreto reglamentario.

Art. 100. — Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Art. 101. — Esta ley no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley 16.463 para la autorización de elaboración y comercialización de productos farmacéuticos en el país.

Art. 102. — La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero del año 1995 a partir de cuya fecha se deroga la ley 111 y toda norma que se oponga a la presente.

Art. 103. — A las solicitudes de patentes que se encuentren en trámite en la fecha en que esta ley entre en vigor no le será aplicable lo relativo a la publicación de la solicitud prevista en el artículo 26 de la presente y sólo deberá publicarse la patente en los términos del artículo 33.

Art. 104. — No obstante lo dispuesto en el artículo 102, no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes del 1º de enero del año 2000. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley en los que se disponga la patentabilidad de invenciones de productos farmacéuticos ni aquellos otros preceptos que se relacionan indisolublemente con la patentabilidad de los mismos, con excepción de lo dispuesto en el artículo 91 que comenzará a aplicarse a partir del 1º de enero del año 2000.

Art. 105. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior se podrán presentar solicitudes de patentes de productos farmacéuticos, en la forma y condi-

ciones establecidos en la presente ley las que serán otorgadas a partir del 1° de enero del año 2000.

La duración de las patentes mencionadas precedentemente será la que surja de la aplicación del artículo 35.

Concebida oportunamente la patente, el titular tendrá derecho a percibir una retribución justa y razonable de los terceros que estén haciendo uso de ella desde la concesión hasta su vencimiento. Si no hubiese acuerdo de partes el Instituto Nacional de Propiedad Industrial fijará dicha retribución en los términos del artículo 50.

Art. 106. — Se podrán presentar solicitudes de patentes presentadas en el extranjero antes de la sanción de la presente ley cuyas materias no fueran patentables conforme a la ley 111 pero sí conforme a esta ley, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

- a) La primera solicitud haya sido solicitada dentro de los dos años anteriores a la sanción de la presente ley;
- b) El solicitante pruebe en los términos y condiciones que prevea el decreto reglamentario, haber presentado la solicitud de patente en país extranjero;
- c) No se hubiere iniciado la explotación de la invención o la importación a escala comercial;
- d) La vigencia de las patentes que fueran otorgadas al amparo de este artículo, terminará en la misma fecha en que lo haga en el país en que se hubiere presentado la primera solicitud, siempre y cuando no exceda el término de veinte (20) años establecidos por esta ley.

Art. 107. — Derógase el artículo 5° de la ley 22.262.

Art. 108. — El Poder Ejecutivo dictará el reglamento de la presente ley.

Art. 109. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los términos del artículo 119 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 2 de noviembre de 1994.

*Pedro E. Molina. — Guillermo E. Snopek.
— Enrique Martínez Almudevar. — Jorge J. Massat. — Augusto Alasino. — Leopoldo F. Bravo. — Fernando V. Cabana.
— Carlos A. Juárez. — José O. Figueroa.
— César Mac Karthy. — Luis Rubeo. — Ricardo A. Branda. — Felipe E. Ludeña. — Julio A. San Millán. — Deolindo F. Bittel. — Remo J. Costanzo. — Antonio F. Cafiero. — Jorge D. Solana.
— Carlos A. Verna.*

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Industria, de Comercio, de Asistencia Social y Salud Pública y de Tecnología y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, en minoría; y de Ciencias y Tecnología en mayoría, han considerado el mensaje del Poder Ejecutivo 940/93 y proyecto de ley de patentes y modelo de utilidad (P.E.-53/93); y habiendo tenido a la vista los proyectos de ley sobre el mismo tema de los señores senadores don José Romero Feris (S.-

790/91), don Ricardo Lafferrière (S.-93/93), don Conrado Storani y otros (S.-700/93), don Jorge Massat y otros (S.-368/94), don Augusto Alasino (S.-476/94); por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1° — Las invenciones en todos los géneros y ramas de la producción conferirán a sus autores los derechos y obligaciones que se especifican en la presente ley.

Art. 2° — La titularidad del invento se acreditará con el otorgamiento de los siguientes títulos de propiedad industrial:

- a) Patentes de invención, y;
- b) Certificados de modelos de utilidad.

Art. 3° — Podrán obtener los títulos de propiedad industrial regulados en la presente ley, las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, que tengan domicilio real o constituido en el país.

TITULO II

De las patentes de invención

CAPÍTULO I

Patentabilidad

Art. 4° — Serán patentables las invenciones, sean de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Art. 5° — A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.

Art. 6° — Será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose por ésta el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero. Asimismo se encuentran comprendidos en el estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente o de modelo de utilidad anterior en trámite.

No afectará su novedad la divulgación de una invención cuando dentro de un (1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional, oficialmente reconocida. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria de estos casos en las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 7° — Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la

técnica en forma evidente para una persona experta y con conocimientos medios en la materia técnica correspondiente, a la fecha de la solicitud o de su prioridad.

Art. 8º — Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo el término industria como comprensivo de la agrícola, forestal, ganadera, pesquera, minera, y a la industria de transformación propiamente dichas y los servicios.

Art. 9º — No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética así como las obras científicas;
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación y circuitos integrados;
- d) Las formas de presentación de información;
- e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;
- f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones, o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para una persona experta con conocimientos medios en la materia;
- g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

Art. 10. — La protección conferida por esta ley no se extenderá a:

- a) Las invenciones contrarias a la moral y las buenas costumbres o a las leyes de la República Argentina;
- b) La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, y los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres, tal como ocurre en la naturaleza;
- c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procesos esencialmente biológicos para su obtención, sin perjuicio de la protección especial conferida por la ley 20.247 y la que eventualmente resulte de conformidad con las convenciones internacionales de las que el país sea parte.

CAPÍTULO II

Derecho a la patente

Art. 11. — Salvo prueba en contrario se presumirá inventor a las personas que se designen como tales en la solicitud de patente o de certificado de modelo de utilidad y a ellas le pertenecerá el derecho de patente, sin

perjuicio de la acción reivindicatoria que pueda ejercer cualquier persona que se considere con mejor derecho.

Cuando varios inventores hayan realizado la misma invención independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida, en su caso más antigua. Si la invención hubiera sido hecha por varias personas conjuntamente, el derecho a la patente pertenecerá en común a todas ellas.

Art. 12. — Cuando una sentencia firme reconozca el derecho a la obtención a la patente a una persona distinta del solicitante y siempre que no hubiera llegado a ser otorgada todavía, podrá:

- a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogándose en el lugar del solicitante, o
- b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención, la que gozará de la misma prioridad, o
- c) Pedir que la solicitud sea rechazada.

Art. 13. — La patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin perjuicio de lo establecido en los capítulos VII y VIII, del presente título y los artículos 42 y 111, de esta ley.

- a) El de cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia;
- b) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente;
- c) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del mismo.

Art. 14. — Invenciones desarrolladas durante una relación laboral.

- a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de servicios con el empleador, que tengan por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. En este caso el trabajador, tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa y empleador excede de manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo;
- b) Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso anterior, y el trabajador realizara una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran incluido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, le pertenecerá a él la titularidad de la invención, pero el empleador podrá reservarse dentro de los noventa días de realizada la invención, el derecho de explotación de la misma.

En este caso el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en

atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador. En el supuesto de que el empleador ceda el derecho a terceros, el trabajador titular de la patente podrá reclamar el pago de hasta un cincuenta por ciento (50%) de las regalías efectivamente percibidas por el empleador;

- c) Una invención será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta un (1) año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento;
- d) Las invenciones laborales en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos anteriores, pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas;
- e) Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en este artículo.

Art. 15. — Las disposiciones del artículo anterior también serán de aplicación en el ámbito de los entes públicos de investigación y universidades nacionales.

Art. 16. — Los ingresos provenientes de la explotación de las patentes de las cuales son titulares los entes públicos de investigación y las universidades nacionales, serán percibidos directamente por los organismos respectivos quienes los destinarán a financiar sus actividades de investigación y desarrollo.

Art. 17. — El derecho conferido por la patente estará determinado por la primera reivindicación aprobada, la cual define la invención y delimita el alcance del derecho. La descripción y los dibujos o planos, o en su caso, el depósito de material biológico servirán para interpretarlas.

CAPÍTULO III

Otorgamiento de la patente

Art. 18. — Para obtener una patente será preciso presentar una solicitud escrita ante la Oficina de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con las características y demás datos que indique esta ley y su reglamento. Y podrá ser solicitada directamente por el inventor o por sus causahabientes o a través de sus representantes.

Art. 19. — Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de un (1) año de la presentación originaria, con las siguientes características y condiciones:

- a) El derecho de prioridad deberá ser invocado en la solicitud de patente;
- b) El solicitante deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma;

c) La solicitud presentada en la República Argentina no tenga mayor alcance que la que fuera reivindicada en la solicitud extranjera; si lo tuviere, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a la solicitud extranjera;

d) Deberá existir reciprocidad en el país de la primera solicitud.

Art. 20. — El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento de la tramitación. En caso de que la solicitud corresponda a más de un solicitante, el desistimiento deberá hacerse en común, salvo convenio expreso. Si no lo fuera los derechos del renunciante acrecerán en favor de los demás solicitantes.

Art. 21. — La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan con este requisito habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente. Todas tendrán la misma fecha de presentación de la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.

Art. 22. — La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue a la Oficina de Patentes:

- a) Una declaración por la que se solicita una patente;
- b) La identificación del solicitante y;
- c) Una descripción y una o varias reivindicaciones aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la presente ley.

Art. 23. — Para la obtención de la patente deberá acompañarse:

- a) La denominación y descripción de la invención;
- b) Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción;
- c) Una o más reivindicaciones;
- d) Un resumen de la descripción de la invención y las reproducciones de los dibujos que servirán únicamente para su publicación y como elemento de información técnica;
- e) La constancia del pago de los derechos;
- f) Los documentos de cesión de derechos y de prioridad.

Art. 24. — Si transcurrieren noventa (90) días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud sin que se acompañe la totalidad de la documentación detallada en el artículo anterior, ésta se denegará sin más trámite, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada. La falta de presentación dentro del mismo plazo de los elementos consignados en el inciso f) del artículo anterior originará la pérdida del derecho a la prioridad internacional.

Art. 25. — La invención deberá ser descripta en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención, y los elementos que se empleen en forma clara y precisa.

Los métodos y procedimientos descriptos deberán ser aplicables directamente en la producción.

En el caso de solicitudes relativas a microorganismos, el producto a ser obtenido con un proceso reivindicado deberá ser descripto conjuntamente con aquél en la respectiva solicitud, y además se efectuará el depósito de la cepa en una institución autorizada para ello, conforme a las normas que indique la reglamentación.

El público tendrá acceso al cultivo del microorganismo en la institución depositante, a partir del día de la publicación de la solicitud de patente, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Art. 26. — Los dibujos, planos y diagramas que se acompañen deberán ser lo suficientemente claros para lograr la comprensión de la descripción.

Art. 27. — Las reivindicaciones definirán el objeto para el que solicita la protección, debiendo ser claras y concisas.

Podrán ser una o más y deberán fundarse en la descripción sin excederla.

La primera reivindicación se referirá al objeto principal dejando las restantes estar subordinadas a la misma.

Art. 28. — Cuando la solicitud tenga por objeto patentar procedimientos o productos nucleares, químicos, biotecnológicos o de otra naturaleza, cuya introducción en un sistema productivo pueda representar un potencial peligro para la salud, la vida de las personas o los animales o el medio ambiente, la Oficina de Patentes deberá requerir la opinión de los organismos técnicos pertinentes. Cuando a juicio de dichos organismos la explotación del invento implica ese riesgo, la Oficina de Patentes denegará el otorgamiento de la patente.

Art. 29. — Durante su tramitación, una solicitud de patente de invención podrá ser convertida en solicitud de certificado de modelo de utilidad, y viceversa, en cualquier momento. En el caso que la transformación sea requerida por la Oficina de Patentes, se deberá hacer dentro de los noventa (90) días del requerimiento, caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud.

Art. 30. — La Oficina de Patentes realizará un examen preliminar de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o subsanen omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento, en un plazo de ciento veinte (120) días, se considerará abandonada la solicitud.

Art. 31. — La Oficina de Patentes procederá a publicar la solicitud de patentes en trámite dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la presentación. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado y dentro de los treinta (30) días de formulada.

Art. 32. — A requerimiento del solicitante y previo pago de la tasa que se establezca en el decreto reglamentario, la Oficina de Patentes procederá a realizar un examen de fondo, para comprobar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el capítulo I del presente título.

Cuando el examen de fondo no haya sido solicitado dentro de los tres (3) años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la misma se considerará desistida.

La Oficina de Patentes podrá aceptar o requerir copia del examen realizado por oficinas extranjeras examinadoras en los términos que establezca el decreto reglamentario, además podrá solicitar informes a investigadores que actúen en institutos científicos o tecnológicos o universidades del país. En este caso la remuneración la establecerá la reglamentación.

Si lo estimare necesario el solicitante de la patente de invención podrá solicitar a la Oficina de Patentes la realización de este examen en sus instalaciones.

Art. 33. — Cuando la solicitud merezca observaciones, la Oficina de Patentes correrá traslado de las mismas al solicitante para que, dentro del plazo de sesenta (60) días, haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuera requerida. Si el solicitante no cumple con los requerimientos en el plazo señalado, su solicitud se considerará desistida.

Todas las observaciones deberán ser fundadas y serán formuladas en un solo acto por la Oficina de Patentes, salvo cuando se requieran aclaraciones o explicaciones previas al solicitante.

Art. 34. — En caso de que las observaciones formuladas por la Oficina de Patentes no fuesen salvados por el solicitante se procederá a denegar la solicitud de la patente comunicándose por escrito al solicitante, con expresión de los motivos y fundamentos de la resolución.

Art. 35. — Cumplidos los requisitos de patentabilidad establecidos por la presente ley, la Oficina de Patentes procederá a extender el título.

Art. 36. — El otorgamiento de la patente se hará sin perjuicio de terceros con mejor derecho que el solicitante y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

Art. 37. — El anuncio del otorgamiento de la patente de invención se publicará en el boletín que editará la Oficina de Patentes. El aviso deberá incluir las menciones siguientes:

- a) El número de la patente concedida;
- b) La clase o clases en que se haya incluido la patente;
- c) El nombre y apellido, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante y en su caso del inventor, así como su domicilio;
- d) El resumen de la invención y de las reivindicaciones;
- e) La referencia al boletín en que se hubiere hecho pública la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones;
- f) La fecha de la solicitud y del otorgamiento; y
- g) El plazo por el que se otorgue.

Art. 38. — Sólo podrán permitirse cambios en el texto del título de una patente para corregir errores materiales o de forma.

Art. 39. — Las patentes de invención otorgadas serán de público conocimiento y se extenderá copia de la documentación a quien la solicite, previo pago de los aranceles que se establezcan.

CAPÍTULO IV

Duración y efectos de la patente

Art. 40. — La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 41. — El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

- a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;
- b) La preparación de medicamentos realizada en forma habitual por profesionales habilitados y por unidad en ejecución de una receta médica para casos individuales, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados;
- c) Cualquier persona que comercialice, adquiera, importe o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio de cualquier país;
- d) El empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo de vehículos extranjeros, terrestres, marítimos o aéreos que accidental o temporariamente circulen en jurisdicción de la República Argentina, siempre que sean empleados exclusivamente para las necesidades de los mismos.

Art. 42. — El titular de una patente no tendrá derecho a impedir que quienes de buena fe, y con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente hubiesen explotado o efectuado inversiones significativas para producir el objeto de la patente en el país, puedan continuar con dicha explotación. Tampoco podrá impedir que terceros legalmente autorizados puedan ejercer ese derecho, de conformidad a lo establecido en los Capítulos VII y VIII, del presente título.

Art. 43. — El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquella. En este caso, ni el titular de la patente anterior, podrá explotar la patente posterior o dependiente durante la vigencia de ésta sin el consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior o dependiente podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que tenga el consentimiento del titular de la misma. No obstante será de aplicación lo dispuesto por el capítulo VIII del presente título.

CAPÍTULO IV

Transmisión y licencias contractuales

Art. 44. — La patente y el modelo de utilidad serán transmisibles y podrán ser objeto de licencias, en forma total o parcial en los términos y con las formalidades que establece la legislación. Para que la cesión tenga efecto respecto de terceros deberá ser inscripta en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 45. — Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas comerciales restrictivas que injustificada-

mente afecten la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciataria, restrinjan la competencia e incurran en cualquier otra conducta tales como, condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez, las que impongan licencias conjuntas obligatorias o cualquier otra de las conductas tipificadas en la ley 22.262.

Art. 46. — En el caso que el titular de la patente o certificado de modelo de utilidad conceda, mediante convenio, licencias para su explotación, el convenio deberá inscribirse en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, para que pueda producir efectos contra terceros.

Art. 47. — Salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o modelo de utilidad, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo.

Art. 48. — La persona beneficiada con una licencia contractual tendrá el derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan al titular de los inventos, sólo en el caso que éste no las ejercite por sí mismo, después de haber sido emplazado.

CAPÍTULO VI

Explotación de las patentes

Art. 49. — El titular de una patente de invención por sí o por un tercero autorizado al efecto, estará obligado a explotar la invención patentada mediante la ejecución de la misma en el territorio de la República Argentina o en el territorio de uno de los estados miembros de unión aduanera, mercado común o zonas de libre comercio, de los que la Argentina forme parte, siempre que estos estados otorguen a la Argentina reciprocidad en la materia y protección patentaria similar a la de esta ley.

Art. 50. — Se entenderá por explotación la producción, distribución y comercialización en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional, la que deberá hacerse efectiva dentro de un plazo máximo de tres años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente o cuatro años de presentada la solicitud, salvo caso de fuerza mayor.

Se entenderá por fuerza mayor, además de las previstas por la legislación vigente, las dificultades objetivas de carácter técnico legal, como ser la demora en obtener el registro en organismos públicos para la autorización de la comercialización, ajenas a la voluntad del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento. La falta de recursos económicos o de viabilidad económica de la misma no constituirán por sí sólo circunstancias justificativas.

CAPÍTULO VII

Excepciones a los derechos conferidos

Art. 51. — El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, por sí o a requerimiento de la autoridad competente de que se trate, podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente, cuando se trate de nuevos productos que ofrezcan avances significativos necesarios para proteger la salud, la nutrición de la población o para promover el interés público de sectores de importancia vital para el desarrollo socioeco-

nómico y tecnológico del país. La concesión de esos usos no deberá atentar de manera injustificable contra la explotación de la patente ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

CAPÍTULO VIII

Otorgamientos de los derechos conferidos sin autorización del titular de la patente

Art. 52. — Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 51, el Poder Ejecutivo podrá disponer el otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente sin autorización de su titular, para uso propio del Estado nacional o para el uso de terceros autorizados por él, sujetos a las condiciones del artículo 55.

Art. 53. — Cualquier persona que se encuentre comprendida en las condiciones establecidas por el artículo 56, podrá solicitar el otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente sin autorización de su titular, cuando:

- a) Exista falta de explotación en los términos y condiciones de los artículos 49 y 50, o se haya interrumpido la misma por más de un año;
- b) La autoridad competente haya determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas en los términos del artículo 58;
- c) Un potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de una patente, en condiciones razonables, en los términos del artículo 57 y éstos no han tenido efectos en el plazo de ciento ochenta (180) días;
- d) Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 51 y 52, el Poder Ejecutivo nacional lo determine por motivos de emergencia sanitaria o seguridad nacional, el que subsistirá hasta el cese de la emergencia;
- e) Sea el titular de una patente de adición y no exista acuerdo con el titular de la patente anterior;
- f) Sea el titular de una patente dependiente y no exista acuerdo con el titular de la patente anterior. Se deberá observar lo dispuesto por el artículo 59.

Art. 54. — El otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente sin la autorización de su titular lo dispondrá el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y deberá ser concedido, previa comunicación al titular de la patente, dentro de los noventa días hábiles de presentada la solicitud.

Todas las decisiones referidas al otorgamiento de estos derechos serán apelables ante la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo. La sustanciación del recurso no tendrá efectos sustantivos.

Art. 55. — El otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente sin la autorización de su titular tendrá las siguientes características:

- a) No serán exclusivos;
- b) No podrán cederse salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que la integre;

- c) Serán autorizados para abastecer principalmente el mercado nacional, salvo el caso determinado en el inciso b) del artículo 53;
- d) Con excepción de los casos de los incisos b) y d) del artículo 53, el titular de la patente recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización, debiéndose observar a estos efectos lo dispuesto por el artículo 57. En los casos de los incisos e) y f) del artículo 53, además se estará a lo dispuesto por el artículo 61 y el inciso b) del artículo 59. En ninguna circunstancia se extenderá más allá de la fecha de la vigencia de la patente;
- e) El alcance y duración de estos otorgamientos se limitarán a los usos para los que hayan sido autorizados;
- f) El otorgamiento incluye el uso de todas las patentes necesarias relativas a los componentes y procesos de fabricación que permitan la explotación en los términos del artículo 50.

Art. 56. — La persona que solicite el otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente sin autorización de su titular, deberá tener capacidad técnica y económica suficiente para realizar una explotación eficiente de la invención patentada o contar con un establecimiento habilitado al efecto por autoridad competente.

Art. 57. — El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, una vez otorgado el derecho de explotación conferido por una patente sin autorización de su titular, deberá convocar a una audiencia de las partes con el objeto de llegar a un acuerdo respecto de la remuneración que le corresponde al titular de la patente, caso contrario la fijará teniendo en cuenta la tasa de regalías promedio que se hayan pagado por el mismo invento o tecnologías similares o del sector industrial de que se trate, en contrato de licencias comerciales entre partes independientes.

Para el caso de productos farmacéuticos y farmoquímicos cualquiera de sus componentes o formas de aplicación, la remuneración deberá ser establecida entre el dos (2) y el seis (6) por ciento sobre el precio neto salido de fábrica.

Art. 58. — A los fines de la presente ley y sin perjuicio de lo establecido en otro régimen legal, se considerarán prácticas anticompetitivas las siguientes:

- a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del mercado o discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando existan ofertas de abastecimientos del mercado a precios inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente;
- b) La negativa de abastecer el mercado local en condiciones comerciales razonables;
- c) El entorpecimiento de actividades comerciales productivas;
- d) Todo acto que encuadre en las conductas consideradas punibles por la ley 22.262 o la que la reeemplace o sustituya.

Art. 59. — Para permitir la explotación de una patente —patente dependiente— que no pueda ser explotada

sin infringir otra patente —patente anterior— se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- a) La invención reivindicada en la patente dependiente debe suponer un avance técnico significativo, de una importancia económica considerable, con respecto a la invención reivindicada en la patente anterior;
- b) El titular de la patente anterior podrá exigir se le otorguen los mismos derechos conferidos en virtud del capítulo anterior, al titular de la patente dependiente;
- c) No podrá cederse los usos autorizados de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

CAPÍTULO IX

Patentes de adición o perfeccionamiento

Art. 60. — Todo el que perfeccionase un invento patentado anteriormente, sea el titular o un tercero, podrá solicitar una patente de adición, siempre que ambas se relacionen entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo.

Art. 61. — Si el titular de la patente de adición fuera un tercero, no podrá explotarla sin el consentimiento del titular de la patente anterior. No obstante podrá solicitar el otorgamiento del derecho de explotación, de conformidad con lo establecido en capítulo anterior. En este caso, a su vez, el titular de la patente anterior podrá exigir se le otorgue el mismo derecho respecto de la patente de adición.

Art. 62. — Las patentes de adición se otorgarán por el tiempo de vigencia que le reste a la patente de invención de que dependan.

TÍTULO III

De los modelos de utilidad

Art. 63. — Se expedirá certificado de modelo de utilidad a todo invento que consista en la modificación de un objeto conocido de uso práctico, en su configuración, estructura o constitución que implique un mejoramiento funcional del mismo.

Este derecho se concederá solamente a la modificación, tal como se la define, pero no podrá concederse un certificado de modelos de utilidad dentro del campo de protección de una patente de invención vigente.

Art. 64. — El certificado de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez (10) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeto al pago de los aranceles que establezca el decreto reglamentario.

Art. 65. — Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición de estos certificados que los inventos contemplados en este título sean nuevos y tengan carácter industrial; pero no constituirá impedimento el que carezca de actividad inventiva o sean conocidos o hayan sido divulgados en el exterior.

Art. 66. — Con la solicitud de certificado de modelo de utilidad se acompañará:

- a) El título que designe el invento en cuestión;
- b) Una descripción referida a un solo objeto principal de la modificación del objeto de uso práctico, de la mejora funcional, y de la relación

causal entre éstas, de modo que el invento en cuestión pueda ser reproducido por una persona experta y con conocimiento medio y una explicación del o de los dibujos;

- c) La o las reivindicaciones referidas al invento en cuestión;
- d) El o los dibujos necesarios.

Art. 67. — Presentada una solicitud de modelo de utilidad, se examinará si han sido cumplidas las prescripciones de la presente ley.

Practicado dicho examen y verificado lo expuesto en el párrafo anterior, o subsanado cuando ello fuere posible, se expedirá el certificado.

Art. 68. — Son aplicables al modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención que no le sean incompatibles.

ARTÍCULO IV

Nulidad y caducidad de las patentes y modelos de utilidad

Art. 69. — Las patentes de invención y certificados de modelos de utilidad serán nulos total o parcialmente cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley. La acción sólo podrá ser interpuesta ante juez competente.

Art. 70. — Si las causas de nulidad afectaran sólo a una parte de la patente o del modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

Cuando la nulidad sea parcial la patente o el certificado de modelo de utilidad seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieren sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de un modelo de utilidad o de una patente independiente.

Art. 71. — La declaración de la nulidad de una patente no determina por sí sola la anulación de las adiciones a ella. En este caso la patente se transformará automáticamente en una patente independiente.

Art. 72. — Las patentes y certificados de modelos de utilidad caducarán en los siguientes casos:

- a) Al vencimiento de su vigencia;
- b) Por renuncia del titular. En caso que la titularidad de la patente pertenezca a más de una persona, la renuncia se deberá hacer en conjunto. La renuncia no podrá afectar derechos de terceros;
- c) Por no cubrir el pago de aranceles al que estén sujetos; fijados los vencimientos respectivos al titular tendrá un plazo de gracia de ciento ochenta (180) días para abonar el arancel actualizado, a cuyo vencimiento se operará la caducidad, salvo que el pago no se haya efectuado por causa de fuerza mayor;
- d) Cuando otorgados los derechos conferidos de conformidad con el artículo 53, no se explotara la invención en un plazo de dos (2) años por causas imputables al titular de la patente;
- e) Cuando transcurrido un (1) año del otorgamiento de los derechos conferidos de conformidad con el artículo 53, no se llegare a satisfacer los objetivos

para los cuales esos derechos fueron otorgados en los términos de los incisos b) y d) de ese artículo;

- f) Cuando para proteger la salud pública, la vida humana, animal o vegetal, o para evitar serios perjuicios al medio ambiente, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial declare la caducidad de la patente, ya sea de oficio o a petición de parte.

Art. 73. — La resolución administrativa que declare la caducidad de una patente será apelable judicialmente y no tendrá efectos suspensivos.

Art. 74. — No será necesaria la declaración judicial para que la nulidad o caducidad surtan los efectos de someter al dominio público al invento; tanto la nulidad como la caducidad operan de pleno derecho.

Art. 75. — La acción de nulidad o caducidad podrá ser deducida por quien tenga interés legítimo y por vía de defensa o de excepción.

Art. 76. — Declarada en juicio la nulidad o caducidad de una patente o de un certificado de utilidad, y pasada la sentencia en autoridad de cosa juzgada, se cursará la correspondiente notificación al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO V

Procedimientos administrativos

CAPÍTULO I

Procedimientos

Art. 77. — Las solicitudes deberán ser firmadas por el interesado o su representante legal y estar acompañadas del comprobante de pago de los aranceles correspondientes. Si faltara cualquiera de estos elementos la Oficina de Patentes rechazará de plano la solicitud.

Art. 78. — Cuando las solicitudes sean presentadas por medio de representante legal, éste deberá acreditar su personería mediante:

- a) Poder o copia de poder certificada que lo faculte;
- b) Poder otorgado de conformidad con la legislación aplicable en el lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el representante sea una persona jurídica extranjera;
- c) En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personería del representante, siendo suficiente una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encontrara inscrito en el registro general de poderes que obrará en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Art. 79. — En toda solicitud el solicitante deberá constituir domicilio legal dentro del radio de la ciudad en que funcione la autoridad de aplicación y comunicar al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé el aviso del cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por válidas en el domicilio que figure en el expediente.

Art. 80. — La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de la publicación referida en el artículo 31 y los expedientes sólo podrán ser consultados por el solicitante, su representante o persona autorizada por el mismo.

El personal de la Oficina de Patentes que intervenga en la tramitación de las solicitudes estará obligado a guardar confidencialidad respecto del contenido de los expedientes, salvo que la información sea de carácter oficial o requerida por la autoridad judicial.

Art. 81. — Los empleados del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no podrán directa ni indirectamente tramitar derechos en representación de terceros hasta dos (2) años después de la fecha en que cese la relación de dependencia con el citado instituto.

CAPÍTULO II

Recurso de reconsideración

Art. 82. — Sólo procederá el recurso de reconsideración contra la resolución que deniegue el otorgamiento de una patente, el cual se presentará por escrito ante el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo perentorio de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se le acompañará la documentación que acredite su procedencia.

Art. 83. — Analizados los argumentos que se expongan en el recurso y los documentos que se aporten, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial emitirá la resolución que corresponda.

Art. 84. — Cuando la resolución que dicte el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial negare la precedencia del recurso deberá notificarse por escrito lo resuelto al recurrente, quedando agotada la vía administrativa. Cuando la resolución sea favorable se procederá en los términos del artículo 35 de esta ley.

Art. 85. — Será de aplicación lo establecido en los artículos 28 y 29 del título IV de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

TÍTULO VI

Violación de los derechos conferidos por la patente y el modelo de utilidad

Art. 86. — Sin perjuicio de los derechos conferidos a terceros por esta ley, será castigado con prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa cuyo monto será de cuarenta (40) a seis mil (6.000) veces el valor de la tasa de solicitud, el que a sabiendas:

- a) Produzca o haga producir uno o más objetos en violación de los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad;
- b) El que importe, venda, ponga en venta o comercialice o exponga o introduzca en el territorio de la República Argentina, uno o más objetos en violación de los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad.

Art. 87. — Sufrirá la misma pena del artículo anterior, el que viole la obligación de confidencialidad impuesto por esta ley.

Art. 88. — Se impondrá multa cuyo valor será de cuarenta (40) a trescientas (300) veces el monto de la tasa de solicitud, al que sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando de los derechos conferidos por los mismos, se sirva en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al público a error en cuanto a la existencia de ellos.

Art. 89. — En caso de reincidencia de delitos castigados por esta ley la pena será duplicada.

Art. 90. — Se aplicará a la participación criminal, al enriquecimiento y a la prescripción de las acciones penales establecidas en este título, lo dispuesto por el Código Penal.

Art. 91. — La acción penal reconocida al titular de la patente o modelo de utilidad en este título es privada.

Art. 92. — Además de las acciones penales, el titular de la patente de invención y su licenciatario o del modelo de utilidad, podrán ejercer, sin perjuicio de otras que pudieran corresponder, acciones civiles para impedir se continúe la explotación ilícita y obtener la reparación del perjuicio sufrido.

Art. 93. — Previa presentación del título de la patente o del certificado de modelo de utilidad, el damnificado podrá solicitar bajo las cauciones que el juez estime necesarias, las siguientes medidas cautelares:

- a) El secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción y la descripción del procedimiento incriminado. El secuestro se limitará al número de ejemplares estrictamente indispensables para asegurar la prueba de los hechos controvertidos. Los elementos secuestrados se conservarán en el juzgado o en manos del depositario que el juez designe. Los gastos que demande el depósito será considerado parte de las costas del juicio;
- b) El inventario de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado;
- c) En las diligencias podrá hacerse uso de los medios técnicos que estén al alcance de las partes, como tomar fotografías, obtener impresiones, y toda otra medida que sea conducente a la comprobación de los hechos denunciados.

Art. 94. — Las medidas que trata el artículo anterior serán practicadas por el oficial de justicia, asistido a pedido del demandante, por uno o más peritos.

El acta será firmada por el demandante o persona autorizada por éste, por él o los peritos, por el titular o encargado en ese momento del establecimiento, por el oficial de justicia y los testigos, si los hubiere.

Art. 95. — El que tuviere en su poder productos para comercializar en supuesta infracción, deberá informar fehacientemente el nombre y domicilio de quien se las haya vendido o procurado, su cantidad y valor, así como sobre la época en que los haya obtenido, bajo pena de ser considerado cómplice o encubridor del infractor. El oficial de justicia consignará en el acta las explicaciones que espontáneamente o a su pedido, haya dado el interesado, las que podrán ser ampliadas en un plazo no mayor de tres (3) días a partir de la fecha de la constatación.

Art. 96. — Las medidas enumeradas en el artículo 93, quedarán sin efecto después de transcurridos quince (15) días sin que el solicitante haya deducido la acción judicial correspondiente, sin perjuicio del valor probatorio del acta de constatación.

Art. 97. — El demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso que éste quisiera seguir adelante con ella

y en defecto de caución podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de todos los efectos objetos de ella, dando caución real. La caución la fijará el juez, teniendo en cuenta los intereses comprometidos, a cuyo efecto cualquiera de las partes podrá ofrecer prueba pericial, para dar información al juez a fin de que estime adecuadamente la caución.

Art. 98. — Dictada sentencia, pasada en autoridad de cosa juzgada, los productos en infracción, así como los instrumentos que hubieren servido para la consumación del delito, serán decomisados e inutilizados. Sin embargo, el actor podrá pedir su venta en subasta pública, en cuyo caso el adquirente podrá usar o revender libremente esos elementos para su fin específico.

El producido de las ventas se destinará a abonar las costas del juicio y las indemnizaciones que correspondan.

Art. 99. — En las acciones civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto la autoridad judicial podrá ordenar a partir del 1º de enero del 2000, que el demandado pruebe que el procedimiento empleado para obtener idéntico producto, es diferente del procedimiento patentado siempre que dicho producto sea nuevo a esa fecha en los términos del capítulo I, título II, de la presente ley.

Art. 100. — Serán competentes para entender en los juicios civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario, los jueces federales en lo Civil y Comercial y en las acciones penales, que seguirá el trámite del juicio correccional, los jueces federales en lo Criminal y Correccional.

TITULO VII

De la organización del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Art. 101. — Créase el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, como organismo autárquico con personería jurídica y patrimonio propio, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Será la autoridad de aplicación de la presente ley, de la ley 22.362, de la ley 22.426 y del decreto ley 6.673 del 9 de agosto de 1963.

Art. 102. — El Instituto de la Propiedad Industrial tendrá plena capacidad jurídica para contratar y administrar toda clase de bienes, para demandar y comparecer en juicio, cumplir con las funciones encomendadas en el artículo 104 y, en general, realizar todo acto jurídico que en cumplimiento de sus atribuciones sean necesarios, cuyo alcance será establecido por la reglamentación.

Los recursos y el patrimonio del Instituto se integrarán con:

- a) Los derechos, aranceles y tasas que perciba emergentes de las leyes que aplica y los servicios que presta;
- b) Los legados, donaciones, contribuciones y subsidios;
- c) La suma que el presupuesto anual de la Nación le asigne;
- d) Cualquier otro recurso que el Poder Ejecutivo y la presente ley le otorgue.

Art. 103. — El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial será dirigido y administrado por un directorio integrado por cinco miembros que durarán en sus funciones cuatro (4) años, pudiendo ser reelectos. Serán designados por el Poder Ejecutivo nacional y seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia, mediante concurso, que la reglamentación establecerá.

El directorio elegirá de su seno quién ejercerá la presidencia y vicepresidencia. Los miembros restantes actuarán como vocales.

Prevía a la designación y/o a la remoción el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación integrada por los presidentes de las comisiones que cada una de las cámaras determine en función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y diputados. Dicha comisión deberá emitir opinión dentro de los treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el acto respectivo. No podrán ejercer el cargo de director del instituto aquellas personas cuya nominación haya sido rechazada por la comisión bicameral mencionada, así como también no se podrá renovar ni remover el mandato de los directores del instituto sin dictamen favorable de esa comisión.

Art. 104. — El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a través de su directorio, tendrá las siguientes funciones:

- a) Asegurar la observancia de las normas de la presente ley y de las leyes 22.362 y 22.426 y del decreto ley 6.673/63;
- b) Emitir directivas y contratar al personal técnico y administrativo necesario para llevar a cabo sus funciones, estableciendo, además, la escala de remuneraciones de éstos;
- c) Celebrar convenios con organismos privados y públicos para la realización de tareas dentro de su ámbito;
- d) Administrar y ejercer el control presupuestario de los fondos que perciba el instituto;
- e) Elaborar una memoria y balance anuales;
- f) Editar los boletines de marcas y de patentes y los libros de marcas, de patentes, de modelos de utilidad y de modelos y diseños industriales;
- g) Elaborar un banco de datos;
- h) Dar a publicidad sus actos;
- i) Proponer al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos las modificaciones reglamentarias y de política nacional que estime pertinentes en relación con las leyes de protección a los derechos de propiedad industrial;
- j) Promocionar sus actividades y realizar concursos, certámenes o exposiciones y otorgar premios y becas que estimulen la actividad inventiva;
- k) Designar a los directores de marcas, modelos o diseños industriales, de transferencia de tecnología y al subcomisario de patentes;

- l) Designar a los refrendantes legales de marcas, modelos y diseños industriales y de transferencia de tecnología;
- m) Disponer la creación de un consejo consultivo;
- n) Dictar reglamentos internos;
- o) Entender en los recursos que se presenten ante el instituto;
- p) Toda otra atribución que surja de la presente ley.

Art. 105. — El presidente del instituto tendrá todas las atribuciones ejecutivas necesarias para el cumplimiento de las leyes y reglamentos específicos del ámbito de competencia del organismo, debiendo en particular:

- a) Asumir la representación legal del instituto, pudiendo, de acuerdo con el directorio, designar apoderados al efecto;
- b) Ejercer la dirección del instituto;
- c) Formular el anteproyecto de presupuesto y efectuar los gastos necesarios para el funcionamiento del instituto.

Art. 106. — La oficina de patentes será dirigida por un director de patentes nombrado por el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, a propuesta del directorio del Instituto de la Propiedad Industrial.

TITULO VIII

Disposiciones finales y transitorias

Art. 107. — El monto de las tasas, aranceles y anualidades y la forma de actualizarlos se fijarán en el decreto reglamentario.

Art. 108. — Las patentes otorgadas en virtud de la ley que se deroga, conservarán su vigencia concedida hasta su vencimiento, pero quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Art. 109. — Esta ley no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley 16.463 para la autorización de elaboración y comercialización de productos farmacéuticos en el país.

Art. 110. — A las solicitudes de patentes que se encuentren en trámite en la fecha en que esta ley entre en vigor no le será aplicable lo relativo a la publicación de la solicitud prevista en el artículo 31 de esta ley y sólo deberá publicarse la patente en los términos del artículo 37.

Art. 111. — La presente ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su reglamentación, salvo que se trate de invenciones de productos farmacéuticos y farmoquímicos, cualquiera de sus componentes o formas de aplicación que serán patentables a partir del 1º de enero del 2005, para los cuales, hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente ley que dispongan la patentabilidad de invenciones de esos productos, ni aquellos otros preceptos que resulten aplicables a la patentabilidad de ellos, con excepción de lo establecido en el artículo 99, que se aplicará a partir del 1º de enero del 2000.

Art. 112. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, se podrán presentar solicitudes de patentes de productos farmacéuticos y productos farmoquímicos, cualquiera de sus componentes y formas de aplicación,

en la forma y condiciones establecidas en la presente ley, las que serán otorgadas a partir del 1º de enero del 2005.

La duración de las patentes mencionadas precedentemente será la que surja de la aplicación del artículo 40, de la presente ley.

Otorgada oportunamente la patente, el titular tendrá derecho a percibir una retribución justa y razonable de los terceros que estén haciendo uso de ella, desde el otorgamiento hasta su vencimiento. Si no hubiese acuerdo de partes, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial fijará dicha retribución en los términos del artículo 57 de la presente ley.

Art. 113. — Derógase la ley 111 y toda norma que se oponga a la presente.

Art. 114. — El Poder Ejecutivo dictará el reglamento de la presente ley.

Edison Otero. — Luis A. León. — Alberto J. Rodríguez Saá. — Ricardo E. Lafferrière. — José Genoud. — Conrado Storani. — Fernando de la Rúa. — Pedro G. Villarroel. — Faustino M. Mazzucco. — José O. Bordón. — Alfredo Avelín. — José A. Romero Feris.

FE DE ERRATAS

Luego del artículo 112 debe insertarse lo siguiente:

"En el supuesto que el Congreso Nacional no ratifique el acuerdo suscrito en el marco de la ronda Uruguay del GATT, el Poder Ejecutivo podrá postergar la puesta en vigencia de la presente ley prevista en el párrafo anterior.

"Podrá proceder del mismo modo en el supuesto que por cualquier razón no pudiera dar estricto cumplimiento al compromiso de reducción de subsidios agrícolas establecidos en el mencionado acuerdo."

Luis A. León. — José Genoud. — Conrado Storani. — Fernando de la Rúa. — Pedro G. Villarroel. — Faustino M. Mazzucco. — José O. Bordón. — Alfredo Avelín. — José A. Romero Feris.

De acuerdo con los términos del artículo 119 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 2 de noviembre de 1994.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Por supuesto, harán uso de la palabra los señores legisladores que se anoten a tal efecto, empezando por los representantes de los bloques.

La Presidencia sugiere a los señores senadores que vayan a hacer uso de la palabra, se sirvan anotar con anticipación en la lista de oradores. Además, se va a proponer el cierre de dicha lista en el momento oportuno, a efectos de que los señores legisladores tengan conocimiento de la hora aproximada en que va a finalizar este debate.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz, como miembro informante del dictamen en mayoría.

Sr. Molina. — Señor presidente: desde el bloque justicialista vamos a proponer como miembro informante del articulado al señor senador Martínez Almudevar, y para la exposición en general, al señor senador Alasino y quien habla.

Yo diría que esta propuesta que nos toca considerar hoy, este proyecto de ley sobre patentes de invención y modelos de utilidad, luego de casi un siglo de debate, es de trascendente importancia para el Parlamento argentino.

Quiero expresar mi reconocimiento especial por el trabajo que han llevado a cabo las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Comercio, fundamentalmente en la persona del señor senador Genoud, representante de Mendoza por la Unión Cívica Radical, quien ha puesto gran tenacidad y ha realizado un verdadero esfuerzo para que esta iniciativa pudiera estudiarse más que adecuadamente; se han publicado ya dos tomos y hay dos más en impresión.

También quiero manifestar mi reconocimiento a nuestros pares, el señor senador Martínez Almudevar, quien me reemplazó estoicamente en la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública a la que a veces no pude concurrir; y el señor senador Alasino.

Con esto quiero decir que nos encontramos con un proyecto de ley que ha sido estudiado y debatido, y que ha sido objeto de publicaciones. Se han escuchado las ponencias de los distintos sectores en grado sumo, y ello está plasmado en libros que nuestra imprenta está editando con celeridad. Ya hay dos tomos que recogen las ponencias de los peticionantes, es decir, de sectores vinculados con la producción.

En realidad, desde antiguo, la propiedad era considerada sobre una cosa. Sin embargo, el derecho moderno ha ido abandonando este criterio de que la propiedad únicamente se daba sobre la cosa, entendiendo por tal todo objeto material susceptible de tener un valor.

Modernamente, se ha considerado que también existe la propiedad sobre distintos tipos de bienes como, por ejemplo, los incorpóreos, los de propiedad intelectual, industrial, etcétera. Y esto es así por la importancia que han adquirido en el mundo moderno las nuevas producciones de estos inventos y creaciones.

En el derecho romano, ya con Tiberio y Cayo Graco, con la reforma agraria, empieza a pensarse que la propiedad no es inalienable e im-

prescriptible exclusivamente, sino que tiene una función social y también restricciones. En el derecho moderno, a fines del siglo XVIII la Asamblea francesa dispone que aquel que crea una invención que es susceptible de apreciación pecuniaria y que puede dar un beneficio a la humanidad, puede gozar de las ventajas económicas que esta invención le ha dado.

Si nos remitimos a las *Bases* de Alberdi, observaremos que él ya habla de proteger la propiedad del inventor. Nuestra Constitución, en el artículo 17 también nos habla de la propiedad del inventor de acuerdo con las leyes que reglamentan su ejercicio. Si analizamos lo que establece nuestra Carta Magna, observamos que ese derecho perpetuo no es un derecho de propiedad común sino que está sometido a la ley que dicte el Parlamento.

Señalo esto porque en torno a ello se produce una discusión. Al dictarse en 1864 la reglamentación del artículo 17, a través de la ley 111, en el artículo 4º se prohíbe el patentamiento de los medicamentos. Al respecto, hay quienes sostienen, no sin razón, que una ley puede reglamentar un derecho constitucional pero no abrogarlo, es decir, suprimirlo. Hay que tener en cuenta que en esa época el medicamento no tenía las características que tiene hoy, ya que en ese entonces nacía del boticario, a través de una recomendación o receta magistral que hacía el médico. Y a esto no era conveniente o no era posible patentarlo.

Por otra parte, también nacía la responsabilidad objetiva para los civilistas de aquel entonces a través de los artículos 1109 y 1113 del Código Civil, que hacían que si el medicamento no curaba o causaba un daño, el Estado era responsable. Por esta razón, se entendió que no debía protegerse esta invención que era el medicamento, capaz de curar una enfermedad.

Por eso tanta discusión en el tiempo y tanto debate respecto a por qué no se autorizó el patentamiento de los fármacos desde que se dictó la ley 111, en 1864.

Considero que el derecho de propiedad intelectual es de raigambre constitucional y, valga la redundancia, de propiedad exclusiva de su autor. Asimismo, entiendo que no puede ni debe desnaturalizarse; por eso es que con esta propuesta, por primera vez en la historia de la Argentina, hoy vamos a reconocer un derecho de propiedad sobre los medicamentos.

Si nos preguntamos si existió una violación de la Constitución por parte de quienes sancionaron aquella ley 111, en principio diríamos que

es un tema debatido. Están quienes sostienen, Bidart Campos entre otros, que sí; y están quienes opinan que los tiempos no estaban maduros para sancionar esta norma.

Hoy vamos a procurar encontrar una respuesta que, quizá, sea útil para nuestra comunidad.

Debo decir que este proyecto de ley viene seguido de una gran controversia. Por un lado, algunos sostienen que si reconocemos derecho de propiedad al creador o autor de la invención estaríamos provocando un inmediato aumento de precio. Pero, por otro lado, están quienes consideran que si no se sanciona esta iniciativa nunca vamos a tener una inversión en la Argentina.

En esta propuesta que hemos suscripto con otros señores senadores del justicialismo hemos encontrado un término medio. Es decir, evitamos que a través de la sanción de esta ley se aumenten los precios y, simultáneamente, logramos que venga a la Argentina la inversión de riesgo que estamos necesitando.

Tenemos que lograr varias cosas al mismo tiempo: investigación, inversión, precios razonables y, finalmente, cumplir con los tratados internacionales. Recientemente, a través de este cuerpo, hemos suscripto convenios recíprocos con Francia, Italia y, fundamentalmente, con Estados Unidos, por los cuales los signatarios nos comprometemos a respetar recíprocamente nuestras inversiones; y están quienes sostienen que también las inversiones dedicadas a los medicamentos.

En consecuencia, esta norma tendrá la pretensión de permitirle a las empresas invertir en investigación para producir, desde la Nación Argentina, medicamentos que le reporten naturalmente una utilidad.

Pero aquí se advierte rápidamente una segunda controversia. Algunos sostienen que por el hecho de investigar, de descubrir una molécula o de encontrar un medicamento que cure una enfermedad, debería darse una especie de monopolio exclusivo en la producción y venta, lo cual podría significar un rápido aumento de precios. Y otros opinan que es más cómodo esperar a que investiguen e inviertan terceras personas y, luego, aguardar desde la Argentina a que venga el medicamento, se ordene una licencia obligatoria y, tras el pago de una regalía, se pueda lanzar el producto al mercado.

Esto nos lleva a preguntar a quién se le va a trasladar la regalía. Se le trasladará, es de suponer, al consumidor, con lo cual el medicamentos sí va a subir de precio. Por esta razón es

que nosotros vamos a sostener el principio de que esta regalía o "royalty" sea de carácter excepcional, para muy contadas ocasiones, y se encuentre en manos del Estado.

Nosotros pretendemos, quizás ingenuamente, que la investigación sea hecha por los laboratorios, cualquiera sea su origen, en la Argentina y desde la Argentina. Para esto establecemos determinadas limitaciones.

Sabemos que este controvertido GATT —tan controvertido que, según las últimas noticias que tenemos, los Estados Unidos todavía no lo ha aprobado— sostiene que no es tan fácil establecer que la producción deba tener su origen en la Nación, argumentando que esto podría equipararse o reemplazarse con importación. Con respecto a esta cuestión y pensando en la Argentina y en la posibilidad de generar fuentes de trabajo que no tenemos en este momento, creemos que lo conveniente y lo necesario para nuestro país es que la inversión de riesgo se haga aquí, para lo cual vamos a protegerla con todas las garantías que aseguran el derecho de propiedad, el derecho real de propiedad, aunque estableciendo algunas limitaciones. Así, el Estado argentino podrá establecer que esa licencia que tiene el propietario de la patente pueda o deba ser otorgada a algún laboratorio nacional, precisamente para evitar las consecuencias de lo que puede ser el abuso de su posición en el mercado.

Normalmente, esto ha generado algunas rispi-deces. He visto recientemente algunas solicitadas que nos descalifican, planteando si los parlamentarios argentinos tenemos derecho o no a establecer determinadas características de nuestra ley de patentes. Creo que sí lo tenemos.

Me parecen legítimas, también, las pretensiones de un embajador, de cualquier país. Y digo esto porque yo espero que mi embajador, cuando se encuentre en otro país, pueda vender la producción argentina. Con respecto a esta cuestión escuchaba al señor ministro de Economía referirse a un ex asesor mío, el doctor Julián Licastro, sosteniendo que quería su nombramiento en una determinada secretaría justamente porque lo consideraba un embajador eficiente. En su gestión en el Perú, llenó de motores ese país y colocó nuestros molinos de viento, que allí constituían una originalidad.

Personalmente creo que un embajador de ese tipo vale la pena. Algunos otros se dedican más a cumplir con actos protocolares que a vender nuestros productos. Y con ese mismo argumento me parece legítimo que un embajador pretenda

que sus empresas tengan algún tipo de protección especial, o posiblemente, algún tipo de monopolio en la Argentina. Lo que no me parece legítimo es que algunos socios argentinos actúen como cipayos y salgan a levantar la "claque" y a decir que debemos sancionar un proyecto de ley con tales o cuales características. Si el Parlamento argentino sanciona un determinado proyecto, lo hace pensando que es lo adecuado para su país.

Nosotros nos oponemos al "royalty", nos oponemos a la regalía, y sin embargo los laboratorios nacionales han sostenido que debe haber regalía. Creemos que no porque la regalía significa copia, o —en el caso de la regalía obligatoria—, aceptación o contrato. Consiste en celebrar un contrato, esperar sus resultados y luego trasladar esa regalía al precio que paga el consumidor.

Nosotros queremos que la industria argentina investigue y se asocie, por eso hablamos de producción nacional. Queremos que se produzca en nuestro país para que nuestros jóvenes tengan fuentes de trabajo y los científicos no estén exclusivamente contenidos en las universidades o el Conicet. Queremos que los científicos estén en los laboratorios, nacionales o multinacionales, tratando de encontrar el principio activo y no descomponiendo fórmulas que luego solamente sirven para envasar.

Es por estas razones, señor presidente, que nuestra ley no va a ser aceptada ni por los laboratorios nacionales ni multinacionales, a quienes respeto mucho y respecto de los cuales valoro el hecho de que para encontrar una molécula o un medicamento, tienen que invertir en el orden de los 300 millones de dólares y esperar seis o siete años para pasar de la fase de la investigación básica a la investigación final y posterior fiscalización. Es decir que el proceso comienza con la investigación básica, la investigación en animales, la investigación en tres o cuatro fases en los humanos y, finalmente, la aceptación por parte del organismo público. O sea que pasan varios años y es por esa razón que fijamos una protección casi veinteañal. Se trata aproximadamente de diez años para descubrir una molécula capaz de curar una enfermedad.

Por supuesto que lo de mercado nacional significa producción local. Esto puede tener excepciones y lo dejamos en manos del Estado nacional. Hay una palabrita por la que el mundo moriría: el Estado nacional "podrá" o "deberá". Y nosotros decimos que el Estado nacional "podrá", sabiendo que no será el Estado actual bajo la conducción del presidente Menem el que podrá; quizás sea otro Ejecutivo el que podrá o

no. Es facultativa la atribución que le dejamos al Poder Ejecutivo para que conceda o no en su caso esos royalties o regalías a fin de que algún laboratorio nacional se apropie por alguna circunstancia de la investigación que ha llevado a cabo un laboratorio extranjero.

Y también dejamos en manos del Estado nacional que, en casos excepcionales, pueda sustituir esta obligación de producción nacional que hoy imponemos porque a veces es económica y técnicamente imposible llevarla a cabo. Entonces, no podemos menos que entender que si no podemos realizar aquí la investigación económica ni la producción técnica, naturalmente, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tendrá la posibilidad de dar a algún laboratorio extranjero el ingreso de su producto.

En general, nuestra idea es que la producción se lleve adelante desde la Argentina. ¿Por qué? Porque estamos pensando que necesitamos algún mercado como el Mercosur. Así como Europa se desarrolló con ese importante mercado que significó la Comunidad Económica Europea, y no fue patentista — pensemos que Suiza patentó a fines de la década del 70, Japón casi a fines de esa misma década y los tigres asiáticos a fines de la del 80 —, es lógico que a nosotros, sin presiones extremas, nos permitan determinar cuándo patentaremos y cuándo comenzará a regir nuestra ley a efectos de alcanzar la reconversión necesaria. Nuestra industria será buena o mala, pero es la que ocupa nuestra mano de obra y entonces alguna consideración debemos tener sin llegar a los extremos.

Por otro lado, pensamos que si dejamos copiando a nuestra industria, si la dejamos trabajar como actualmente lo hace, posiblemente por querer hacerle un bien le haríamos un mal.

Le sacaríamos toda la competencia y sucedería lo que ya le pasó a la industria argentina, que por estar protegida no se preparó para ingresar en el mundo y, cuando tiene la posibilidad de hacerlo, está fuera de competencia, tiene costos muy altos o le falta tecnología.

Por eso, señor presidente, nosotros hablamos de un plazo para la reconversión, respecto del cual discrepamos profunda y seriamente con nuestro Poder Ejecutivo. Ello es así porque éste entiende que las brevas están maduras para cortarlas ahora y nosotros creemos que si bien nuestra industria nacional asociada a otras empresas extranjeras ya ha patentado en el extranjero, recién comienza a dar los primeros pasos, como los dio ayer Japón para contar hoy con una industria que realmente empieza a admirarse en el mundo.

Por estos motivos los autores del proyecto hablamos de un plazo de cinco años, aunque mi bloque está peticionando algo más, que consideraremos en el futuro de acuerdo con la propuesta que formulen los senadores de la oposición y los representantes de los partidos provinciales.

Con este enfoque global daría por terminada la información de la primera parte. Sé que tendría que hablar del *pipe line*, es decir, de la retroactividad de dos años que se prevé en nuestro proyecto para reconocer patentes denunciadas en el extranjero. Tendría que hablar del porqué del plazo de reconversión más extenso, es decir, por qué motivo peticionamos un plazo de cinco años y quizá debería hacer referencia a otros temas más técnicos, que dejo a mis colegas Martínez Almudevar y Alasino para que en su oportunidad complementen esta exposición.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia aclara que con la aprobación del plan de labor ha quedado también aprobado pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 10 y 30 cuando termine el tratamiento de este tema.

Me permito recomendar a los señores senadores que deseen intervenir en este debate que tengan a bien anotarse antes de dar por cerrada la lista de oradores.

Tiene la palabra al señor senador por Mendoza, en su carácter de miembro informante del dictamen en minoría.

Sr. Genoud. — Señor presidente: este debate sin duda ha despertado grandes expectativas tanto en el país como fuera de él.

En primer lugar debo decir que llegamos a esta discusión luego de un prolongado estudio que ha insumido aproximadamente un año y medio. La ley que deseamos sancionar está destinada a impactar en la economía del país. Sin duda, ella también tendrá implicancias sociales ya que está dirigida a proteger a unas de las áreas más sensibles de la Argentina como es la salud pública.

Hay expectativa a nivel internacional de parte de los países desarrollados que pretenden que nuestro país se alinee dentro de un régimen patentista que otorgue un derecho exclusivo a su titular. Pero también hay expectativas en los países que, como el nuestro, no han adscripto aún al régimen patentista y están observando la legislación que nacerá de este Congreso, ya que ésta podrá servir de orientación o de antecedente y ser imitada total o parcialmente.

Hay expectativas porque estamos poniendo en marcha una norma que va a modificar una de las más antiguas leyes argentinas, la 111, sancionada

durante el gobierno de Bartolomé Mitre en 1864. Esto no ocurre todos los días. Se trata de una ley cuya vigencia fue pacífica e ininterrumpida con muy escasas modificaciones en los últimos ciento treinta años.

El proyecto de ley en consideración se refiere a las patentes de invención y a los modelos de utilidad. Cuando nos referimos a las patentes de invención estamos hablando de todos los inventos destinados a la actividad industrial, ya sea ésta vinculada a la forestal, ganadera, minera, etcétera. Además —en esto hago especial hincapié— introduce cambios sustanciales en lo que se refiere a la industria farmacéutica, que va a tener protección legal, de la que carecía en la legislación hoy vigente.

De tal modo que no es extraño advertir que por error incluso se considere a este proyecto de ley como de patentes de medicamentos, cuando en realidad es una ley de patentes de invención omnicomprendiva de todos los inventos industriales y de los modelos de utilidad. Ese error, en el que incurrir muchos, tiene una explicación. Esta ley le va a brindar protección a los inventores de productos farmacéuticos por primera vez en la historia de la Nación. Esto va para aquellos que sostienen que estamos por dictar una ley retrógrada.

La industria farmacéutica es la tercera en importancia en la Argentina, ya que factura 3.000 millones de dólares. Después de la hidrocarbúrica y la automotriz es la que sigue en importancia y volumen de ventas. De esos 3.000 millones de dólares el 56 por ciento corresponde a los laboratorios nacionales, cuyo mercado ha crecido notablemente en los últimos años y el 44 por ciento corresponde a las ventas de laboratorios extranjeros radicados en el país.

La ley 111, que tiene mucho más de un siglo de vigencia, estableció una protección a todos los inventores de productos industriales durante cinco, diez y quince años. Además, creó la oficina de patentes, que es la que tiene a su cargo el registro de invenciones, de la cual surgía el derecho a la protección que estaba contenido en aquella vieja norma.

Esa ley, como bien se ha dicho, se basó casi en su totalidad en otra ley, la francesa de 1844.

Para aquellos que sostienen que mediante el proyecto que estamos estudiando amparamos la piratería intelectual debo señalar que la ley 111 fue sostenida por numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a lo largo de las últimas décadas. Cada vez que se planteó la inconstitucionalidad de esa norma —que deja sin

protección los inventos farmacéuticos—, la Corte argentina de los últimos 130 años, más allá de sus variadas composiciones y cualquiera fuera el signo político que gobernara el país —incluso los gobiernos de facto— declaró su plena constitucionalidad.

Además, el Congreso de la Nación avanzó solamente en un caso con un proyecto de ley de patentes que abarcaba los productos farmacéuticos; fue en 1964 como consecuencia de una iniciativa del diputado Tecera del Franco. El proyecto obtuvo sanción de la Cámara de Diputados pero el Senado nunca lo trató.

No obstante, el Congreso de la República ratificó varios convenios internacionales de propiedad intelectual. Lo hizo en 1966 y también en 1980.

El Convenio de París de 1883 —modificado por el de 1900 de Bruselas, por el de 1911 de Washington, por el de 1925 de La Haya, 1934 de Londres, 1958 de Lisboa, 1967 de Estocolmo—, consagra una amplia protección de los derechos intelectuales. Este convenio fue ratificado por la Argentina en esas dos oportunidades. Pero en ambas se dejó expresa constancia de que la ratificación no alcanzaba aquellas normas que entrarían en colisión con el artículo 4º de la ley 111, de modo tal que se mantuviera absolutamente intangible el principio de que los productos farmacéuticos no podían ser patentados.

Por eso, señor presidente, lo que está haciendo el Congreso ahora es dar un salto cualitativo que nadie puede ignorar. Vamos a avanzar hacia una legislación que modernice notablemente el sistema de patentes argentino, incorporando el derecho de los inventores de fármacos a tener la protección legal que no tuvieron en estos ciento treinta años. Por eso nos duele que se publiquen costosas solicitudes que califican la actuación de los legisladores como cómplices de piratería intelectual.

Me había propuesto no decirlo y a no traer esto a la memoria, pero hoy leyendo los diarios de la fecha decidí expresar aquel recuerdo, señor presidente.

En 1964, durante la presidencia del doctor Arturo Illia, cuando era ministro de Asistencia Social y Salud Pública el doctor Arturo Oñativia, se sancionó una ley de medicamentos, la 16.463, una ley muy controvertida, pero que fue ganando adeptos en el país hasta ser apoyada por unanimidad en el Senado.

Por esa ley se establecía un estricto régimen de control a los precios de los medicamentos y se determinaba que para vender esos productos en

la Argentina debían ser fabricados por laboratorios autorizados en nuestro país.

Cayó el gobierno de Illia. Muchos dijeron que la ley de medicamentos había tenido que ver con aquella nefasta decisión. Algunos sostuvieron que se exageraba: Lo cierto es que desde que aquello se sancionó hubo una campaña de desprestigio notable hacia aquel noble presidente de los argentinos y su gobierno.

Rescato una declaración periodística que hiciera Arturo Oñativia antes de morir en 1984 a la revista "El Periodista". El atribuía a fuertes influencias externas para modificar la ley de medicamentos parte de la responsabilidad en aquel golpe. Y fue Arturo Oñativia, no yo, quien dijo en aquella oportunidad que, en aquel momento, mientras se gestaba el golpe, también negociábamos la deuda externa en el Club de París y los acreedores presionaban para que modificáramos nuestra política interna pero, fundamentalmente, en materia de medicamentos.

No creo que revolver la historia sea el camino más conveniente para darle luz a nuestro futuro. Lo que sí sostengo, señor presidente, es que afortunadamente han cambiado los tiempos, han cambiado las conductas de los países, han cambiado los protagonistas de uno y de otro lado. No obstante ello, actitudes de intransigencia, muchas veces lindantes con el agravio, nos hacen traer a la memoria aquellos infaustos acontecimientos.

Quiero decir; aunque los señores senadores ya lo saben, para que se divulgue ampliamente, que en razón de los grandes intereses encontrados que existen en la discusión de este tema y por la gran expectativa internacional que despertó desde un comienzo la ley de patentes de medicamentos, los presidentes de las comisiones que entendemos en este tema —de Industria, de Ciencia y Tecnología, de Comercio, de Asistencia Social y Salud Pública y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios— resolvimos realizar una serie de audiencias públicas para darle no solamente participación a todos los interesados sino para dotar a ese debate de la necesaria transparencia que se requiere para discutir estos temas en el Parlamento.

Por eso se llevaron a cabo en un año y medio —reitero: sólo en un año y medio— más de treinta audiencias públicas, en las que expusieron su opinión los laboratorios internacionales y nacionales, la Unión Industrial Argentina, la Confederación General Económica, la Confederación General de la Industria, las universidades nacionales, la Confederación Médica, la Federa-

ción de Farmacéuticos, los bioquímicos y muchas otras organizaciones. Finalmente, le dimos la palabra al gobierno para que concluyera esa serie de audiencias públicas. A tal efecto, hablaron el ministro de Salud y Acción Social, doctor Mazza, y por último el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, doctor Cavallo.

Estas jornadas, que se publicaron en tres tomos por disposición del presidente del Senado, son una prueba cabal del trabajo serio y responsable que se ha hecho para llegar a este debate munidos de todos los elementos posibles para dar la mejor ley que convenga a la Nación.

Es más, señor presidente. En esas audiencias públicas no sólo estuvieron las entidades interesadas en el tema, sino que también participaron periodistas, quienes hicieron preguntas a los señores senadores y a quienes exponían. También fueron invitados, en un hecho inédito, funcionarios de las embajadas de países acreditados en la Argentina que tuviesen deseos de presenciar las deliberaciones que se llevaron a cabo —como dije recién— en este Senado.

El criterio contenido en nuestra legislación, especialmente en la ley 111, que ya he mencionado, era compartido por todas las legislaciones del mundo hasta promediar el siglo XX, a partir del cual comienzan a modificarse lentamente. Muchos países inician un proceso mediante el cual se suman a la idea patentista y se otorgan derechos —en algunos casos, exclusivos; en otros, semiexclusivos— a los inventores de productos farmacéuticos. Son los casos de Guatemala en 1917; Sudáfrica, en 1952; Panamá, en 1974; Costa Rica, en 1983; Suecia, en 1978; Noruega, en 1992; Dinamarca, en 1983; Grecia, en 1992; Chile, en 1991; Portugal y Austria, en 1992. Muchos de estos países han comenzado recientemente a aplicar la ley de patentes por haber sido sancionada hace algunos años pero con períodos de transición para su puesta en vigencia. Lo mismo pretendemos para nuestro país.

Si bien Finlandia aprobó la ley de medicamentos, todavía no la ha puesto en vigencia porque recién comenzará a regir en 1995. Quedan cuarenta y dos países sin adscribir al régimen patentista: India, Paquistán, Brasil, Argentina, Marruecos, Perú, Paraguay, Uruguay, entre otros.

Esto sirve para ir midiendo el grado de evolución de la legislación de todos los países del mundo, ante lo cual la Argentina —por supuesto— no hará oídos sordos. Por eso, pretendemos que a corto plazo la Nación Argentina

tenga una nueva y moderna ley de patentes que abarque a los inventores de productos medicinales.

A continuación, voy a analizar los argumentos que a lo largo de los años se han expuesto para sostener el régimen patentista en materia de productos medicinales y aquellos que se han esgrimido para oponerse sistemáticamente a su aplicación. Y lo haré porque si bien pueden haber coincidencias generales entre todos los senadores de este cuerpo no quiero que la otra posición se quede sin voz. Por ello, voy a dar los argumentos de unos y de otros.

Quiénes se oponen al régimen patentista de productos farmacéuticos sostienen que la patente otorga inexorablemente la exclusividad en la producción de ese producto, y esa exclusividad se traduce en un acto monopolístico. Se sostiene también que el monopolio, habitualmente por veinte años —que es el plazo promedio de la legislación del mundo que ha adoptado este régimen— tiende también de un modo inexorable a incrementar el nivel de los precios de los productos farmacéuticos que tienen sus patentes sin caducar. Y esto, continúa el argumento, termina afectando el sistema de salud porque el incremento de los precios va limitando el acceso del ciudadano al medicamento, que es un bien social, y por lo tanto ello constituye un atentado contra la salud, que no es otra cosa que un atentado contra la vida.

Se afirma que el derecho de propiedad intelectual, por valioso que sea, por reconocimiento constitucional que tenga, siempre es un derecho inferior a la salud de la población y, por lo tanto, debe ceder ante este último valor por vía de diversas limitaciones.

Se afirma que se debe proteger la industria nacional, que ha crecido bajo la legislación que ha tenido el país en estos ciento treinta años; que se ha tecnificado en grado sumo; que da trabajo a 25 mil personas; que abastece el mercado interno en un 56 por ciento; que permite exportar sus productos a muchos países latinoamericanos. Además, se concluye sosteniendo que si se cambiara abruptamente de régimen legal se produciría, sin lugar a dudas, una millonaria transferencia de recursos hacia el extranjero, máxime que si no se obliga a quien registra un invento o lo patenta en el país a fabricarlo en él, también va a existir un mayor deterioro de nuestra economía en función del casi seguro éxodo de esos laboratorios a sus lugares de origen.

Pero ahora vamos a decir esquemáticamente qué sostienen los defensores del sistema paten-

tista a ultranza, que no solamente reclaman que la Argentina debe incorporarse al sistema de patentes de tal modo que el inventor patente su invento y, una vez otorgada la licencia, sea exclusiva por el término de veinte años para tener de un modo absoluto la producción y comercialización de ese producto, conceptos que se asientan fundamentalmente en razones de orden filosófico.

Se sostiene que nada hay más propio del autor que su misma obra. Se sostiene también que el inventor es dueño de su obra como el autor literario o de una composición musical. Que es un derecho tan íntimo del ser humano que incluso es un derecho humano por excelencia. Por lo tanto, requiere de la misma protección que el resto de los autores dentro de la materia de propiedad intelectual.

Se afirma que la patente de uso exclusivo es el mejor aliento para la producción ya que una alta rentabilidad en los primeros tiempos de venta del producto es el mejor premio al que investiga, además de ser el mejor incentivo para que continúe la inversión, y para el desarrollo de la investigación y, consecuentemente, se mejore el sistema de salud a través del crecimiento de empresas innovadoras.

Además, se sostiene que quien copia, quien reproduce y quien imita la obra de otro, aun tratándose de inventos industriales, está haciendo lisa y llanamente piratería intelectual.

Así planteadas las posiciones antinómicas, de un modo esquemático: corresponde que ahora vayamos desbrozando los argumentos que consolidan nuestra posición, que esperamos ver de algún modo concretada en el proyecto de ley que se aprobará hoy, para luego ser girado a la Cámara de Diputados.

Veamos, pues, la naturaleza del derecho que tiene el inventor.

El inventor tiene un derecho de propiedad intelectual, término acuñado ya en 1377 por Piccard, que lo impuso de tal modo que hoy en día en todas las legislaciones del mundo existen los derechos de propiedad intelectual como una categoría sui generis de derecho de propiedad. No es un derecho personal ni es tampoco propiamente un derecho real.

El artículo 17 de nuestra Constitución, también mencionado por el señor miembro informante del dictamen de la mayoría, establece que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerda la ley. Esto quiere decir, señor presidente, que ésta es una propiedad

consagrada por la Constitución Nacional pero limitada también por la misma Carta Magna al término de duración que le acuerde la ley.

Tiene razón el doctor Spota cuando dice que los derechos de propiedad intelectual tienen una doble limitación: la genérica y la específica. La genérica es la del artículo 14, que se ha mencionado: o sea, cuando se refiere a que todos los derechos consagrados por la Constitución están sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio. La Corte Suprema ha dicho categóricamente que la pretensión de un derecho ilimitado en su ejercicio importa, por sí mismo, una concepción antisocial. Los derechos de la Constitución, en su ejercicio, nunca han sido absolutos, ni pueden serlo. Esto, para citar aquellos fallos más contundentes de la Corte cuando, interpretando el artículo 14, dice que ningún derecho en su ejercicio puede ser ilimitado en su eficacia.

Esta es la limitación genérica de todos los derechos que están contemplados en nuestra Carta Magna. Pero el derecho de propiedad, además, tiene esta otra limitación a la que hacía referencia, que es la del artículo 17, donde se establece un plazo de duración en el ejercicio de ese derecho, que es el que la ley determinará.

En nuestra ley 111, para aquellos derechos que deviniesen de la propiedad intelectual o de los inventos industriales, ese plazo era de cinco, diez o quince años, según el invento de que se tratara. En Estados Unidos es de diecisiete años desde el otorgamiento de la licencia. En otros países, es de veinte años desde la solicitud de la licencia.

Pero veamos cuál es la esencia filosófica de esta limitación temporal en el ejercicio del derecho de la propiedad intelectual.

Se dice con razón que esta limitación proviene de que nadie es el autor exclusivo de su obra, sino que es coautor con la sociedad. En cada obra artística en general, al igual que en cada invento, está presente la sociedad como autor; no sólo la sociedad actual sino también las culturas que generación tras generación han ido aportando los elementos de los cuales se nutre todo invento como toda obra artística.

Sostiene el doctor Spota que nadie, por sí mismo, puede generar una obra o un invento, sino junto a ese autor social colectivo que a través del curso de la historia le ha aportado al autor los elementos de su creación.

Y una frase que lo condensa todo dice: "Nada es más del autor que su obra intelectual". Mas al mismo tiempo, nada está tan vinculado al contexto social como la obra intelectual.

Veamos nuestra legislación, señor presidente.

En materia de derechos de autor, la antigua legislación establecía que duraban mientras éste viviera, extendiéndose por treinta años más para los sucesores. Luego de que la Argentina ratifica el Convenio de Berna, el plazo se unifica — junto con los demás países signatarios — en cincuenta años, más lo que durase la vida del autor. Y en materia de inventos industriales, se establecían los cinco, diez y quince años a los que ya hice referencia.

Pero ahora bien, en este contexto, ¿qué lugar ocupan los productos farmacéuticos, farmacéuticos o medicinales, según se los quiera denominar? Son invenciones y requieren protección legal.

Este es el primer paso que damos hacia la modernización de nuestra legislación, por lo tanto, en nuestro proyecto — que en esto es coincidente con el texto de la mayoría — el inventor tiene el derecho a explotar su obra o invento por el término de veinte años. En nuestro despacho, además de explotar su obra, el inventor tiene el derecho — para el caso de que un tercero reproduzca su invento — a cobrar la remuneración adecuada que determine el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Reitero, para aquellos que sostienen que ésta es una ley retrógrada, que de la ausencia total de protección pasamos a reconocer el derecho al titular de la patente a que explote su propiedad libremente, tanto en la producción como en la comercialización: si un tercero — por las distintas causales que establece un artículo que luego vamos a mencionar — obtiene la licencia para reproducir ese invento, deberá pagar al titular de la patente un porcentaje del precio que, obviamente, le asegurará la renta anual de su trabajo y de su talento inventivo.

Las discrepancias, señor presidente, surgen al plantearnos si puede ser monopolístico el derecho que tiene el inventor a explotar su obra y a producirla. Es decir, si ese derecho a producir un producto farmacéutico puede ser exclusivo.

No dudamos que debe ser monopolística la obra literaria, no dudamos que puede ser exclusiva la producción y explotación de una composición musical, no dudamos que puede y debe ser exclusiva la producción de un producto industrial de cualquier índole. Pero nosotros nos preguntamos si puede ser objeto de explotación monopolística un producto farmacéutico.

Vamos a repasar un poco lo que ha dicho la Corte Suprema sobre el tema. Decía que la propiedad no tiene carácter absoluto, que el mono-

polio importa un desafío al recto ejercicio de la propiedad. La ley 22.262 de defensa de la competencia, que se nutrió del Tratado de Roma de 1953, también establece una serie importante de normas por las que se condena toda forma de apropiación del mercado a través de conductas monopólicas.

Cito la encíclica *Centessimus Annus*, de 1991, donde Juan Pablo II decía, concluyendo el Capítulo III, que hay que romper las barreras y los monopolios que dejan a tantos pueblos al margen del derecho.

El monopolio, señor presidente, impide la formación de precios justos, elimina la competencia, procura dominar y apoderarse del mercado y afecta a los consumidores toda vez que tiende, inexorablemente, a incrementar los precios, e incluso se corren los riesgos del desabastecimiento. Pero si el monopolio es un disvalor, si es altamente perjudicial para la economía, si es por naturaleza injusto, cuánto más injusto va a ser, señor presidente, si ese monopolio se ejerce sobre un fármaco del cual requieren los enfermos. Elevar los precios de un producto medicinal es una limitación al acceso a los mismos, y por lo tanto es un atentado a la salud y, por qué no decirlo, también es un atentado a la vida.

Jonas Salk inventó la vacuna contra la poliomielitis y no la patentó. Cuando le preguntaron en una universidad por qué no lo había hecho contestó que sería como patentar el Sol, que es de todos. Fleming, inventor de la penicilina, tampoco patentó ese invento que perteneció, desde ese momento, a toda la humanidad. Asimismo, Milstein —reciente Premio Nobel— tampoco patentó su invento relacionado con su teoría de los anticuerpos monoclonales.

Es a partir de este concepto, señor presidente, que debemos exponer qué sistema proponemos en este despacho de comisión para darle a la Argentina un proyecto de patentes de invención que abarque los productos farmacéuticos y los modelos de utilidad, que deje atrás una vieja ley, que en su momento cumplió su cometido, y que proyecte hacia el futuro a una Argentina que no descuide su salud, que no olvide su industria, que aliente la investigación y, por supuesto, que preserve los derechos del inventor.

Gran parte de las normas contenidas en este despacho, tal como ocurre —pese a las diferencias— con el dictamen de la mayoría, se nutren de lo que estableció el GATT, Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, y más concretamente del capítulo referido a la propiedad intelectual, cuya sigla en inglés es TRIPS y que

de aquí en adelante denominaremos ADPIC, que corresponde a la sigla en castellano.

El GATT, a través de la Ronda Uruguay, trabajó durante siete años para arribar a lo que a nuestro juicio es un importante acuerdo por el que se procura dar mayor ecuanimidad y justicia al comercio internacional, que hasta ahora se manejó a través de las leyes del más fuerte y de sanciones unilaterales.

Al GATT habremos de referirnos, señor presidente, porque estableció en el capítulo de ADPIC una clara categorización de lo que deben ser los derechos de propiedad intelectual para los países signatarios.

El GATT es el marco del que nosotros no nos vamos a apartar, porque es el modo de cumplir con la comunidad internacional, pese a que hay muchas naciones, como los Estados Unidos, que pretenden que vayamos mucho más allá de las propias exigencias que nos fijó el acuerdo del GATT, suscrito finalmente el 15 de abril de este año en Marrakesh, Marruecos.

Vamos a dejar atrás la vieja Ley 111. Avanzaremos hacia una nueva legislación en materia de propiedad intelectual tratando de armonizar los derechos del inventor con la salud, así como también con la importancia que debe tener la industria, sobre todo en este momento en donde, a nuestro juicio, existe una seria amenaza de agudización del proceso recesivo.

A partir de esta parte de mi exposición, señor presidente, he de reflejar los ejes fundamentales de nuestro dictamen, en donde se advertirán los puntos de controversia con el despacho de mayoría, para dejar para la discusión en particular el resto de los artículos que, si bien son importantes, no constituyen el meollo del sistema de patentes de invención y modelos de utilidad que proponemos.

Todos los señores senadores conocen la alta complejidad del proyecto que venimos estudiando desde hace un año y medio, que consta de ciento veinticinco artículos. Por ello, reitero que de aquí en adelante haré alusión exclusivamente a los ejes centrales de la iniciativa.

Nuestro dictamen, señor presidente, propone que todo inventor, aun de productos farmacéuticos, tenga el derecho a explotar su obra por veinte años. De tal modo que, incluso, puede transferir o vender ese derecho o explotar su invento. No obstante, cualquier persona con capacidad técnica, económica y que esté habilitada por los organismos de salud del país, puede solicitar el otorgamiento del derecho de explotar ese invento sin autorización del titular de la patente.

Ello puede ocurrir en seis casos —y esto está tomado del GATT—, a saber: 1º, cuando el titular de la patente haya dejado de explotar por tres años su invento, o por cuatro años si es a partir del otorgamiento de la patente; 2º, cuando el titular de la patente, a juicio del Poder Ejecutivo, haya violado flagrantemente la ley de defensa de la competencia; 3º, cuando el Poder Ejecutivo haya dispuesto la emergencia sanitaria en la Nación, o bien por razones de seguridad, también declarada por el Poder Ejecutivo. Corresponde también otorgar la licencia a un tercero que lo solicite en las condiciones señaladas; 4º y 5º, cuando haya patentes de adición o patentes dependientes. Los señores senadores saben que la patente de adición es la patente de perfeccionamiento. Es decir, aquel que mejora con un nuevo invento un invento anterior tiene el derecho a exigir que se le otorgue la patente del invento anterior a los efectos de que el nuevo invento pueda ser desarrollado. Asimismo, la patente dependiente le da al inventor del segundo invento el derecho a exigir la utilización y producción del primer invento, sin el cual este segundo no podría ser utilizado.

6º Pero el punto en discusión, señor presidente, respecto de los usos que se le puede dar a la patente sin autorización del titular, es el derecho que tiene un tercero con capacidad económica y técnica, que haya solicitado al titular de la patente el derecho a obtener la licencia para producir ese invento, que haya negociado las condiciones de producción y no haya arribado a un acuerdo con él. Si no hay acuerdo, si se frustra la posibilidad de que el titular de la patente y el tercero —que por lo general van a ser un laboratorio extranjero y un laboratorio nacional— lleguen a un acuerdo comercial para que este último pueda realmente tener la licencia para la producción de ese invento, el INPI —Instituto Nacional de la Propiedad Industrial— “deberá”, y no “podrá”, como sostiene el despacho del justicialismo, otorgar la patente fijando la remuneración adecuada a la que hace referencia el GATT, previa audiencia de conciliación entre las partes. Además, el fallo del INPI deberá ser recurrible ante la Justicia.

Todo esto está expresamente determinado en los distintos incisos del artículo 31. Por eso decimos que aquí existe una licencia semiautomática: primero, debe agotarse la negociación entre las partes; segundo, debe haber un ofrecimiento con condiciones razonables; tercero, el INPI invariablemente otorgará la patente, fijará la remuneración, que estará entre un dos y un seis por ciento —sobre lo cual voy a hacer luego una

digresión—, deberá existir una audiencia de las partes, y toda decisión que adopte en este caso el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial será apelable ante la Justicia.

Nosotros establecemos el piso del dos por ciento y el techo del seis por ciento porque éste es uno de los argumentos que consideramos que se debe emplear para evitar escaladas de precios nada menos que en los medicamentos, que son, a nuestro juicio, bienes sociales que requieren del Congreso la máxima custodia. Y ese dos y seis por ciento no son caprichosos, señor presidente. Ya en el proyecto que ha servido de base a nuestro despacho, el del senador Ricardo Lafferrière, se establecía la certeza de un mecanismo para determinar ese “royalty” que el GATT prefiere llamar “remuneración adecuada”. Era un “royalty” flotante que quedaba en manos de una autoridad judicial o administrativa.

Además nos basamos en un sistema que fue novedoso en el mundo, el sistema canadiense, por el cual se establecía la obligatoriedad de un “royalty” fijo del cuatro por ciento sobre el precio final de los medicamentos. Este dinero iba al bolsillo del inventor como un premio a su investigación.

No compartimos la redacción que le ha dado a este tema el despacho de mayoría, porque al establecerse que “podrá otorgar” la autorización para la producción de ese invento, está dejando en el INPI la llave del monopolio. Porque si el INPI decidiera no otorgar ese derecho al tercero para fabricar o reproducir ese invento, estaríamos delegando en un organismo del Estado la facultad de determinar que haya o no exclusividad en la producción de un fármaco.

Nosotros protegemos al inventor, señor presidente, y lo reitero para aquellos que sostienen que representamos un pensamiento retrógrado o que estamos amparando la piratería intelectual, como ligeramente se ha expresado en una solicitud reciente; en efecto, protegemos al inventor, que va a poder explotar su obra por veinte años, y además, si hay un tercero que en las exigentes condiciones del artículo 31 a) del GATT puede fabricar ese invento, entonces el inventor tiene garantizada una rentabilidad que va a estar entre el dos y el seis por ciento del precio final de ese producto medicinal.

En otro orden sostenemos, señor presidente, con algunas diferencias con el despacho mayoritario, la explotación local del invento. Pensamos que el titular de la patente debe explotar su invento en el territorio del país, de tal modo que

queda obligado a fabricarlo en la Argentina o en la unión aduanera, mercado común o zona de libre comercio que integre la Argentina. En este caso, se cumple con este requisito fabricándolo en algunos de los países que integran el Mercosur.

Además, señor presidente, hay algo que nos merece especial preocupación y sirve de valioso antecedente. En la hermana República de Chile se sancionó hace tres años una ley que modificaba el régimen de patentes, que incluía una protección al inventor de productos farmacéuticos, pero no incluía la cláusula de producción local, tal como hoy lo estamos reclamando para nuestro país. En Chile omitieron la incorporación de esa cláusula y, en menos de un año, se vieron los resultados, ya que los laboratorios internacionales prefirieron producir sus productos en sus casas matrices e importarlos. De tal modo que en un año y medio Chile vio cómo abandonaban su país las empresas Bayer, Ciba-Geigy, Schering y Pfizer; cuatro laboratorios que se fueron porque la ley les permitía importar los productos de cuyas patentes eran titulares.

La diferencia que tenemos con el bloque justicialista radica en un agregado final de la norma pertinente del despacho del bloque mayoritario por el cual se establece una nueva facultad del INPI —no soy amigo de que el Congreso, delegue tantas facultades legislativas a funcionarios cuando están en juego grandes intereses económicos—, por la cual podrá admitir excepciones cuando la razonabilidad económica y técnica así lo indique. De tal modo que será el INPI el que permita liberar un laboratorio extranjero de la obligación de fabricar en la Argentina y permita que ese producto se comercialice en nuestro país por vía de la importación.

Con nuestra propuesta en cambio procuramos quebrar el proceso recesivo industrial en la Argentina llamando a inversores extranjeros para que patenten sus inventos aquí. Bienvenidos sean por traer la tecnología a nuestro país, pero además que con ello generen actividad económica y mano de obra.

Sé que sobre este punto hay posiciones encontradas respecto a la interpretación del artículo 27, inciso 1, del GATT. Se sostiene que esta norma no habilita esta cláusula de fabricación nacional. Pero también debo decir que hemos leído y escuchado muchos argumentos que permiten pensar que ese artículo del Tratado del GATT indica la posibilidad de que la Argentina imponga la cláusula a la que estamos haciendo referencia. Si algún senador tiene alguna duda al

respecto, queda la posibilidad de que a partir del 1º de enero del año que viene cuando comience a funcionar la Organización Mundial de Comercio que contará con un órgano de solución de diferendos, cualquier conflicto que se plantee respecto de la interpretación de las normas del GATT sea resuelto en el ámbito adecuado, en el cual estarán representados todos los países.

° En materia de plazo de transición no hemos titubeado en incorporar el máximo permitido por el GATT. Este acuerdo multilateral de comercio en su artículo 65 prevé un plazo máximo de diez años. Y son muchos los argumentos que al respecto vamos a dar, porque en este caso hay una diferencia nada menos que de cinco años con relación al dictamen del justicialismo.

En primer lugar, no veo por qué se nos quiere privar de un derecho que han tenido casi todos los países del mundo cuando han modificado su legislación en materia de patentes. Países desarrollados y subdesarrollados utilizaron, sin excepción, un plazo de tiempo para amortiguar el efecto que significa el cambio abrupto de una legislación a otra, con el consiguiente impacto negativo que ello causa sobre la industria.

España estableció un plazo de transición de seis años. Los países escandinavos dispusieron de diez años a partir de la respectiva ratificación del Convenio Europeo sobre Unificación de Derecho de Patentes. Así fue entonces como Dinamarca tuvo en vigencia una ley de patentes en 1983. Por su parte, Finlandia todavía no tiene en vigencia su ley de patentes, que recién va a comenzar a regir en 1995. Suecia la tuvo en 1978 y Noruega hace apenas un año y medio, en 1992.

Otros plazos de transición fueron los siguientes: en Austria, ocho años; en Grecia, seis años —el sistema patentista comenzó a regir el año pasado—; Portugal, cinco años. En 1991 Chile aprobó una ley de patentes en la que se previó un año de transición.

Además, a quienes consideren que es exagerado establecer un plazo de transición de diez años para la entrada en vigencia de esta ley debo decirles que desde el momento mismo en que se sanciona esta ley queda abierto el registro para patentar inventos. Esto significa que si esta ley se aprueba el lunes, el martes estará abierto el registro para patentar inventos, los que quedarán protegidos recién dentro de diez años. Y diez años no es tiempo excesivo, señor presidente, porque desde que se solicita la inscripción de un invento en el registro respectivo transcurren no menos de cinco años, según nos han expresado integrantes de los laboratorios na-

cionales y extranjeros, hasta que el producto logra efectivamente ser colocado en el mercado. En esos diez años está incluido el tiempo que insume el periodo comprendido entre la solicitud y el otorgamiento de la patente, que no es inferior a tres años de trámite administrativo.

Doy el caso de los Estados Unidos, donde la vigencia de la patente en materia de medicamentos es de diecisiete años, porque admiten que desde la solicitud hasta el otorgamiento hay tres años de trámites administrativos, que deben descontarse del término de duración de la patente, después viene la prueba "in vitro", la experimentación en animales y en humanos, lo cual —reitero— termina por consumir más de la mitad de esos diez años que estamos solicitando como transición.

Otro argumento en favor de la transición —pongo especial énfasis en esto porque deseo que el bloque justicialista, cuando tratemos en particular este tema, revea el exiguo plazo de transición que ha previsto en su norma— es el siguiente. En el GATT hay muchos plazos. En el capítulo de propiedad intelectual figuran diferentes plazos para distintos casos y circunstancias, para aplicar las leyes referidas a ese punto. Pero también existen plazos para reducir subsidios, esos subsidios que conspiran contra la posibilidad de la Argentina para exportar sus productos agropecuarios. Los señores senadores deben tener en claro que en el mismo acuerdo del GATT los países desarrollados se han comprometido a tomar un plazo de seis años —fijense el plazo— no para eliminar, sino para reducir los subsidios sólo en un 36 por ciento.

La misma generosidad, por decirlo de algún modo, que han tenido los Estados Unidos y los países desarrollados para establecer un plazo de seis años para reducir solamente en un 36 por ciento los subsidios debe estar en consonancia con el plazo de transición máximo que el GATT, firmado por los mismos Estados Unidos, Japón, Francia e Inglaterra, le da a la Argentina, poniendo a su alcance dicho término, al cual no podemos renunciar.

Por otra parte, señor presidente, coincidimos con la irretroactividad de la ley. Entendemos que esta norma no puede aplicarse a los productos que ya están en el mercado, como reza el artículo 37 del dictamen de la mayoría. Pero estamos en desacuerdo con la instauración de lo que los americanos llaman el *pipe line*, que figura en el artículo 106, por el cual el registro de patentes o de invenciones no se abre al día siguiente de la sanción de la ley sino que el plazo

se retrotrae a dos años atrás, de tal modo que a partir del comienzo de la vigencia de la ley comenzarán a tener validez no solamente los inventos que se hayan registrado desde el tiempo de su sanción sino también todos aquellos que hayan sido patentados en los distintos lugares del mundo hasta dos años antes, lo que por supuesto hace mucho más grave el impacto que va a tener el cambio de legislación en materia de precios, toda vez que va a ser mayor la cantidad de medicamentos que van a estar sometidos a este régimen.

En lo referente a los requisitos para obtener una patente, cuáles son los objetos no patentables y el procedimiento de otorgamiento de la patente, la definición de los modelos de utilidad y sus límites, la nulidad de la patente, la violación de los derechos conferidos por la propiedad de los investigadores y de los inventores como de los modelos de utilidad y las invenciones durante la relación laboral son todos temas importantes que aparecen a lo largo de los ciento treinta artículos que componen nuestro dictamen. Todo ello, además de la propia organización del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial con su oficina de patentes.

Evidentemente, abordar todos estos temas nos llevaría muchas horas de debate en general, razón por la cual nuestras reflexiones sobre ellos quedará reservada para el tratamiento en particular.

Debe quedar en claro que vamos a modernizar una legislación que tiene más de un siglo de vigencia. Hemos encontrado un delicado equilibrio entre el incuestionable derecho que tiene el inventor, la protección de la salud de los argentinos, la defensa de la industria y las necesarias inversiones industriales que requiere el país.

Y voy a explicar por qué. Protegemos al inventor, que va a tener derecho a explotar su obra por veinte años y que, en el caso de que haya terceros que reproduzcan su invento, tendrá derecho a una remuneración adecuada. Protegemos la salud de los argentinos imponiendo un régimen que impide el descontrol en los precios al evitar toda forma de monopolio en la fabricación de esos productos. Además, en el caso de ser aprobada una remuneración adecuada en los términos del GATT, la misma no superaría el 6 por ciento. Defendemos la industria nacional, señor presidente, a la que le reprochamos los crecientes incrementos de precios y no haber invertido lo suficiente en inventos como para ponernos a la altura de los países con patentes.

Pero le damos diez años de transición para que se adapten a un nuevo régimen legal y además se les informe el "royalty" o la remuneración que se determine, para el caso de fracasar la negociación privada entre las partes. La industria nacional también deberá promover la investigación, si es que realmente desea obtener altos niveles de rentabilidad.

Protegemos las inversiones en el país, señor presidente, pues el laboratorio que desee patentar en la Argentina tendrá que fabricar en la Argentina. Este, a nuestro juicio, ha sido un procedimiento dentro del marco del GATT para atraer las inversiones que necesita nuestro país y para evitar el proceso que mencioné en relación a la República de Chile.

Quiero decir algunas palabras finales para definir el clima en el que se ha desenvuelto nuestro trabajo parlamentario. No negamos a ningún país el derecho a efectuar reclamaciones comerciales en el ámbito que corresponda, pero respecto del tema de patentes y a lo largo de nuestra evaluación parlamentaria de más de un año y medio, nuestro trabajo ha sido objeto de públicos comentarios y opiniones por parte de los embajadores Todman y Cheek, de los Estados Unidos, así como también del secretario de Comercio de ese país, Michael Kantor...

Sr. Alasino. — A ver si después tenemos una cuestión diplomática. *(Risas.)*

Sr. Genoud. — ...que lesionaron el derecho de nuestro Parlamento a legislar con plena autonomía. En declaraciones periodísticas se señaló que el trámite que se había impreso a la ley de patentes en el Senado era un trámite dilatorio, calificación que consideramos injusta a la luz del trabajo que hemos realizado durante un año y medio, reforma constitucional mediante, teniendo en cuenta el tiempo que insumieron los importantes debates que llegaron, incluso, a ocupar la atención casi exclusiva del Congreso de la Nación durante muchos meses.

Después se anunció —lo hizo uno de los embajadores mencionados— la aplicación terminante de la sección 301 de la ley de comercio de los Estados Unidos, para que la Argentina fuera incluida en la lista prioritaria de países extranjeros y de ese modo hacerla pasible de sanciones comerciales.

Todo ello no condice con el comportamiento que ha tenido el Senado de la Nación en este tema, que actuó siempre con gran responsabilidad y prudencia, como está acreditado en la obra que se ha impreso y donde está transcripto el esfuerzo que cada uno cumplió, acompañado

por todas las entidades, laboratorios nacionales, extranjeros, decanos de universidades, entidades que agrupan a médicos, a bioquímicos, como lo he señalado anteriormente.

Además le dimos participación al periodismo, que tuvo un protagonismo activo durante todas las audiencias públicas. Y también, señor presidente, por iniciativa de los presidentes de bloque, invitamos a los funcionarios de las embajadas que tenían interés en conocer el trámite parlamentario. Debo decir que el trato personal que tuvimos con esos funcionarios de embajadas, de quienes no escuchamos ninguna opinión improcedente, fue en todo momento cordial, y no tenemos para ellos reproche alguno.

Por eso, me limito al cuestionamiento de los funcionarios mencionados porque, de alguna manera, lastimaron la autonomía con que este Congreso de la Nación abordó este tema desde hace un año y medio, el que seguramente habrá de concluir en los próximos meses.

Hoy le volvemos a decir enfáticamente al país que ni los Estados Unidos ni ningún otro Estado puede reclamarnos más de lo que nos exige el GATT. Estamos cumpliendo con la comunidad internacional sin apartarnos un ápice de lo que formará parte de ese acuerdo a partir de su ratificación, que fue ley para ciento doce países del mundo. Si existe algún punto de controversia respecto de nuestra ley que puede provocar aparentes o reales conflictos con alguna norma del GATT, iremos a la Organización Mundial de Comercio a partir del próximo 1º de enero, nos sentaremos ante el Órgano de Solución de Diferendos y, si fuera necesario, revisaremos esta norma para ajustarla a lo que estableció la comunidad internacional por medio de un acuerdo del que participó la Argentina no sólo a través del gobierno de Menem sino también del gobierno radical del doctor Raúl Alfonsín al iniciarse sus primeras negociaciones en la ciudad de Montevideo.

Nadie nos puede privar del derecho de contar con una ley que impida el monopolio en la fabricación de medicamentos. Por eso, digo a quienes han publicado una solicitada señalando que los senadores encubrimos o amparamos la piratería intelectual que más sincero hubiese sido que en esa solicitada dijese que pretenden el monopolio en la fabricación de fármacos en la Argentina. Estamos en la búsqueda de un sistema intermedio que le reconozca al inventor todos los derechos necesarios, de los que careció en la legislación vigente por circunstancias que no quiero reiterar.

Además, nadie nos puede privar de tener una transición en la aplicación de una ley, de la que gozaron todos los países desarrollados o no para ingresar en el régimen patentista.

Cuando se nos exige tanto en materia de patentes intelectuales, parecería como que existiese una especie de amnesia colectiva respecto del grave perjuicio que nos ocasionan los abrumadores subsidios agrícolas que los países desarrollados han instalado en modo creciente sobre sus productos agropecuarios, que obturan la posibilidad de nuestras exportaciones y con ello impiden nuestro desarrollo.

Hoy se nos reclama la sanción de una ley de patentes de características absolutas, pero pregunto si igual generosidad han tenido los países con grandes ingresos cuando para reducir sólo el 36 por ciento de los subsidios han decidido tomarse un plazo de seis años.

Nuestro bloque cree en la necesidad de mantener fluidas y cordiales relaciones con los Estados Unidos, por las que seguiremos abogando, pero ellas sólo pueden fundarse en el respeto recíproco entre ambas naciones.

Estamos legislando para cumplir con la comunidad internacional. Pero consideramos que debemos cumplir también con nuestro país. Como siempre, quedamos a la expectativa de la actitud que adopte el Poder Ejecutivo a la hora de promulgar esta ley, esperando — algunas veces, lo hemos hecho en vano — que se respete la voluntad de los legisladores de la Nación. ¡Muy bien! (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Menem). — Si no hay objeciones, quedaría cerrada la lista de oradores con los once señores senadores que están anotados hasta este momento, de los cuales dos ya han hecho uso de la palabra.

Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Storani. — Señor presidente: en realidad, siento una íntima satisfacción después de haber escuchado a mi colega, amigo y presidente de mi bloque informar el dictamen de la minoría, que suscribo, por su erudición y su brillante discurso, el que ha comprendido toda la gama de capítulos, lo que podría relevarnos de decir una sola palabra más pues está casi todo dicho.

Cuando me decidí a presentar un proyecto de ley de patentes de invención, trabajamos arduamente con un grupo de colaboradores que me permitieron acompañar una iniciativa realmente importante que ha sido tenida en cuenta por las comisiones de Industria, de Ciencia y Tecnología, de Comercio y de Asistencia Social y Salud

Pública, las que han producido los dictámenes correspondientes transcribiendo literalmente algunos de los puntos que yo señalaba en mi proyecto. Desde luego que esto me satisface personalmente, pero no es éste el punto importante.

Lo cierto es que después de haber escuchado las palabras vertidas por el señor senador por Mendoza debo decir que siento una intensa emoción porque nunca en mi vida de legislador, que no es corta — he tenido el honor de integrar ambas Cámaras —, tuve la oportunidad de revisar una ley con tanta antigüedad como ésta, que data del año 1864 y que lleva el número 111, la que se mantuvo enhiesta a través de ciento treinta años, con avatares muy diversos, búsquedas de remodelación y cambios en muy distintas oportunidades, cosa de la que ya se ha dado cuenta en diversos proyectos de ley; incluso, en alguno que tuvo sanción de Diputados pero no fructificara en el Senado, como bien se recordara.

Esta ley 111 establece en su artículo 4º, que es el que se quiere modificar, la imposibilidad del patentamiento de las invenciones farmacéuticas entonces denominadas especialidades farmacéuticas, que son las que ahora llamamos especialidades medicinales o patentes de invención, como títulos originales del derecho a la propiedad intelectual.

Esta norma ha vivido estos ciento treinta años para dejarnos la posibilidad de desarrollar una industria nacional de suma importancia. Contamos con una gran cantidad de laboratorios de capitales netamente nacionales, que son titulares del 54 por ciento del mercado nacional — que no es chico — y que arroja una cifra de facturación de más de 3 mil millones de dólares al año.

Bien se dijo recién que es el tercer instrumento de comercialización en la Argentina, después de las industrias mencionadas anteriormente, como la automotriz y la del petróleo.

Pero también hay que decir que en el mundo la industria de las especialidades farmacéuticas ocupa un relevante lugar según los montos de comercialización y facturación, llegando durante los últimos años a una cifra superior a los 100 mil millones de dólares. Esto implica que a veces la fabricación de las especialidades medicinales supera incluso en importancia a los negocios vinculados con los derivados del petróleo. Quiero decir que estamos frente a un tema de singular importancia.

Este asunto en el que esta tarde se sumerge el Senado para revisar una ley de ciento treinta

años de antigüedad —cosa que hago, repito, con emoción— implica políticamente una decisión y una definición de primerísima magnitud.

Minutos antes de concurrir al recinto, recordaba hoy una intervención personal del 27 de junio de 1990, durante el primer año de ejercicio de mi mandato como senador de la Nación. Refutaba —a través de un proyecto de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores que fundara ese día para pedir su tratamiento sobre tablas y luego su preferencia a la Comisión de Asuntos Constitucionales— la presencia en la República Argentina de la subsecretaria de Comercio Exterior de los Estados Unidos, la señora Carla Hill, que en ese momento representaba al gobierno del presidente George Bush, que venía como continuidad de la presidencia de Reagan.

La señora Carla Hill, utilizando las más diversas tribunas —las del Club Americano, conferencias de prensa, etcétera—, se dirigió duramente al Parlamento argentino instándolo a cumplir de una vez por todas con el compromiso que había asumido en los Estados Unidos algún ministro de nuestro país —ya voy a decir quién y cuándo— para que en el curso de veinticuatro meses de gobierno del presidente Menem se tuviera aprobada una ley de patentes de medicamentos.

Esto fue algo que realmente nos molestó sobremanera, porque vulneraba evidentemente los fueros del Poder Legislativo, que ya estaba abocado al estudio de algunos de los proyectos presentados. Pero iba mucho más allá porque violentaba la propia soberanía nacional y me obligaba, en ese proyecto de interpelación, a mencionar la ley 16.462, sancionada durante el gobierno del doctor Illia —conocida como ley Oñativia—, que fijaba precios máximos a los medicamentos.

Mucho se dijo en aquel entonces; incluso, que esa fue una de las causas del derrocamiento del ex presidente Illia. Porque ahora recuerdo —y lo dije entonces aquí—, que en el Senado de los Estados Unidos se estudió y se discutió esa ley argentina en un acto flagrante de violación del principio de no intervención y de libre determinación de los pueblos; en un acto flagrante también de violación de la soberanía argentina, porque un cuerpo extraño —por más importante que sea el Senado de los Estados Unidos— nada tiene que hacer con el tratamiento en su seno, criticándolo, de una ley emanada del Congreso de la Nación Argentina.

Bien, el Senado no aprobó en ese momento el proyecto de interpelación al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, quien tenía que

comparecer ante la Cámara. El fue quien había realizado la afirmación en los Estados Unidos de que la norma debía estar sancionada en el término de veinticuatro meses. Me refiero al entonces canciller Domingo Cavallo.

Pero hay más. Esa funcionaria estuvo en el Paraguay en una reunión de la Organización de Estados Americanos y allí manifestó públicamente, ante todos los países de América, la decisión del gobierno de los Estados Unidos de llevar adelante la presión necesaria para que el resto de los países americanos que todavía no habían sancionado una ley de patentes de medicamentos, lo hicieran a la brevedad y cuanto antes.

Nosotros —bien se ha dicho recién— en esta materia tenemos vinculada nuestra posición a la ronda Uruguay del GATT. Durante todo este tiempo se ha desarrollado; además, un brillante trabajo en el seno de la Comisión de Industria y en el de las demás comisiones que acompañaron el trámite de las audiencias públicas realizadas durante un año y medio, según precisó el senador Genoud, llevadas a cabo en el país y que fueron altamente instructivas para todos. En ellas intervinieron, además, los firmantes de la solicitada publicada hoy criticando al Senado de la Nación. Participaron ampliamente haciendo uso de la palabra todas las veces que quisieron; sin restricción alguna, en un marco de libertad absoluta como seguramente en ninguna otra parte del mundo han podido hacerlo.

Esto quiere decir que hemos cubierto todos los recaudos y requisitos para afirmar varios ejes importantes de este dictamen que apoyamos, respecto del cual estamos tratando de ver si la Cámara lo considera como aceptable o, cuanto menos, en su mayor parte aceptable, cuando llegue la hora de la votación en particular.

Digo esto porque uno de los ejes fundamentales es la defensa de la industria nacional. Además, el respeto a todos en lo que hace al derecho que tienen de ejercer el patentamiento de sus moléculas, cuando las hayan descubierto.

Es así que el derecho a la propiedad intelectual aparece como indiscutible, porque de todos los derechos que marca la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 17, hay que pensar que este derecho a la propiedad intelectual es nuevo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Faustino M. Mazzucco.

Sr. Storani. —Es un derecho inmaterial; es un derecho que lleva ínsito inexorablemente el principio de la creatividad. Creación es derecho

a la propiedad intelectual y es esta circunstancia la que caracteriza al que logra inventar una molécula farmacéutica que implique la creación de una droga que luego dará lugar a un medicamento que se comercializará. Naturalmente, este derecho tiene que ser reconocido.

En esta materia, señor presidente, estamos modernizando la legislación colocándonos, sin ninguna duda, en una situación de valor histórico porque hasta hoy en la Argentina esto no era bien reconocido. Es verdad también que esto conlleva una definición inexorable en materia de antimonopolio porque resulta ser que los países que tienen leyes estructurales contra los monopolios y los *trusts* allende los mares pretenden ejercer presiones sobre las legislaciones que aparecen para coronar las posibilidades de ejercicio del monopolio para comercializar productos como en este caso. Y aquí se ha perseguido todo el tiempo la búsqueda del reconocimiento de las patentes de invención de especialidades medicinales con el afán de lograr el monopolio de las mismas, reconociendo que el derecho que tiene el inventor a explotar su invento, en esta materia o en cualquier otra, es consagrado por la Constitución Nacional.

Pero hay un interés por encima de esto, que es el interés general del país, nada menos que en el más alto y excelso de los bienes que puede manifestar el hombre, como es la salud y el derecho a la misma.

Cuando en 1864 se discutió la ley 111, al tratarse el artículo 4º, la Cámara le exigió al senador Navarro —creo que representaba a la Capital Federal— explicaciones respecto de la exclusión específica de las especialidades farmacéuticas en el texto. Y el senador Navarro dio simplemente el siguiente argumento: porque el derecho de propiedad, para ser ejercido en la plenitud, como pretenden algunos, no necesita más que lo que dice el artículo 4º de esta ley 111. Así que el interés superior de la población está por encima de los intereses sectoriales, de grupo o comerciales. Por importantes que ellos fueren nunca pueden estar por encima del interés general, que es la salud del pueblo argentino.

Y el senador Navarro ponía como ejemplo la norma en que se inspiró la ley 111, que es una ley francesa de 1844, es decir veinte años antes. La ley francesa, señor presidente, establece también la excepción de las especialidades farmacéuticas en su articulado. De forma tal que no era una innovación caprichosa del Senado de la Nación Argentina de entonces, sino que era la consagración de la experiencia de los países cen-

trales, que quedaba patentizada también en la legislación francesa.

Vale la pena decir que esta historia de las patentes de las especialidades medicinales se inicia muy allá por el año 1300 y pico, en el siglo XIV, XV y XVI, principalmente en Alemania, luego en Francia y en Inglaterra con los reyes de ambos países, que otorgaban privilegios a quienes inventaban determinadas cosas. Los privilegios se extendían a todo el término de la vida e incluso a sus descendientes porque a veces eran mercedes que los reyes o los príncipes alemanes otorgaban a sus amigos para que mejoraran o salieran de una situación económica difícil, pero había una invención de por medio.

Lo cierto es que esta larga historia de las patentes y los patentamientos de las invenciones aparece luego legislada, fundamentalmente, en los Estados Unidos a partir de 1815 y en otros países de América también en el siglo XIX.

Quiere decir que no estamos frente a un hecho común de una ley cualquiera. Aun cuando todas ellas tienen mucha importancia, ésta es una ley trascendental, de tanta trascendencia que yo diría que va a tener mucha repercusión, señor presidente. Porque aun en América latina, a pesar de la presión ejercida de todas formas por el gobierno de los Estados Unidos, existen países como Brasil, en donde el proyecto ya contaba con la sanción de la Cámara de Representantes y ha sido retirado, que se encuentra absolutamente impoluto en materia de legislación de patentes de invención.

También está el caso de Chile, que fue glosado hace un momento, en donde la desaparición de la obligatoriedad de la instalación en el país de las plantas de fabricación del medicamento patentado determinó que en el término de un año cinco laboratorios, que fueron enunciados aquí, desaparecieran de Chile y ahora exporten hacia ese país desde sus casas matrices, en Estados Unidos, con la ingente pérdida de las fuentes de trabajo para los obreros de la industria, bioquímicos, científicos e investigadores de la nación trasandina.

Es decir que hay que tener muchísimo cuidado en el tratamiento en particular de cada uno de estos artículos que vamos a sancionar esta noche, en lo que hace a la obligatoriedad que tienen las casas matrices que logren patentes de invención de medicamentos de instalarse en el país para producirlos allí durante el tiempo que determine la misma norma.

La obligatoriedad de la producción en el país conlleva no solamente el desarrollo de la tecno-

logía y la inversión en investigación, que debe asegurar la ley tanto para los laboratorios nacionales como para los de capitales extranjeros, sino que también estimula la transferencia de tecnología, por una parte, y la búsqueda de la investigación tecnológica en el avance científico correspondiente, por la otra.

Quiero decir que en este siglo, especialmente a partir de 1930; después de la revolución industrial, empezaron a aparecer algunos medicamentos de resonancia mundial que trajeron una verdadera revolución en el campo de la medicina, como son las sulfonamidas y la penicilina; habiéndose ya recordado a Sir Alexander Fleming, que fue su descubridor.

Y digo que trajeron una revolución en el campo de la medicina porque lograron triunfar sobre las enfermedades contra las que luchaban los profesionales de las ciencias médicas.

Pero a partir de allí se estimularon una enorme cantidad de otros descubrimientos, como la estreptomycin y la nicotina, con las que se pudo yugular y terminar con enfermedades crónicas que fueron verdaderos azotes para la humanidad, tal el caso de la tuberculosis, algunos tipos de lepras y otras clases de enfermedades crónicas.

Esto lo menciono para que nosotros rescatemos el concepto de que en el mundo el campo de la investigación científica y tecnológica vinculada con los medicamentos debe ser protegido, estimulado y, seguramente, también asegurado en el propio articulado de la ley.

Por ello es que con relación a las regalías o *royalties*, de que hablaba el señor miembro informante del despacho de la minoría, nosotros insistimos en los proyectos originales que establecen un *royalty* de entre un dos y un seis por ciento, que de ninguna manera es caprichoso, por cuanto la experiencia internacional y la legislación comparada demuestran que ésta es la cifra que mejor se acomoda a los efectos de evitar la copia y la piratería y, por supuesto, a los fines de la obtención de la patente a través del pago de las regalías correspondientes y de la utilización del medicamento patentado.

Este es un punto muy importante que personalmente considero fundamental para el futuro y que debe ser reglamentado correctamente en nuestro país para evitar que distorsionemos el mercado y la forma de fabricación de estos productos en la Argentina.

Otro de los puntos importantes que contiene este dictamen es el vinculado con el plazo de transición, que no puede ser menor que el que

se estipula en nuestro dictamen debido a que no hay tiempo suficiente para acomodar las circunstancias del traspaso de un régimen a otro. Por otra parte, tampoco puede ser menor la duración de la patente porque desde que se produce la intervención del instituto de patentamiento nacional hasta que se pone en marcha la fabricación transcurre un tiempo que se pierde y que se insurge dentro del plazo general de duración de la patente.

Estamos frente a un hecho realmente de mucha significación en la legislación argentina y debemos decir aquí que esta industria tiene una importancia muy grande, más allá de la facturación que ya he mencionado, en lo que hace a la ocupación de mano de obra. Las últimas estadísticas nos demuestran que en la Argentina trabajan de treinta y siete mil a cuarenta mil personas en la industria farmacéutica, de las cuales un cinco por ciento, por lo menos, son profesionales universitarios, y el resto es mano de obra muy especializada, lo cual significa que la Argentina tiene un lugar preponderante, en este aspecto, en el concierto de las naciones latinoamericanas.

Por otra parte, los laboratorios nacionales han logrado expandirse a países de América latina, especialmente mediante casas subsidiarias que han instalado fábricas en esos lugares o han sido exportadores, en buena medida en estos últimos años, de varias decenas de millones de dólares al año en productos fabricados en la República Argentina.

Estas consideraciones demuestran que se trata de una industria realmente promisorio y que debemos defender a toda costa dado que los intereses que están dando vuelta habitualmente buscan ventajas unilaterales.

Tampoco puedo pasar por alto las expresiones que hemos tenido que soportar en estos últimos años de parte de las distintas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América que con alguna torpeza diplomática, diría yo, se han excedido de los límites de lo aceptable para invadir, más allá de lo censurable, el terreno de lo que puede significar la violentación de la soberanía nacional y de la autodeterminación, sobre todo en relación al Poder Legislativo argentino y especialmente con respecto a esta Cámara, que ha sido mal calificada en estos últimos tiempos por el propio embajador de los Estados Unidos en el sentido de que había lenidad para el tratamiento del tema.

Lo que ha ocurrido es que, como pocas veces, este proyecto de ley que hoy tenemos en consideración ha sido estudiado enjundiosamente.

Por otra parte, un año y medio de audiencias públicas a las cuales hemos asistido a la mayoría, ha servido no sólo para ilustrarnos y escuchar todas las opiniones sino también para calibrar perfectamente bien cuál es la posición de los distintos sectores controvertidos en la Argentina y que están en juego en este tema. Me refiero no sólo a los laboratorios nacionales y a los de capitales extranjeros, sino también a la opinión de la Confederación Médica de la República Argentina, la Confederación de Farmacéuticos y Bioquímicos, la Unión Industrial Argentina, la Confederación General de la Industria, la Confederación General Económica, etcétera. Es decir, nadie ha dejado de opinar aquí, ni siquiera el periodismo que ha tenido amplio acceso y divulgación. También han sido invitados representantes de las diversas embajadas de los países centrales, que han concurrido, y muchos de ellos con gran entusiasmo, a muchas de las sesiones públicas tomando debida nota de que se estaba debatiendo en el seno del Senado de la Nación Argentina un proyecto de real trascendencia.

Quiero dejar sentado, señor presidente, que mi espíritu al presentar este proyecto era con la esperanza de que nuestra defensa de la industria nacional no pasase por el favoritismo a los laboratorios de capitales nacionales sino por la ecuanimidad y equidad absoluta que debe tener este cuerpo frente a todas las industrias instaladas en el país para que todas se sientan garantizadas por la legislación y la democracia argentinas, que se ejercita en plenitud. Además, lo hice con la esperanza de que el aporte que podríamos hacer desde la Cámara de Senadores de la Nación nos colocase en un terreno de expectación frente a Latinoamérica porque hay varios países que en estos momentos no tienen ley de patentes de invención, y mucho menos de medicamentos, como Paraguay, Uruguay y Brasil, como señale recientemente, aunque es cierto que hay otros países —Chile es un caso— que desafortunadamente incurrieron en alguna legislación que ha resultado negativa. Y también hay legislación comparada que nos enseña en países centrales que el camino andado no es el mejor. Por eso es que este proyecto es muy completo y me animó a calificarlo como un proyecto que difícilmente alcance a ser superado en lo que hace a la predisposición que tiene de enmarcar perfectamente bien toda la gama de actividades que rodea a esta industria y de vincular fundamentalmente los derechos de quienes son los inventores y el derecho a la propiedad intelectual.

Cuando la subsecretaria de Comercio Exterior de los Estados Unidos exponía en Buenos Aires

hablaba de la vulneración del derecho a la propiedad intelectual como algo intolerable por parte de ese país. Bueno, aquí está la respuesta. Hemos reconocido este derecho como una cuestión inalienable e, incluso, si no está explícito en la Constitución está ínsito en su propio espíritu cuando consagra en sus artículos 14 y 17 todos los demás derechos de que gozan los habitantes de la Nación Argentina.

Con estas palabras, señor presidente, dejo expresada mi opinión suscribiendo íntegramente el dictamen que fue informado por el miembro informante de mi bloque, el señor senador Genoud.

Sr. Presidente (Mazzucco). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Señor presidente: soy consciente de la trascendencia nacional e internacional de este debate.

Por eso mismo, sin ánimo de abundar en lo que ya han solicitado y explicado suficientemente los miembros informantes, quiero destacar algunos aspectos de este proyecto que fundamentan la posición que ha asumido mi bancada. Por eso, señor presidente, seré sumamente breve.

En primer lugar, quiero que quede claro que este honorable cuerpo, luego de otorgarle estado parlamentario al proyecto del Poder Ejecutivo que hoy nos ocupa, ha consultado con todos los sectores interesados en tan delicado tema.

Considero a ésta una tarea digna de destacarse ya que a través de las numerosas audiencias públicas que mantuvo la Comisión de Industria del Senado de la Nación se pudo compulsar la diversidad de intereses que se mueven en torno a este tema y, con ello, mostrar una vez más las ventajas del juego institucional en el que tanto los poderes del Estado cuanto los representantes sectoriales pueden discutir abiertamente y en forma constructiva sus puntos de vista. Esas reuniones, sin duda, han insumido tiempo, más del que seguramente esperaban algunos ansiosos que recurrieron a todo tipo de presiones para acelerar el tratamiento de este proyecto. Pero precisamente por la importancia del tema legislado, las consecuencias que producirá la nueva ley en nuestro país y en su relación con otros no podía pensarse en una actitud precipitada e inconsulta. Los cuerpos deliberativos, señor presidente, aquí y en todas partes del mundo insumen tiempo.

En segundo lugar, quiero destacar el valor simbólico que encierra esta ley para nosotros y para todos aquellos que desde lejanas latitudes siguen de cerca el proceso argentino. Digo esto,

porque con el paso que estamos propiciando la Argentina deja atrás, también en este tema, el aislamiento que por décadas ha constituido más que una estrategia deliberada, una especie de actitud mental. Si queremos entrar en el primer mundo, del que tanto se habla, hemos de adoptar los criterios propios de los países desarrollados.

Una ley de patentes elaborada con sensatez resulta hoy imprescindible para atraer las inversiones extranjeras que tanto necesitamos. Pero con ser ello importante, no es todo.

La ley que propiciamos propende a mejorar la competencia, utilizar el potencial científico y tecnológico del país, beneficiar al consumidor y tender, por último, a un sostenido desarrollo económico y social. Precisamente en el proyecto se han privilegiado las disposiciones orientadas a fomentar las inversiones en materia de investigación. No debemos olvidar que en nuestro país esas inversiones muestran un nivel tan bajo —alrededor del 0,5 por ciento del Producto Bruto Interno— que no se compadece con la vocación de modernidad que tenemos los argentinos.

Más aún, si comparamos esa cifra con la de países similares a la Argentina, nos encontramos con que en ellos el nivel de inversiones en investigación supera el 1 por ciento mientras que en los países desarrollados supera el 3 por ciento.

En la Argentina el tema de la investigación ha sido motivo de recurrentes discusiones. No quiero sumarme a ese eterno cuestionamiento que se hace habitualmente desde fuera del ámbito de la investigación. Recordemos que investigar es nada más y nada menos que desarrollar las ciencias, y en esto me parece oportuno citar a nuestro Premio Nobel, doctor Bernardo Houssay, quien al referirse justamente a este tema ponía por ejemplo el desarrollo científico de los Estados Unidos, desarrollo al que se había llegado no por ser un país rico sino porque "habían sido los primeros en comprender la importancia de promover la ciencia".

Puedo decirle, señor presidente, con mi mejor buena fe, que hemos querido que ese gran objetivo estuviera presente en este proyecto.

Por último, quiero destacar que las modificaciones que se efectuaron sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo han tenido por objeto salvar algunos errores materiales y, además, adecuar sus disposiciones a las cláusulas de los acuerdos de la Ronda Uruguay, del Acuerdo General de Tarifas y Comercio, GATT, formalizado con posterioridad a la redacción del proyecto del Poder Ejecutivo.

Asimismo entiendo que se introdujo una modificación necesaria para permitir dentro del Mercosur la coexistencia de países con protección arancelaria y sin ella. Esto evitará no pocos problemas de adecuación para los países que el 1º de enero del próximo año iniciamos una nueva era en materia de integración regional.

Finalmente, sé que la entrada en vigencia de esta ley en lo que respecta a los productos farmacéuticos y farmoquímicos ha provocado no pocas discusiones en el seno de la Comisión de Industria y es uno de los puntos de desacuerdo entre los dictámenes de mayoría y de minoría.

El proyecto, según el dictamen mayoritario, prevé a esos fines un plazo de cinco años, que considero más que razonable para que puedan producirse los ajustes y adecuaciones pertinentes. Me imagino que para los ansiosos ese plazo será demasiado extenso y para aquellos que buscan nichos de protección indefinida podrá parecer exiguo. Tal vez aquí, como enseñaban los clásicos, el proceder correcto esté también en el justo medio. Por eso he adherido a ese criterio.

Señor presidente: creo que este proyecto es un progreso respecto de la situación en que nos encontrábamos. Y creo, también, que debe ser considerado como un punto de partida.

A medida que la Argentina avanza por el camino de la globalidad del comercio y la economía y perciba con mayor claridad el juego estratégico de los países desarrollados, podrá perfeccionar sus propios instrumentos. Esto deberá hacerlo a la luz de sus reales intereses y no por presiones o reclamos provenientes de intereses ajenos.

De la experiencia que realice en los años venideros surgirá la consideración y respeto que pueda tener por parte de la comunidad internacional.

Proyectos como los que estamos analizando hoy están orientados en esa dirección. Por eso, señor presidente, he de dar mi voto afirmativo al dictamen elaborado por la mayoría.

Sr. Presidente (Mazzucco). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, bloque Autonomista.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente, señores senadores: sin ningún lugar a dudas, éste es un tema trascendente y una cuestión que insumió mucho tiempo al Honorable Senado. Existen pruebas evidentes de lo que acabo de manifestar en las varias audiencias públicas realizadas y en la acción de las distintas comisiones, sobre todo, de la Comisión de Industria, presi-

dida por el senador Genoud, que nos invitó permanentemente a participar de todas las reuniones.

Finalmente estamos tratando hoy la reforma a la ley 111, de patentes de invención, dictada en 1864 durante la presidencia del doctor Bartolomé Mitre. Sin duda, es un caso poco común en nuestra legislación, sobre todo teniendo en cuenta lo que es materia de la misma: la protección de los derechos del inventor, garantizada en el artículo 17 de la sabia Constitución de 1853, que no ha sido alterada por la última reforma en este aspecto.

Ninguna época en la historia ha alcanzado los increíbles logros tecnológicos y científicos como este siglo XX, cuyo final se vislumbra revolucionando las costumbres y multiplicando las posibilidades del progreso humano, impensables por cierto para quienes legislaron hace 130 años sobre esta materia.

No está de más recordar que lo que debatimos es una ley de patentes de invención y de modelos de utilidad, pues los enfrentamientos entre distintos sectores de la industria farmacéutica han hecho que el hombre común e incluso el periodismo, que ha participado activamente en las audiencias públicas y en los análisis que se han realizado, crea que la materia en debate se reduce sólo a un aspecto de la misma ya que la ley 111 reconoce sólo patentes de procedimiento pero no de producto. Precisamente son este tipo de patentes las que la nueva legislación incorpora luego de un lapso variable, que oscila entre el año 2000 en el dictamen de mayoría y el 2005 en el de minoría, a fin de posibilitar que la industria local se adapte a la misma.

Desde 1864 hasta la fecha se han presentado varios proyectos para reformar la antigua ley y adaptarla a los gigantescos cambios producidos en tan largo lapso.

El tema ha sido preocupación de mi partido, el Partido Autonomista, que a través de su representante en el Senado presentó el primer proyecto de reforma en 1986, a partir del retorno a la vida democrática, nuevamente presentado por el suscripto con mejoras en dos oportunidades, la última el 27 de septiembre de 1991.

Sin embargo, si bien varias de sus previsiones fueron receptadas en el dictamen en minoría que yo firmara, debe tenerse en cuenta que al tiempo de su redacción aún no había finalizado la Ronda Uruguay del GATT, ni se había elaborado el convenio referente a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio en el marco de dicho tratado, que en la parte II, sección V, se refiere a las patentes.

No es novedad para nadie que el proyecto de reforma que hoy tratamos tuvo siempre en su camino el polémico tema de los productos farmacéuticos, contra el cual se estrellaron los intentos de reforma anteriores.

Con el correr de los años, señor presidente, los escenarios políticos, tanto el local como el internacional, han variado sin duda alguna sustancialmente, e incluso se ha modificado la postura de alguno de los afectados por el cambio de legislación, ya que de una actitud que se oponía a cualquier cambio en la antigua ley, se ha pasado a otra que acepta la patentabilidad de los productos, pero en condiciones que permitan la supervivencia, —en condiciones de competencia— de la industria nacional.

En el plano internacional, el acta final que recoge el resultado de las negociaciones comerciales multilaterales producto de la Ronda Uruguay del GATT, iniciadas en 1986 y concluidas en 1993, sin duda alguna derivará en cambios profundos que comprenden la creación de la Organización Mundial de Comercio, que prevé un marco institucional común que abarcará el acuerdo general modificado en la Ronda Uruguay y todos los acuerdos e instrumentos concluidos bajo sus auspicios.

La organización citada tendrá como elemento principal una "Conferencia Ministerial", señor presidente, que se reunirá por lo menos una vez cada dos años y un "Consejo General" que actuará —y esto es lo importante— como órgano de examen de las políticas comerciales abarcadas por la Organización Mundial de Comercio.

En lo concerniente a las patentes existe una obligación general de respetar las disposiciones sustantivas del Convenio de París, incorporado a nuestra legislación por la ley 17.011, concediéndose además una protección durante veinte años mediante patentes a casi todas las invenciones, sean de productos o procedimientos en casi todos los campos de la tecnología.

Allí también se establecen condiciones detalladas para la concesión de licencias obligatorias o el uso del gobierno de patentes sin autorización de sus titulares en casos especiales. Asimismo se determina, en el caso conocido como "patentes cruzadas", que los derechos conferidos respecto de las patentes de procedimiento deben hacerse extensivos a los productos directamente obtenidos por dicho procedimiento.

Novedosa resulta sin duda la incorporación al acuerdo de la inversión de la carga de la prueba, que un tribunal puede ordenar al presunto infractor para que demuestre que no ha utilizado

el procedimiento patentado, lo que —dicho sea de paso— también se incorporó al NAFTA, en la parte sexta, capítulo XVII, artículo 1.709.

En lo concerniente a la aplicación del acuerdo se prevé un período de transición de un año para los países desarrollados para que adapten su legislación y procedimientos de conformidad con lo establecido en el acuerdo.

Ningún país estará obligado a aplicar sus disposiciones antes de un período general de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la Organización Mundial de Comercio. Los países en desarrollo y los que se hallaren en proceso de transformación de una economía de planificación central a una de mercado tendrán además un período de transición de otros cuatro años, al que se sumará un nuevo período adicional de cinco años si ese país amplía su protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no tenían dicha protección en su territorio, lo que lleva el plazo de transición a diez años para establecer esa protección, período que adopta el dictamen en minoría, que comparto.

No obstante, en los casos de productos farmacéuticos y de productos químicos para la agricultura se establece que esos países deben aceptar la presentación de solicitudes de patentes desde el comienzo del período de transición aunque ellas no se concedan hasta finalizado dicho período.

Sin duda, el sistema de solución de diferencias del GATT, que estableció el acuerdo ya mencionado, será un elemento clave en el orden comercial multilateral. Como sabemos, el GATT es un instrumento que tiene por función regir el comercio internacional. Lo que hasta ahora era sólo una organización intergubernamental, careciendo sus decisiones de fuerza ejecutiva u obligatoria ante los países, cambiará radicalmente con la creación de la Organización Mundial de Comercio, lo que abre posibilidades de ecuanimidad y restringe las sanciones unilaterales que, en base a su legislación interna, algunos países desarrollados aplican, o pretenden aplicar, a otros en vías de desarrollo.

Resalto que el acta final del GATT incursiona en dos áreas a las que antes no se refería: los servicios y lo que hoy nos ocupa, la propiedad intelectual. En la segunda se refiere específicamente al tema de uno de los aspectos de ella: el régimen de patentes que hoy estamos analizando.

Este es el escenario en que la República encara la reforma a la vieja ley de patentes 111: la globalización de la economía, la liberación del movimiento de capitales, la formidable evolu-

ción tecnológica, los compromisos internacionales suscriptos, todo lo cual nos obliga a modificar aquella norma nacida hace ciento treinta años, época en la que era impensable todo lo expuesto.

Hechas todas estas consideraciones sobre el escenario mundial, en cuyo marco introduciremos cambios a nuestra ley de patentes de invención, analizaré los aspectos fundamentales de los dictámenes en minoría y en mayoría que introducen reformas al anterior proyecto del Poder Ejecutivo, remitido primero a la Cámara de Diputados, donde caducó, y presentado en idénticos términos en esta Cámara en mayo de 1993, el que también caducó, y que finalmente reproducido, pero con modificaciones, estamos debatiendo hoy.

Ante todo, señalo que ha sido loable la tarea realizada —como dije al comienzo— por la Comisión de Industria, cabecera en este caso de las cinco comisiones intervinientes, en lo referido a las numerosas audiencias públicas llevadas a cabo con diversos sectores, que llenan tres volúmenes editados por la Secretaría Parlamentaria a través de la Dirección de Publicaciones, y todo ello se ha realizado bajo una atmósfera tensa por la presión de los intereses en juego y por las implicancias del tema en las relaciones exteriores de la República.

En primer lugar, diremos que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo oportunamente a una y otra Cámara fue redactado antes de la finalización de la Ronda Uruguay del GATT y de la firma del acta de Marrakech, lo que lo convirtió en antiguo antes de nacer. El camino que quedaba era reformularlo en las comisiones o presentar un nuevo proyecto "aggiornado" al resultado de los acuerdos del GATT ya citados, contemplando —según se expresa en sus fundamentos— el avance en las negociaciones del Mercosur, lo que permitirá la coexistencia de países con una legislación de patentes diferente, y las experiencias derivadas de las audiencias públicas realizadas.

Con respecto al Mercosur, destaco la situación del Brasil, país hermano que también debate su legislación de patentes incluida en un proyecto de Código de la Propiedad Intelectual enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, la cual con reformas lo envió al Senado, en donde se encuentra actualmente bajo análisis.

En síntesis, el proyecto que hoy tratamos, presentado el pasado 24 de octubre, mantiene la propuesta del proyecto del Poder Ejecutivo nacional introduciendo cambios importantes derivados de lo precedentemente expuesto.

Ante todo, cabe afirmar que los textos del proyecto en los dictámenes en mayoría y en minoría tienen una estructura general parecida con puntuales diferencias. En primer lugar, se destaca que la vigencia de las patentes tendrá una duración de veinte años en ambos proyectos, de conformidad con el GATT, con una sustancial diferencia: en el artículo 104 del proyecto de la mayoría se dispone que las invenciones de productos farmacéuticos no serán patentables antes del 1º de enero del 2000, ni de otros productos que se relacionen indisolublemente con los mismos. Por su parte, el dictamen en minoría establece en su artículo 111 que la nueva ley entrará en vigencia a los 180 días de su reglamentación, salvo en lo que se trata de convenciones de productos farmacéuticos, cualquiera de sus componentes o formas de aplicación, que serán patentables recién a partir del 1º de enero del 2005, para los cuales hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la ley, que dispongan patentabilidad de esos productos.

Entiendo que el plazo fijado por el dictamen en minoría se adapta al mecanismo establecido en el artículo 65 del Acuerdo "Trips" del GATT, que otorga un plazo de gracia de diez años a países en desarrollo que amplíen la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección.

Formalmente, la Argentina no tiene por qué llevar su legislación más allá de lo convenido en el GATT y las inevitables diferencias eventuales que surjan en el futuro entre los países signatarios deberán someterse a la nueva organización del comercio mundial a partir de 1995.

En cuanto al proyecto de ley en general, he suscrito el dictamen en minoría —como dije antes— por entender que se ajusta más adecuadamente al interés nacional compatibilizado con la nueva normativa derivada del Tratado del GATT que, dicho sea de paso, el país no ha ratificado aún, como tampoco lo han hecho la mayoría de los países del Primer Mundo, incluido Estados Unidos.

Los dos dictámenes que consideramos hoy tienen una estructura general idéntica desarrollada en ocho títulos que engloban disposiciones generales.

Un Título II referido a las patentes de invención, abierto en nueve capítulos que regulan la patentabilidad, el derecho de la patente, su concesión, su duración y efectos, la transmisión de licencias contractuales, su explotación, las excepciones a los derechos conferidos, las licencias

obligatorias —que el dictamen en minoría denomina otorgamiento de los derechos conferidos sin autorización del titular de la patente—, refiriéndose el último capítulo del Título II a las patentes de adición o perfeccionamiento.

El Título III, señor presidente, legisla sobre los modelos de utilidad. El Título IV, sobre el delicado tema de la nulidad y caducidad; el Título V, sobre procedimientos administrativos, y regula este aspecto en dos capítulos.

Por último, los tres títulos finales se refieren a la violación de los derechos conferidos por las patentes y modelos, a la organización del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y a disposiciones finales y transitorias.

A pesar de la idéntica estructura global, entiendo que el dictamen en minoría tiene una redacción más precisa en algunos temas de por sí ríspidos y de difícil interpretación.

Es por ello que acompaño con mi voto dicho dictamen, aun cuando es mi intención en orden a una mejor precisión de su articulado, señor presidente, proponer en su momento algunas enmiendas que no alteran el fondo del tema, por entender simplemente que la redacción propuesta mejoraría —según mi criterio— su comprensión.

Señor presidente: nos acercamos a una etapa de mundialización del sistema de comercio. Ya no va a ser posible actuar en el mercado internacional sin tener condiciones competitivas.

Este proceso de internacionalización no es sólo productivo sino además cultural. En el campo concreto de lo tecnológico, resulta indispensable tener estándares mínimos de conocimientos apropiados para que el consumidor acceda a los nuevos productos que la cultura universal va imponiendo.

Todos estos conceptos involucran profundamente a la sociedad. Todos los compromisos comerciales, en el mediano plazo, van a estar regulados por estos nuevos acuerdos. Por ello, debemos modificar nuestra legislación para adaptarla a una economía internacional globalizada, con pautas de conducta y reglas de juego que van a ser mundiales; y un paso concreto hacia ello es la sanción de una nueva ley de patentes de invención.

Para terminar, señor presidente, quiero expresar que es de esperar que esta necesaria modificación a la ley de patentes, campo de conflicto de fuertes intereses, que han colocado este tema en los primeros planos de las agendas de negociación entre las naciones, no conformará a todos. Pero entiendo que en la forma alcanzada

por el dictamen en minoría se concilian lo más adecuadamente posible los intereses del país con los compromisos internacionales. Además, constituye un primer paso importante para poner a la República dentro de la tendencia general de protección amplia de los derechos del inventor que consagra nuestra Constitución Nacional, sin perjuicio de eventuales mejoras que podrán introducirse a esta legislación en el futuro.

Por todo ello, señor presidente, en representación del Partido Autonomista, voto por la aprobación del proyecto de ley con la redacción contenida en el dictamen en minoría.

Sr. Presidente (Mazzucco).— Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, bloque liberal.

Sr. Aguirre Lanari.— Señor presidente: es mucho lo que podría decirse sobre el proyecto que hoy vamos a considerar ya que es un tema de significativa trascendencia que ha ocupado nuestra atención y la de aquellos que no forman parte del Senado, de manera evidente y ostensible.

Basta señalar, en lo que a la importancia del asunto se refiere, que la ley 111 que hoy vamos a modificar es una de las más viejas ya que fue sancionada en 1864, cuando nuestros pares de aquella época entendieron que era necesario legislar sobre el tema. Y ello obedecía, entre otras razones, a que la finalidad originaria de las patentes fue promover el progreso de las ciencias y las artes, como decía la Constitución de los Estados Unidos de América.

Entre nosotros, cabe recordar lo que establece el artículo 25 de la Constitución Nacional, en cuanto al fomento de la inmigración europea, prohibiendo restringir, limitar o gravar la entrada al país de los extranjeros que, entre otros hechos, vinieran a mejorar las industrias o a introducir y enseñar las ciencias y las artes. Por otra parte, corresponde al Congreso promover lo conducente a la prosperidad del país, al progreso de la ilustración y la introducción y establecimiento de nuevas industrias, conforme a la pauta que consagra la llamada cláusula de prosperidad de nuestra ley fundamental.

Antes de entrar al tema quiero destacar, como ya lo han hecho otros oradores sin duda alguna con absoluta justicia, una circunstancia que resulta grata para nuestra condición de integrantes de este cuerpo. Las comisiones, como bien se señaló y como es público y notorio, se han dedicado con esmero extraordinario a la atención, dilucidación y estudio de la materia que hoy estamos tratando. Y se ha aprovechado al máximo la información recibida de los más diversos sec-

tores que están interesados en el tema. Se han celebrado innumerables reuniones, se han escuchado todas las campanas posibles. Y es así como debemos legislar, señor presidente. Por eso no quería dejar de destacar esta circunstancia, ya que ella me alegra como senador de la Nación, y me obliga a congratular a los integrantes de las comisiones que tuvieron a su cargo la responsabilidad del tratamiento del tema.

Voy a intentar, señor presidente, con las dificultades propias derivadas de la importancia del asunto, ser lo más breve posible, ya que estimo que lo sustancial es lo atinente a la patentabilidad de las especialidades medicinales, es decir, lo que hace a la industria de los llamados farmacocósmicos.

Podemos decir que en esta materia —todos sabemos que es así— existen dos posiciones diametralmente opuestas.

Por un lado, la posición de aquellos que se oponen a la libre patentabilidad de los medicamentos, argumentando entre otras razones que ello traería consecuencias gravísimas para la industria nacional, la que prácticamente desaparecería en caso de sancionarse una legislación que permitiera la explotación monopólica de los inventos en el campo farmacéutico. Por demás aducen que ello traería aparejado un aumento generalizado y violento de los medicamentos con el consiguiente perjuicio para la población, que vería dificultado el acceso al consumo de un bien de características peculiares, como son los medicamentos, estando así en juego nada menos que la salud pública de la Nación.

Se señala también que las empresas multinacionales coparían el mercado, lo que a su vez ocasionaría el cierre de innumerables fuentes de trabajo, todas de industria local, con el obvio costo social que tal cierre habría de causar.

Por otra parte, también se esgrimen argumentos dignos de meditación. Son quienes abogan por un cambio legislativo partiendo de la vetustez de un sistema que ya lleva más de un siglo en la República Argentina. Señalan que en la actualidad no se justifica una medida de protección de la industria local, como la consagrada por el artículo 4º de la ley 111 al prohibir el patentamiento de los productos o especialidades medicinales.

Sostienen, en apoyo de su posición, que los laboratorios nacionales han abusado de un privilegio que conservan desde hace ya mucho tiempo, que les permitió simplemente copiar la fórmula de los medicamentos sin gastar un solo centavo en la investigación, que era llevada a cabo solamente por los laboratorios extranjeros.

Además, señalan que el libre patentamiento no traerá aparejado un aumento en el precio de los medicamentos y que, precisamente, defienden la libre competencia en el mercado.

Destacan que la casi totalidad de los medicamentos que está en plaza ya tiene patente vencida o por vencer, de donde resultaría que la nueva legislación que permita el libre patentamiento en nada afectará a las especialidades que se comercializan actualmente.

Considero que, a grandes rasgos, ésta es la posición que en las audiencias públicas y en sucesivos comunicados en los medios de prensa han puesto respectivamente de manifiesto el Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos —CILFA—, en representación de los laboratorios nacionales, y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales —CAEME—, que aglutina a los laboratorios extranjeros o multinacionales.

A las lógicas diferencias sustentadas en intereses comerciales disímiles que agitaron la discusión pública, se sumó dentro de la percepción de la misma el interés manifestado, en forma cuanto menos ofensiva, por representantes de países de significativa gravitación en el campo internacional, lo que fue entendido como presiones indebidas.

Aun cuando el señor ministro de Economía en una de las audiencias organizadas por las comisiones del Senado que llevaron adelante el estudio del tema, señaló que no existían tales presiones y que se había exagerado en el asunto, lo cierto es que las presiones existieron; ello es innegable. Pero como legisladores sólo debemos preocuparnos por sancionar la norma que resulte más justa y razonablemente posible en función de los intereses del país.

Pero si de algo estoy seguro es de que la ley 111 debe modificarse. Las concepciones vigentes en el mundo al momento de su aparición han variado radicalmente con respecto a los fundamentos que la inspiraron. Hoy los cambios en el campo de las invenciones, de las patentes, de la industria, son permanentes y la legislación no debe quedar trabada con respecto a los progresos que allí ocurran.

El aislamiento de un país dentro de sus fronteras, admisible antaño, hoy ya no es concebible. Bien se dijo que vivimos en una aldea planetaria y que la cooperación y la interdependencia entre los países se abren paso beneficiosamente, como lo registran convenios y tratados internacionales que buscan el progreso de los países y la convivencia de sus multiformes intereses.

Nuestra ley 111 está tomada de la legislación francesa. Por aquella época todas las naciones fueron dictando medidas protectoras de sus industrias locales en el campo farmacéutico. Se temía, con toda lógica, que permitir en forma indiscriminada la patentabilidad de las especialidades medicinales podría ocasionar graves perjuicios para la industria nacional y la población en general.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Oraldo N. Britos.

Sr. Aguirre Lanari. — Eran tiempos en que la industria en general, y los fármacos en particular, carecían de desarrollo. Eran industrias débiles, expuestas a los peligros derivados de su incipiente progreso.

Lógicamente nuestro país no podía apartarse de una norma general como lo era en la época la prohibición de patentar los productos farmacéuticos. Es así que, siguiendo la experiencia de la ley francesa, se aprobó el artículo 4º de la ley 111 que ha permanecido incólume desde la fecha de su sanción.

Desde entonces han pasado ciento treinta largos años y la industria local ha tenido una larga protección, circunstancia esta que le ha permitido sacar ciertas ventajas innegables. Creo que ahora tiene la suficiente madurez para afrontar los desafíos del desarrollo tecnológico dentro de ciertas pautas —que en los dictámenes en consideración se contemplan de manera general— que le conceden, con diferencias, el lapso de adecuación que este sector reclamaba.

Pero junto a esa justificada protección, la industria farmacéutica nacional debe asumir el compromiso de sumarse a la investigación, destinando los recursos adecuados para contribuir al progreso y afianzamiento de esa industria en beneficio de la salud de nuestra población.

Ahora bien, vale la pena detenernos un poco en el análisis de las normas constitucionales que existen sobre esta cuestión en lo referente a la propiedad en general y, además, en lo atinente a la propiedad intelectual.

El artículo 14 de nuestra Constitución Nacional determina que los habitantes de la Nación gozan de los derechos de ejercer toda industria lícita y de usar y disponer de su propiedad. El artículo 17, por su parte, expresa que la propiedad es inviolable y con expresa referencia a la propiedad intelectual, esta norma dice textualmente: "Todo autor o inventor es propietario ex-

clusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley."

En la reciente reforma constitucional se agregó como inciso 19 del artículo 75 —que se refiere a las atribuciones del Congreso Nacional— la de proveer todo lo conducente a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Está fuera de discusión el hecho de que un producto farmacéutico constituye legalmente un invento, ya que si nos atenemos al texto del artículo 3° de la ley 111 no cabe duda de que está comprendido en la definición que establece dicha norma: "Son descubrimientos o invenciones nuevas: los productos industriales, los nuevos medios y la nueva aplicación de medios conocidos para la obtención de un resultado o de un producto industrial."

La ley argentina actualmente vigente, además de aceptar que las composiciones farmacéuticas pueden ser inventos, prohíbe en forma expresa y terminante su patentamiento. Lo que la ley rechaza es la patente del producto, pero se permite patentar el procedimiento para obtener ese producto.

En este sentido debemos recordar que, como bien lo destaca la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci en un artículo publicado en la "Revista del Derecho Industrial", número 35, de mayo-agosto de 1990, publicada por la editorial Depalma, en el *leading case* "American Cyanamid Co.", la Corte rechazó la reivindicación de la empresa titular de una patente de procedimiento inscrita en nuestro país, pues no pudo probar que el producto comercializado por la demandada provenía de un procedimiento igual al patentado. Se había acreditado que no existía otro procedimiento conocido para obtener el producto en cuestión, pero se exigió la prueba indubitable de que se hacía por el mismo procedimiento.

A esta altura de la exposición, señor presidente, corresponde sentar ciertos conceptos que habrán de fundamentar la posición que adoptaré.

Tanto el dictamen de mayoría como el de minoría, más allá de ciertas diferencias, coinciden sustancialmente en lo que en última instancia significa cierta restricción al derecho de propiedad. Sin embargo, cabe aclarar que no es una novedad en nuestro sistema jurídico la existencia de tales restricciones, las que son admitidas y contempladas dentro del propio Código Civil teniendo en consideración motivos de interés público sin que ello importe aniquilar el derecho

sustantivo sino simplemente adecuarlo a razones de interés superior. Tal es lo que surge de la hermenéutica de varias disposiciones del Código Civil, como el artículo 2.513, modificado por la ley 17.711, que establece que es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular. Y al calificar, señor presidente, como regular ese ejercicio del derecho de propiedad, ello debe interpretarse a la luz del texto del artículo 1.071 del Código Civil, también modificado por la ley 17.711, en cuanto veda el ejercicio abusivo de un derecho considerando que es tal cuando se contrarían los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlo.

La Constitución establece un límite en el tiempo cuando se refiere a la propiedad intelectual desde el momento que determina que esa propiedad se extiende "por el término que le acuerda la ley". Venimos aquí una notoria diferencia con el derecho de dominio o propiedad en general, regulado por el Código Civil, el cual, en principio, es perpetuo aun cuando existen las restricciones que he señalado.

En efecto, el artículo 2.510 del Código Civil señala que "el dominio es perpetuo, y subsiste independientemente del ejercicio que se pueda hacer de él".

En este aspecto referido a la duración de la propiedad intelectual debe recordarse que los Constituyentes del 53 se apartaron del criterio de Alberdi, quien en su proyecto establecía la perpetuidad de los derechos del inventor.

El nuevo artículo 75, inciso 22, de la Constitución acuerda jerarquía constitucional a varios tratados internacionales, entre los cuales se menciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 21, al referirse al derecho de propiedad, expresa que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar el uso y goce al interés social.

Por su parte, la encíclica *Centesimus annus*, del papa Juan Pablo II, en su párrafo 42, luego de preguntarse cuál es el modelo económico más adecuado para los países que buscan la vía del verdadero progreso económico y civil se contesta de la siguiente manera: "Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta

ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma cuyo centro es ético y religioso, entonces, la respuesta es absolutamente negativa."

"Precisamente, recogiendo las palabras del Papa, esa es nuestra tarea como legisladores: encuadrar la libertad económica en un sólido contexto jurídico para ponerla al servicio de la libertad humana integral. Es un gran desafío. Creo que estamos en condiciones de aceptarlo.

Para ello, y antes de entrar de lleno al problema de las patentes, recordemos que todo derecho puede ser reglamentado en su ejercicio por la ley, y que desde hace muchos años la Corte Suprema destacó la relatividad de los derechos a partir de los conocidos precedentes "Ercolano c/Lanteri de Renshaw", del año 22; "Avico c/De la Pesa", del año 34, entre otros. Recientemente, no hizo sino ratificar su arraigado criterio en esta materia en los autos "Peralta c/Estado nacional", de 1990.

Todo lo dicho no significa en absoluto que defendamos una concepción socialista de la propiedad. Queremos destacar que entendido el derecho de propiedad como tal —es decir, como facultad individual consagrada por la Constitución con las pertinentes garantías que hacen a la naturaleza del hombre y lo transforman por ende en un derecho natural— ello no es óbice para impedir un ejercicio abusivo ni para que en determinadas circunstancias se establezcan restricciones a ese ejercicio.

El propio Código Civil encabeza el Título VI del Libro Tercero con el siguiente enunciado: "De las restricciones y límites del dominio". El artículo 2.611 expresa lo siguiente: "Las restricciones impuestas al dominio privado sólo en el interés público, son regidas por el derecho administrativo."

Los debates que se han suscitado con motivo del proyecto de ley de patentes de invención que hoy estamos considerando han resultado realmente apasionantes. En lo referente a las patentes farmacéuticas —que indudablemente constituyen el gran tema del proyecto— hemos escuchado argumentos, réplicas, estadísticas, predicciones, comparaciones y toda una variada índole de razones en favor de una posición o de

otra. Debo confesar que todos los argumentos eran dignos de ser meditados. Por eso creo que el debate ha sido apasionante, razón por la cual hoy como nunca, dados estos antecedentes, en aras del bien del país, debemos encontrar un exacto punto de equilibrio entre dos posiciones que parecen irreconciliables. Y esto no solamente en aras del bien de la economía del país sino en función de la salud de su población. Porque de esto se trata, señor presidente, nada menos que de la salud de la población, junto con las repercusiones que presumiblemente surjan según sea la solución que adoptemos, que pueden llegar a afectar las fuentes de trabajo de miles de compatriotas.

Con estos cartabones creo que podemos ponernos de acuerdo sobre ciertas pautas generales que deberían ser previstas en la legislación de patentes en general y, obviamente, en lo que hace a los medicamentos en particular.

Se debe establecer un término máximo de vigencia de la patente, prever la caducidad de ella en caso de falta de explotación y licencias obligatorias en los casos en que medie un interés público como es la salud del pueblo, con el pago de una regalía adecuada. En el caso específico de los fármacos debe establecerse un plazo de transición que, a mi juicio, podría ser de diez años. Esto último tendería a evitar, como bien se ha destacado en exposiciones anteriores, un cambio abrupto de sistema, permitiendo a la industria nacional, que no ha logrado el desarrollo extraordinario que caracteriza a la extranjera, adaptarse con el debido tiempo a las nuevas reglas de juego.

Lo que porpongo se adecua y es compatible con lo que surge de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, y el acta final de Marrakech del 15 de abril de 1994. Al efecto resulta importante destacar que en el artículo 33 del mencionado acuerdo se dispone que la protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

En lo correspondiente al uso de las patentes sin autorización del titular de los derechos, el GATT dispone en el artículo 31, inciso b), que "Sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial".

Asimismo, prevé que "los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial".

En ambos casos, el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización, como surge del artículo 31, inciso h) del GATT.

Como se observa, las disposiciones que se comentan muestran diferentes alternativas con relación a la posibilidad de que la autoridad de aplicación disponga el otorgamiento de licencias sin autorización del titular de la patente. Sin embargo, se aclara en el inciso g) del citado artículo del GATT, que podrá retirarse dicho permiso si las circunstancias que le dieron lugar desaparecieron y no fuere probable que vuelvan a verificarse.

La norma en cuestión es recogida en los dictámenes de mayoría en sus artículos 45 y 48, y de minoría, en su artículo 53, aunque no consideran lo dispuesto en el inciso g), que acabo de citar.

Resulta de suma importancia destacar lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, por cuanto dispone que "los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo".

Si se analiza el contenido de este punto, se advierte que permite, en determinadas circunstancias críticas para la Nación, sean ellas de carácter sanitario, tecnológico o socioeconómico, que puedan llevarse a cabo excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente, conforme al artículo 30 del GATT, habilitando a terceros para el uso de la respectiva patente, no debiendo esta acción causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniéndose presente que la mencionada autorización deberá tener vigencia hasta tanto permanezcan la circunstancias excepcionales que le dieron origen. Esta disposición del GATT, como veremos después, hay que relacionarla con los artículos 49 y 51 del dictamen de minoría.

Otro punto de gran significación es el que corresponde al período de transición. Ambos dictámenes, los de mayoría y minoría, lo han previsto pero con diferencias de plazos.

Si analizamos a la luz del GATT este tema de vital importancia, principalmente para la industria farmacéutica nacional en lo que respecta a su posibilidad de adecuación a las nuevas normas sobre patentes de productos, podremos observar que la Parte 6, referida a disposiciones transitorias del citado Acuerdo, en su artículo 65 dispone lo siguiente: a) Ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la entrada en vigor del mismo.

b) Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de 4 años la fecha de aplicación mencionada.

c) Si el mencionado país en desarrollo Miembro está obligado a ampliar la protección a la propiedad intelectual, mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, por ejemplo productos farmacéuticos, dicha nación podrá postergar la aplicación a los sectores anteriormente no protegidos por 5 años más.

Lo dispuesto en estos tres puntos muestra que existe la posibilidad de postergar por un término total de 10 años la plena aplicación de la patentabilidad para determinados productos que en el pasado no hubieran estado alcanzados por la referida protección. Es por ello que lo dispuesto en el artículo 111 del dictamen de minoría se compadece plenamente con lo estipulado en el GATT.

Habiendo analizado todos los proyectos que se han presentado, que constituyeron los antecedentes considerados por las comisiones que elaboraron los dictámenes, por mi parte quiero expresar mi adhesión al propuesto por la minoría, pero con una salvedad, que es la siguiente: el artículo 52 determina que el Poder Ejecutivo podrá disponer el otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente sin autorización de su titular, para uso propio del Estado nacional o para uso de terceros autorizados por él, sujetos a las condiciones del artículo 55. A mi juicio, para que esta norma se adapte a lo que establece el artículo 31 del GATT, debería remitirse no solamente al artículo 55 del dictamen en minoría sino también a lo previsto por su artículo 53, ya que para que el gobierno pueda hacer uso de aquella facultad resulta necesario y conveniente que se verifiquen los recaudos contemplados en esta última disposición.

Finalmente quiero referirme a las diferencias sustanciales que se observan entre los dos dictá-

menes. Con respecto al artículo 49 del dictamen de la minoría, considero que su contenido es más lógico en comparación con el de la mayoría, que es el artículo 42. La diferencia se encuentra fundamentalmente en el párrafo final del artículo 42 de la mayoría, ya que en él se prevé que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrá disponer normas de excepción a lo preceptuado en dicho artículo cuando la razonabilidad económica y técnica así lo indiquen, o cuando el ejercicio del derecho de propiedad intelectual pueda tener un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente.

Esto podría traer como consecuencia que el titular de la patente podría aducir criterios de economía o de rentabilidad, entre otros aspectos, para dejar de fabricar su producto en la Argentina y pasar a importarlo, con lo cual se afectaría seriamente la industria nacional, la inversión productiva y fundamentalmente las fuentes de trabajo, recurso hoy en día de vital importancia para lograr un crecimiento y desarrollo económico y humano en armonía y paz social, aspectos todos estos que como legisladores no podemos soslayar.

En tal sentido, recuerdo las precisiones que ha hecho el senador Genoud, y también el senador Storani, en cuanto a lo ocurrido en nuestra hermana República de Chile.

Si bien soy consciente de que el GATT en su artículo 27 habla de que los derechos de patentes se podrán gozar sin discriminación, tanto para los productos importados como para los productos elaborados en el país, es de importancia destacar que en el artículo 8, punto 1, del citado acuerdo se hace referencia a que los miembros, al formular o modificar sus leyes, podrán adoptar las medidas necesarias para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico.

Como puede observarse, razones tales como las mencionadas en el artículo 8 son decisivas para una nación. Hay que preservar ante todo la capacidad productiva del país, su desarrollo científico y el crecimiento del empleo, herramientas indispensables para lograr un progreso armónico solidariamente unido al capital humano lo que, sin duda, resulta ser el más preciado bien con que una nación cuenta.

Otro aspecto que he tenido en cuenta y que decidió mi apoyo al dictamen de la minoría, es el correspondiente al plazo de transición. Cuando analicé los aspectos fundamentales del GATT expuse que el mencionado acuerdo prevé como

máximo, para los casos de países en desarrollo, un plazo de transición de diez años.

El mencionado plazo permitirá que los laboratorios nacionales adecuen su actividad durante ese período y se adapten al régimen de patentabilidad que se instaure, encarando la necesaria tarea de investigación y elaboración de nuevos productos, labor fundamental que por imperio de la ley hasta hoy vigente fue desarrollada en forma poco satisfactoria.

Considero pues, que el plazo mencionado se adapta mejor a las necesidades actuales de los laboratorios nacionales que el definido en el dictamen de la mayoría, que lo reduce a sólo cinco años y no tiene presente lo dispuesto en el punto 4 del artículo 65 del GATT.

Como último tema, en lo que respecta a las diferencias de significación entre ambos dictámenes, está el de las licencias sin autorización del titular de la patente. Al efecto, el dictamen de la mayoría expresa en el artículo 45 que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrá permitir otros usos de una patente sin autorización de su titular, a diferencia de lo expresado en el artículo 54 del dictamen de minoría, en donde se indica que el derecho de explotación de una patente sin autorización de su titular deberá ser concedido por la autoridad de aplicación, siempre que se haya cumplido con el artículo 53.

Considero que la obligatoriedad dispuesta en el dictamen de la minoría es más razonable que la facultad discrecional dispuesta en el dictamen de la mayoría, ya que evitará situaciones complejas y comprometidas durante la negociación para el otorgamiento de la patente sin autorización de su titular. Comparto en este sentido las abundantes y claras explicaciones que sobre esta circunstancia expuso el señor senador Genoud.

Por las razones expuestas, dejo constancia de mi voto afirmativo en general al dictamen de la minoría, sin perjuicio de alguna observación que he dejado sentada y creyendo que con ello estableceremos un criterio de justicia, ampararemos — como corresponde — el derecho de propiedad, pero tendremos también presente supremos intereses que hacen a la salud de nuestra población y, como consecuencia de ello, el desarrollo de una industria nacional que es fuente de trabajo para vastos sectores de nuestro país.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan de la Cruzada Renovadora.

Sr. Avelín. — Seré breve, señor presidente.

En primer lugar, voy a analizar qué significan los laboratorios medicinales para entrar después en el estudio de este proyecto de ley de patentamiento.

Laboratorio medicinal significa investigar, trabajar, reproducir y curar vidas humanas; trabajar por el pueblo y por la salud de la población, lo que implica trabajar por la vida.

Realmente, los laboratorios nacionales han hecho un gran esfuerzo. Hace cien años que vienen trabajando. Hay más de cien laboratorios que vienen luchando y trabajando; han sufrido algunos vaivenes y muchas caídas y deserciones. Pero han servido al pueblo argentino. El 56 por ciento de la venta del mercado interno está en manos de los laboratorios nacionales, que también exportan a los pueblos de América latina. Además, estos laboratorios han vendido 250 millones de unidades medicinales y manejan alrededor de 1.500 millones de dólares.

Estos datos conllevan un significado muy importante de respaldo social y de garantía para la salud y la vida.

Tenemos la obligación de decir estas cosas porque debemos seguir defendiendo, estimulando y brindando todo nuestro apoyo a la industria farmacéutica nacional. Pero también debemos exigirle que empiece la investigación y un trabajo de lucha para que seamos realmente una Nación independiente y no tengamos que depender de alguien o de algo. Es importante que los laboratorios nacionales sepan que este Senado —por lo menos, quien habla— va a defender, estimular y proteger a la industria farmacéutica nacional, que es un valor inagotable.

Acá se habla de integración con el mundo. ¡Claro que queremos integrarnos! Pero debemos empezar a integrarnos como país en la cultura, en la economía, en el trabajo, en lo social, en la familia y en lo regional. No olvidemos que hay regiones que viven alejadas y marginadas del resto. Los laboratorios nacionales han brindado apoyo a muchos pueblos de frontera y a regiones humildes, acercando esas muestras gratis que piden los pobres y gente necesitada y marginada. En los hospitales y en los centros de salud de los pueblos alejados esas muestras gratis solucionan enfermedades y angustias, otorgando una posibilidad de atender la salud de la gente.

De tal manera que es importante este apoyo a la industria nacional, sobre todo porque va a recibir el estímulo y también la exigencia para que se empiece la investigación dentro de los laboratorios con empleados, químicos, médicos, farmacéuticos, técnicos y todo el personal idóneo

que trabajará inmediatamente. Creo que éste es el objetivo primordial en estos momentos.

Al hablar de patentamiento y de investigadores me pregunto cuántos investigadores sirvieron a la humanidad luchando anónimamente, entregando su vida, juventud y sabiduría en bien de la raza humana. Por ejemplo cuánto dio al mundo Luis Pasteur con la vacuna antirrábica. Roberto Koch, quien con un microscopio del siglo pasado descubrió el bacilo que lleva su nombre y posteriormente la estreptomicina, que permitió curar la tuberculosis. Ehrlich, Fleming y cuántos más nos brindaron lo que descubrieron sin patentarlo. No recibieron ni les interesó el dinero. Fueron depositarios de la gratitud de todos los pueblos del mundo registrándose el nombre de todos estos benefactores de la humanidad en el frontis de la historia de todos los tiempos.

También podemos hablar de Houssay, de Le loir y de tantos otros que luchando permanentemente dieron a la humanidad el sentir de su sabiduría.

A esta altura de mi exposición quiero también recordar a Paulo Mirizzi, médico cirujano e investigador que legó al mundo lo que conocemos como mirizzigrafía: colangiografía intraoperatoria para observar las vías biliares. Esta práctica se lleva a cabo en todos los quirófanos del mundo. Jamás la patentó ni recibió un solo peso por brindar solución a tantos enfermos, a tanta gente necesitada y a tanto dolor.

Es importante decir estas cosas para que el pueblo y la Cámara de Senadores las conozcan.

Otro tema fundamental son los monopolios. ¿Podemos permitirlos? ¿Qué son? Los monopolios son los que estrujan, denigran y absorben el sacrificio y el esfuerzo de los pueblos del mundo.

Los países imperialistas. —como Inglaterra, Estados Unidos y tantos otros del primer mundo— explotan permanentemente a los pueblos de la Tierra hasta que ellos consiguen sacar de sus gargantas el látigo de la esclavitud y de la opresión. Por eso debemos tener cuidado de que esta ley ponga una llave para destruir los monopolios y que no vengan a succionar el esfuerzo, el dolor y el sufrimiento de los argentinos, sobre todo en el aspecto vinculado con la salud.

Fíjense lo que significa el monopolio de los Estados Unidos. Un producto del laboratorio Merck llamado Vasotec cuesta en ese país 88 dólares. Ese mismo producto en la Argentina —que es el Renitec— cuesta 23 dólares. Resulta un 300 por ciento más caro en los Estados Unidos porque allá está monopolizado.

Otro producto: la ranitidina, que sirve para curar úlceras, gastritis y problemas de hernia diafragmática. El laboratorio Glaxo lo comercializa bajo la marca Zantac. En Estados Unidos cuesta 91 dólares, mientras que en nuestro país cuesta 18 dólares. Otros laboratorios lo venden a 12 dólares. Estamos ante una diferencia del 500 por ciento, porque está monopolizado en los Estados Unidos.

El Piroxicam, por ejemplo, se utiliza mucho en enfermedades reumáticas, artritis y artrosis. Desgraciadamente en nuestro país existe una gran franja de pacientes que padecen estas enfermedades. El laboratorio Pfizer lo vende bajo la marca Feldene y cuesta en Estados Unidos 200 dólares. En la Argentina el mismo producto cuesta 37 dólares, en tanto veintisiete laboratorios nacionales lo comercializan a 15 dólares. De 200 dólares en Estados Unidos pasa a 15 dólares en la Argentina porque está monopolizado en Norteamérica. La diferencia es del 1.300 por ciento.

Este es el resultado de los monopolios en los Estados Unidos y puede ser el resultado en nuestro país si no ponemos una traba y una llave al monopolio de las multinacionales. Porque las multinacionales, señor presidente, no tienen patria; no tienen frontera; no tienen solidaridad. Buscan el negocio y su propio interés, y no les preocupa explotar la salud de los pueblos con tal de abultar sus ganancias.

En Chile, por ejemplo, realmente se instaló el monopolio de las multinacionales. No funcionó bien y se lo llevan; sacan de Chile los laboratorios multinacionales, y ahora importan directamente del lugar de origen. Mientras tanto, ha aumentado el 40 por ciento la medicación.

Todo esto es grave y debemos decirlo para no equivocarse el camino, para que esta norma tenga equilibrio pero, más que nada, sea la llave y la traba para acabar con los monopolios, que destruyen la vida de los pueblos y succionan el esfuerzo de la nacionalidad.

Por ello, señor presidente, es importante integrarnos; elaborar estos proyectos de ley, que son trascendentes; proteger a los inventores; proteger a la industria nacional; proteger también lo que significa la investigación; y proteger la inversión; pero todo en el marco de los límites que corresponden, en la justa dimensión de nuestro interés: el interés de la patria, el interés del pueblo argentino.

Esto es lo que debemos hacer; por ello debemos bregar y luchar para estimular la industria farmacéutica nacional, la industria en todos

los sentidos. Porque la industria es el motor de todas las expresiones de desarrollo.

Alguna vez la Argentina debe estar liberada; y para estar liberada, debemos integrarnos; y para estar integrados debemos luchar armónicamente en toda la geografía del país, brindando posibilidades a todos los que lucha por la causa nacional, por la causa del país y por la causa de nuestra industria.

Yo apoyaré el dictamen de minoría porque creo que tiene una redacción más adecuada a lo que pienso y afirmo con estos conceptos.

Por eso, señor presidente, ojalá que la industria farmacéutica nacional tenga el apoyo necesario y cuente con el estímulo que debe dársele. Pero también existe un gran desafío: el de empezar a investigar, para que la investigación esté acorde con la lucha que queremos llevar a cabo para solucionar tantos y tantos problemas.

Los enfermos no esperan, señor presidente. El país necesita realmente cuidar de su salud, sobre todo en este momento de tanta pobreza y de tanta marginación, nunca más que ahora. Defendamos al inventor nacional y defendamos nuestra industria.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa, del Partido Justicialista.

Sr. Martínez Almudevar. — Señor presidente, señores senadores: a efectos de complementar la exposición del señor presidente de nuestro bloque, que hizo las consideraciones generales, y también para ir introduciéndonos en el análisis de lo que es el dictamen de mayoría, voy a realizar unas sintéticas referencias al articulado que nosotros traemos a este recinto con pretensión de que se apruebe. Trataré así de ir avanzando, en cuanto a algunos aspectos puntuales, a efectos de que se facilite, de que se clarifique de alguna manera nuestra posición general y la que asumiremos en la votación en particular.

En ese sentido, nuestro proyecto, en su título I, establece que esta ley involucra a todos los sectores productivos. Es así que la diferencia cualitativa con la ley 111 en vigencia — que esta norma sustituye y reemplaza — es que no se excluye la patentabilidad de las especialidades medicinales.

Del mismo modo, se les da un tratamiento igualitario a los inventores locales y a los extranjeros.

Además, se establecen dos tipos de títulos de propiedad industrial: las patentes de invención y los certificados de modelo de utilidad. Esta úl-

timo es una forma menor de otorgar al inventor la exclusividad de su invento.

El título II define lo que es patentable y lo que no lo es. La definición básica es que sólo es patentable la novedad, es decir, lo nuevo no conocido.

En este sentido, lo existente no descubierto no es patentable ya que se establece la diferencia entre invento y descubrimiento. Esta diferencia es relevante desde el punto de vista de que no son patentables ni la materia viva ni los microorganismos tal como existen en la naturaleza. Paralelamente se establece que el invento, para que sea patentable, debe tener aplicación industrial. Es así que cabe la siguiente reflexión: hay cierta preocupación en la comunidad en el sentido de que esta ley habilite la patentabilidad de los medicamentos que ya están en el mercado.

En primer término, esta ley contempla la patentabilidad a partir de su sanción, de modo que lo que ya existe en el mercado, al no ser novedad, aunque sí tenga ya patente en el extranjero, no es sujeto a patentabilidad.

Por otra parte, el artículo 5º, junto con el 13, sólo otorgan, de acuerdo con lo establecido por el Convenio de París, un año de prioridad para que el inventor extranjero pueda patentar en la Argentina. Es decir que si algún inventor extranjero no desea patentar en la Argentina porque no le gustan nuestras disposiciones legales, cumplido el año desde la presentación de la solicitud correspondiente en su país de origen pierde la prioridad; vale decir, el derecho de ser el primero en patentar su invento. Perdida la prioridad, cualquiera puede patentar el invento. Esto garantiza que el mercado interno argentino no quede desabastecido de medicamentos ante la eventualidad de la renuencia de los inventores a patentar en nuestro país.

El artículo 7º contempla lo acordado en el GATT con respecto a los microorganismos, en el sentido de que son patentables siempre y cuando no sean los ya existentes en la naturaleza o su reproducción esencialmente biológica.

Señor presidente: la mención del acuerdo GATT merece otra reflexión. La Argentina, como casi todos los países del mundo, suscribió en el mes de abril próximo pasado un acuerdo donde se establecen las bases mínimas para una ley de propiedad industrial. Este acuerdo es un marco donde hay mínimos y máximos. El presente proyecto de ley se ajusta aun en lo que no nos gusta a dicho acuerdo.

Por supuesto, es posible tener distintas interpretaciones al respecto, más aún si se defiende

el interés particular de algún grupo económico o industrial. Sin embargo, quien debe decidir si la ley se ajusta al GATT es, en última instancia, el propio organismo creado, o sea la Organización Mundial de Comercio. Además, para que un país denuncie que esta ley no está, en su opinión, de acuerdo con el GATT, primero debe ratificarlo y, obviamente, aceptarlo.

El capítulo II del título II alude al derecho a la patente. De un modo genérico se establece que el inventor es propietario exclusivo de su invento y tiene derecho a transferirlo bajo contrato de licencia, obviamente sin perjuicio de los derechos del tercero normados en los artículos 36 y 37 de nuestro proyecto.

Asimismo se establece que son patentables tanto los productos como los procesos productivos. El artículo 10 legisla sobre las invenciones desarrolladas en el proceso laboral. En este sentido hemos seguido la redacción del proyecto del Poder Ejecutivo nacional incorporando lo propuesto en el dictamen de minoría en el sentido de que será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en el artículo correspondiente. Obviamente, esto está en línea con la legislación laboral argentina.

El capítulo III contempla la posibilidad de que un inventor extranjero patente en la Argentina siempre y cuando en primer término lo haga dentro del año de haber patentado en su país, que dicho país reconozca el mismo derecho a los inventores argentinos y que la solicitud presentada en la Argentina no tenga mayor alcance que la original.

El artículo 18 de nuestro proyecto establece la creación de la Administración Nacional de Patentes, que tendrá a su cargo su otorgamiento y el de los certificados de propiedad industrial.

Nuestro capítulo IV dispone que la duración de la patente es de veinte años, en línea con el acuerdo del GATT mencionado. Cabe recordar que la legislación de Estados Unidos sólo otorga un plazo de diecisiete años, con lo cual la propuesta nuestra defiende mejor al inventor.

Un tema controvertible es lo normado en el artículo 36, inciso c), que establece que el derecho de la patente no producirá efecto contra cualquier persona que use, adquiera, comercialice o importe bienes patentados o logrados mediante un proceso patentado, siempre que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país.

En otros términos, admitimos que pueden importarse productos siempre y cuando en el país de origen exista ley de patentes.

En este sentido, éste es un punto intermedio entre el monopolio de importación que quieren los laboratorios extranjeros y la posibilidad de importar desde países que admitan copia, que demandan los laboratorios locales.

Nosotros hemos intentado preservar la posibilidad de que, dentro de las reglas de juego internacionales, exista la importación para poner límite a cualquier abuso de precios por parte del titular de la patente. Naturalmente no es éste el único reaseguro que establece el proyecto para hacer frente a eventuales abusos de precios. Así mismo, no se contradice con el GATT.

El capítulo VI contiene las normas acerca de la explotación de las patentes en la Argentina. En su artículo 42, que es fundamental al respecto, entre otras cuestiones establece que el titular de la patente debe explotar el invento en nuestro país. Esto incluye no sólo abastecer el mercado sino también producir en la Argentina; naturalmente, siempre y cuando esta producción sea racional, es decir, que nadie está obligado a producir ineficientemente.

Nótese además que esta cláusula es la que garantiza que la ley de patentes implique inversiones en investigaciones y en desarrollo en nuestro país y la generación de empleos en el sector privado.

Seguramente a los laboratorios en general no les gustará esta disposición, pero nuestra obligación no es principalmente con ellos sino con los consumidores en su doble aspecto: como tales, en el sentido de que demandan abastecimiento de medicamentos a precios y calidad razonables, y como trabajadores, para los que el empleo es una cuestión esencial.

A su vez, este artículo contempla el Mercosur al considerar que la producción local puede ser ejecutada en nuestros socios económicos siempre que tengan una ley similar y nos otorguen la reciprocidad.

Esta cláusula evitaría el riesgo de que, en la estructura de países con unión aduanera, haya una traslación de los laboratorios de los países que cuentan con legislación de patentes hacia los que no la otorgan. Dicho de otra manera, no existe posibilidad de que los laboratorios locales se trasladen a Brasil, por ejemplo, al amparo de la eventual inexistencia de una ley de patentes en ese país.

El Capítulo VII establece el modelo de licencias obligatorias que puede otorgar el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. En este Capítulo hemos sido rigurosos en el sentido de seguir la normativa del GATT. Es así que el INPI

podrá --vale decir que no hay licencias automáticas, tal cual lo prescribe el acuerdo internacional-- otorgar licencias siempre que estén en juego la nutrición del pueblo, la salud pública, el interés tecnológico de la Nación, etcétera, además, cuando el invento no se explote localmente, y también para remediar situaciones de abuso de poder dominante en detrimento de los consumidores.

En todos los casos las decisiones serán recurribles ante la Justicia, según lo establece nuestro artículo 51. Para acceder a dicha licencia se debe disponer de capacidad económica y establecimientos habilitados al efecto, lo cual surge del artículo 53 de nuestro proyecto.

El Título IV establece la normativa tradicional de patentes acerca de la caducidad y nulidad. Lo más relevante de estas disposiciones es el hecho de que se contempla la caducidad automática recién a los nueve años de la solicitud de la patente.

El Título VII se refiere a la organización del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y aquí el aspecto más saliente es que este organismo es el encargado de otorgar las licencias obligatorias y de verificar el cumplimiento de la cláusula de la explotación efectiva. En ese sentido, y dada la importancia de las decisiones que este organismo puede adoptar, hemos considerado pertinente que la designación y remoción del directorio cuente con el acuerdo de una comisión parlamentaria bicameral.

El Título VIII se refiere a las disposiciones transitorias, y entre ellas podemos mencionar que este proyecto de ley reemplazará a la ley 111 a partir del momento de su entrada en vigencia. En segundo lugar, se contempla un período de gracia de cinco años para la patentabilidad de especialidades medicinales, es decir que la entrada en vigencia de esta norma se producirá el 1º de enero del año 2000. Se contempla también, en el artículo 106, que por única vez la prioridad de patentes reconocidas en el exterior se ampliará a dos años siempre y cuando los productos patentados no hayan sido comercializados. Esta cláusula, llamada *fair play*, tiene la particularidad de ser sumamente restringida.

Finalmente, el artículo 107 de nuestro proyecto alude a la derogación del artículo 5º de la ley 22.262 de defensa de la competencia, ya que en dicha norma se establecía la exclusión de las sanciones previstas en dicha ley de aquellas formas monopólicas que surjan de decisiones legales o administrativas. En nuestra opinión el derecho de patentes no debe habilitar el abuso

de poder dominante en detrimento de los consumidores.

Señor presidente: hemos trabajado durante largo tiempo para arribar a un dictamen lo más equilibrado posible. Seguramente no les gustará a muchos sectores de interés, pero nuestra tarea principal es contemplar todos los intereses en juego y priorizar exclusivamente el interés del conjunto, que, en este caso, es el interés de los consumidores.

Con estas palabras concluyo esta breve síntesis de nuestro proyecto, en la que he tratado de destacar algunos aspectos que no se han mencionado. Quiero anticipar también la predisposición de nuestro bloque para compatibilizar nuestra iniciativa con el dictamen de minoría a fin de darle una mayor transparencia y consistencia a este importante proyecto de ley que pretendemos sancionar en el día de la fecha.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, senador Ricardo Alberto Branda.

Sr. Presidente (Branda). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, del bloque PAIS.

Sr. Bordón. — En alguna ocasión, en un debate sobre otro tema, hemos mencionado que nuestro país se encuentra hoy obligado a imaginar una cuarta revolución del conocimiento. Y lo hicimos desde dos aspectos: desde la visión local y global de que hoy el conocimiento es el nuevo nombre de la soberanía, y también desde una retrospectiva de la historia del proceso político social de construcción del Estado, de las formas productivas y de la relación con nuestra cultura y nuestro sistema educativo-tecnológico; en síntesis, con el sistema del conocimiento argentino. Y veríamos que aun en épocas en que siendo importante el conocimiento no alcanzaba la preponderancia que hoy tiene respecto a la capacidad de una nación para dar un marco de posibilidades reales a sus hijos. Entonces encontramos tres procesos entre la conexión del conocimiento y la construcción de un Estado que necesitaba de todo un sistema productivo. Y hoy estamos ante un proyecto de ley que tiene que ver con estos temas.

Aquella ley 1.420, que durante tantos años rigió el sistema educativo de la Argentina, se vinculaba con la construcción de un nuevo Estado y con el funcionamiento de un sistema productivo; es decir, no fue algo aislado. Aquel proceso, que no fue exclusivo de la reforma del 18 pero que quizás la marcó, y que, al igual que la ley 1.420 y más allá de las posiciones a favor y en

contra que hoy podamos observar retrospectivamente marcó históricamente al país, tuvo que ver no sólo con la generación del 80 sino con lo que significaron el radicalismo y el acceso de importantes sectores sociales de nuestro país para terminar con las democracias de elite. En el fondo se trataba de una autonomía que integraba al país y que le permitía tener nuevos recursos humanos para la conducción del Estado. Asimismo, ello posibilitó el advenimiento de una nueva etapa en el sistema productivo y su relación con el mundo. Si bien por aquellos tiempos la actividad agraria era la fundamental, ya comenzaba a surgir un proceso industrial en nuestro país.

Otra etapa tuvo que ver con la excepcional irrupción del proceso político, económico, social y tecnológico-educativo que impulsó el tres veces presidente de los argentinos, general Perón. En esa etapa no solamente se continuaron y se extendieron el proceso de democratización del conocimiento y la cultura iniciada por la Unión Cívica Radical y por la excepcional figura de don Hipólito Yrigoyen, sino que con las escuelas técnicas y las actuales universidades tecnológicas —en aquel momento de los trabajadores—, y con organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, se obtuvieron tecnologías de punta y, al mismo tiempo, su relación con el sistema productivo.

Y cuando hablamos de una nueva revolución del conocimiento, estamos diagnosticando que nuestro país, para resolver sus severos y estructurales problemas productivos, de empleo y de pobreza, que están más allá de las coyunturas circunstanciales, necesita producir calidad con identidad argentina. Y también en cada una de las decisiones que toma necesita fortalecer su sistema de conocimiento; fortalecerlo en su relación con la cultura y con la capacidad de gestar conocimiento y habilidades para la incorporación de otros conocimientos.

Creo que es aquí donde, juntamente con el tema de salud, se ha planteado el debate. Y se lo ha hecho mediante un trabajo rico y esforzado de más de un año, aunque el debate lleva varios años en la sociedad argentina y en la dirigencia en general, y política en particular.

En este mundo con oportunidades pero con severas dificultades buscamos un real equilibrio entre la apertura necesaria para cumplir con normas internacionales e impedir la conformación de privilegios y monopolios internos que finalmente se vuelquen en contra de nuestra propia comunidad y de los sectores que más necesitan de trabajo, salud, educación, justicia.

Esto lo digo tanto como vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología cuanto como miembro informante del bloque PAIS. Comparto en general lo manifestado por la totalidad de quienes han hablado en este recinto.

Debemos evitar los errores del proteccionismo tratando de dar los marcos adecuados para que el conocimiento y la capacidad de los argentinos puedan ser volcados en la producción de bienes y servicios públicos y privados. El exceso de ingenuidad en la apertura y el exceso de privilegios en la protección ponen igualmente en peligro el futuro de la comunidad. Y esto surge no solamente cuando se analiza esta situación desde adentro, sino también cuando se tienen en cuenta los ejemplos que nos dan muchos países del mundo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Faustino Mazzucco.

Sr. Bordón. — En este tema debe buscarse también el necesario equilibrio entre el rol del Estado y el del sector privado en cuanto a la capacidad de armonizar iniciativas personales, creatividad, etcétera, y, al mismo tiempo, evitar la formación de monopolios que nacen a favor de la libertad que piden para expresar su iniciativa. Lo hacen para incentivar la creatividad pero muchas veces terminan siendo justamente quienes ahogan la iniciativa y la creatividad de las personas, de las empresas y, en muchos casos, de las propias comunidades nacionales. Estos monopolios se mueven en el plano internacional y trascienden las fronteras de los países más débiles o menos fuertes. El actual debate que hoy se da en el seno de la propia comunidad de los Estados Unidos de América demuestra hasta qué punto en muchas ocasiones los poderes de los monopolios se alzan en contra de los intereses de los individuos y de las propias expresiones políticas, sociales y estatales, y aun de las naciones con mayor peso a nivel internacional.

Públicamente quiero resaltar la tarea de esta casa, y en especial de quien tuvo la principal responsabilidad como presidente de la Comisión de Industria. Me refiero a mi comprovinciano, el senador Genoud, quien ha realizado un largo, amplio y profundo trabajo. Quienes quisieron expresar sus ideas no tuvieron que hacerlo debajo de la mesa. Aquí se debatió un tema en el que están en juego altos intereses políticos, tecnológicos y económicos sin que se puedan alzar dudas sobre la transparencia del proceso.

Si bien entendemos que a veces algunos temas necesitan de nuestra rapidez —y al res-

pecto debemos reconocer que en ocasiones nos hemos equivocado por no poner todo el esfuerzo o no actuar con toda la celeridad que el caso merecía— hay otros, como el que nos ocupa, en los cuales actuar con celeridad podría implicar irresponsabilidad y, por qué no, corrupción.

Si bien el Senado tiene que reconocer errores en otros temas, obviamente en éste no solamente no tiene errores que reconocer sino que debe además sentir orgullo por cómo se ha trabajado. En el proyecto de ley de patentes no se estuvo "peloteando" nada sino que se estuvo trabajando. Nos hemos tomado con firmeza el tiempo necesario, no solamente para pensar de una manera autista y encerrados sino para poner verdaderamente en funcionamiento al Parlamento a través de las audiencias públicas.

Todos los sectores fueron consultados y se pudieron expresar de manera absolutamente libre y transparente. También hay que destacar la posibilidad de la prensa, tanto de la general como de la especializada, de poder participar no sólo como espectador sino como coautor de este esfuerzo a través de preguntas que muchas veces hicieron llegar a las reuniones.

En este sentido, también nosotros traemos nuestro esfuerzo y nuestra coherencia.

Para no ser muy extensos, recordemos una reunión del 17 de febrero de este año; en un mismo día, si bien por temas diferentes, recibimos a los representantes de dos de las tres o cuatro potencias económicas y tecnológicas: por la mañana, al embajador Cheek, de los Estados Unidos, y por la tarde, al embajador Oyake, del Japón.

Al embajador Cheek, con quien estuvimos reunidos más de una hora y media en mi despacho, aquí en el cuarto piso, le dijimos casi textualmente que era una opinión prácticamente unánime de este Senado, más allá de los partidos políticos, la necesidad de la sanción de una nueva ley de patentes que obviamente se debería adecuar a la nueva situación internacional pero partiendo de adecuarse a la realidad y la necesidad de nuestra situación local, nuestro país, y la de aquellos que nos eligen y que con su esfuerzo y sus impuestos nos pagan la posibilidad de estar aquí trabajando. Le dijimos que esto exigía tres puntos. Por un lado, obviamente respetar los compromisos internacionales del país. Sabemos que no se puede defender a la comunidad local si no cumplimos con aquello que acordamos en el plano internacional. Por lo tanto, también tenemos el sereno pero el firme derecho de exigir a las contrapartes que hagan otro tanto.

En segundo lugar, le dijimos textualmente —esto está extraído de los diarios— que teníamos la idea de que esta ley tenía que evitar tanto monopolios internos como externos preservando el interés del consumidor. Este no era el único pero sí el primer interés, que es donde después sí se pueden respetar fielmente los intereses del conocimiento y la industria, tal como decía correctamente el senador preopinante por el bloque de la mayoría.

En tercer lugar, dijimos que había que asegurar la posibilidad para que la Argentina pudiese desarrollar la ciencia, la tecnología y el conocimiento.

Creo que fuimos respetuosos y muy claros. Mis palabras, coma más o coma menos, podrían ser muy similares a las que la mayoría de los colegas aquí presentes expresaron en sus diversas manifestaciones en las comisiones y frente a la prensa.

Recuerdo también una reunión de comisión que tuvo lugar el 2 de junio aquí con la presencia del ministro de Economía y de Obras y Servicios Públicos, doctor Cavallo, a quien le planteamos algo con lo que creo que hoy abrieron sus exposiciones tanto el senador Molina como el senador Genoud y que después fue repetido casi por todos nosotros. Ese día, frente a diferencias muy significativas que teníamos con el proyecto del Poder Ejecutivo, dijimos que no estábamos discutiendo si íbamos a tener una ley de patentes o no y que coincidíamos en que había una ley de patentes, como planteó correctamente el señor senador por Corrientes anteriormente, con excepciones al ya añejo Acuerdo de París, y que entendíamos que debía ser actualizada. También dijimos que con el trabajo serio y responsable en esta casa pretendíamos ver cuál era la mejor ley para defender en orden a las prioridades de nuestros consumidores, la calidad y precio de los productos, y el desarrollo del conocimiento argentino y su articulación con nuestra producción.

Después de una larga y profunda exposición que hizo el ministro Cavallo, entre otras cosas recordó que "en la Ronda Uruguay del GATT, de los ciento cincuenta países, aproximadamente, que negociaron este Acuerdo, cada uno fue planteando cuáles eran los compromisos máximos que estaba dispuesto a asumir. Y luego, el que determina lo que se incluye en la letra del Acuerdo es el mínimo de todos esos compromisos máximos. Es decir, lo que establece el GATT en materia de protección patentaria es un nivel por debajo del cual [dice el ministro] ... se

incurre en incumplimiento de las normas del GATT".

Por su parte, en su intervención el diputado Armendáriz, dijo: "En el proyecto del Poder Ejecutivo [y en esto dice que coincide con lo que habían sido mis expresiones anteriores] existe una conciencia generalizada de que hay que aprobar una nueva ley de patentes. Lo que sucede es que no estamos de acuerdo con el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Consideramos que avanza demasiado" y agrega que de alguna manera podía permitir las bases de creación de un monopolio absoluto y total para los dueños de las patentes.

Dicho diputado decía, además, sin que su pregunta ni la de otros legisladores tuvieran respuesta, que con esta política de igualar la producción con la importación, se podía llegar a dar lo que ocurrió en Chile, donde hubo grandes esperanzas para el año 91 y, luego, los grandes laboratorios —o muchos de ellos— se fueron, enviando los productos desde afuera. Este tema no terminó de ser debatido. No tuvimos suficiente respuesta ni espacio para el debate.

Menciono esto porque, con el respeto que merece, pero con la firmeza de saber a quiénes representamos y quiénes con sus impuestos nos sostienen aquí, quiénes con sus votos nos pusieron aquí, lo conversamos con el señor embajador de los Estados Unidos de América. Dijimos que nosotros estamos absolutamente convencidos de que ninguna nación civilizada y democrática del mundo podía sancionar a ningún país que tomara medidas autónomas en el marco de los acuerdos internacionales. En caso contrario, el que se pone fuera de las reglas de la convivencia y de la paz es aquel que sanciona.

Creo que esta reunión a la que me referí y que está en los libros que fueron editados acá, y que mencionó el informante del dictamen de la minoría —que hemos suscripto como bloque, que he suscripto—, produjo un cambio fundamental respecto a aquel enero y febrero en que parecía que teníamos que votar sí o sí el proyecto que había venido del Poder Ejecutivo, porque de lo contrario se ponía en severo peligro el futuro de la estabilidad, de nuestras relaciones internacionales. Creo que esta reunión, inclusive en boca del propio ministro, ya en el mes de junio, marcaba el clima de que el Senado de la Nación no se había equivocado cuando había planteado su obligación, su derecho, su factibilidad concreta de presentar un proyecto de ley de patentes que armonizara, en el marco de nuestros compromisos internacionales, la defensa de nuestros consumidores, la defensa contra cualquier tipo

de monopolio y el impulso de nuestra capacidad para generar e incorporar conocimiento y desarrollarlo.

Por eso creo que estuvo muy bien que nos tomáramos este tiempo, este año. Pero creo que está muy bien también no "cajonear" para no asumir responsabilidades y estar aquí, hoy, debatiendo y votando, y esperando que otro tanto haga la Cámara de Diputados. Porque así como fue bueno tomarnos el tiempo, sería incorrecto e irresponsable de nuestra parte no tomar las decisiones cuando hemos llegado, luego de un fecundo trabajo, a tener una posición.

En síntesis, creo que después de un año de trabajo son muchos más los temas que nos unen en ambos despachos, mayoritario y minoritario, que los temas que nos separan, que voy a mencionar.

Nuestra postura es movernos en el marco del GATT, movernos a favor de la protección de los consumidores evitando cualquier tipo de monopolio, sea nacional o internacional, propender a la efectiva incorporación del conocimiento fomentando la producción local, como lo hacen todos los países del mundo, para lo cual es fundamental que se describan suficientemente los métodos de los procesos del conocimiento. En ese marco consideramos que las licencias semiautomáticas a favor de terceros, habilitados con capacidad técnica y económica para explotárselas, son un recurso fundamental.

La incorporación de conocimiento a la comunidad y a cada persona es el objeto de toda protección patentaria, protección al que inventa y también a la comunidad. Ello no es posible si no se lo aprende produciendo, elaborando y trabajando.

Voy a detenerme brevemente sobre este tema porque, si no, vamos a hablar en abstracto de desarrollarnos tecnológicamente. Si algo hoy se ha aprendido con mayor precisión es que el niño no puede aprender conocimientos si, además, no realiza lúdica y laboralmente actividades alrededor de lo que aprende. Y esto que los países más avanzados del mundo generan por medio de los museos interactivos y de lo que denominan educación interactiva es la preparación para las formas modernas de producción, aquello que hablábamos acerca del conocimiento como el nuevo nombre de la soberanía y del desarrollo.

Por eso, no es verdad —este es el debate que estamos dando también en el tema de la Comisión Nacional de Energía Atómica— que se puedan incorporar conocimientos y habilidades para incorporar conocimientos al proceso pro-

ductivo si no se aprende trabajando y produciendo y si no se conocen los métodos. De lo contrario, hablaremos de inversión y de desarrollo y habrá poca inversión y nada de desarrollo. Entonces, vamos a ver la emigración de nuestros investigadores y la emigración no sólo de los laboratorios internacionales sino también de los pocos laboratorios locales.

Por ello, nos parece bien haber compartido hace pocas horas el hecho de que la embajada argentina en los Estados Unidos haya invitado a todos los investigadores argentinos que están en ese país, no necesariamente para que vuelvan sino para que se articulen con su país. Pero ello de nada servirá si acá no legislamos en función de que el conocimiento esté en el centro del proyecto de desarrollo de la República Argentina. Si no, nos alegraremos recordando a los Houssay y a los Milstein, pero no veremos, como no lo vimos, incorporado este conocimiento a nuestra producción, y en este caso concreto al tema de la producción de medicamentos. Lo mismo ocurrirá en todo el sector agropecuario, en el cual la Argentina tiene experiencia, ventajas comparativas físicas y ventajas competitivas de formación, de historia y de recursos humanos.

Por eso, no queremos una industria local que no incorpore conocimientos y que no investigue, razón por la cual no queremos el proteccionismo extremo y sí esta nueva ley de patentes. Pero también por ello queremos estos diez años de transición, sin los cuales más que preparar a la industria argentina para el desarrollo la colocaremos fuera de él.

Como dijimos, queremos proteger la salud de la población. Pretendemos dejar claramente expresado el sentido de que no es patentable la materia viva, no sólo desde el punto de vista de la defensa del conocimiento sino además desde un enfoque ético y moral. En los temas de biogenética no sólo hay intereses productivos, sino que hay intereses vinculados con la bioética. Algunas de las cosas que están ocurriendo en el mundo, que van a ocurrir en nuestro país, son una alerta necesaria. No somos reaccionarios en esto, pero si se quiere ser avanzado y entrar en el tercer milenio con igualdad en materia social debemos tener capacidad para frenar el dominio de la técnica sobre los hombres y colocarla bajo el dominio del hombre y de sus valores superiores. Por ello, en este sentido, vamos a solicitar modificaciones.

En nuestro país el debate sobre los temas bioéticos se inició pero no se cerró y no pueden pasar aceleradamente en este proyecto de ley.

Esa cuestión la queremos afuera de este debate: en el tema central, que es nuestra postura sobre la ética, la biología y la biogenética.

Finalmente, hemos planteado —y voy enseñada a esto— que en el marco del Acuerdo del GATT también queremos proteger a nuestro país de falta de decisiones que otros firmantes en algún momento decidan no tomar.

Por eso hemos planteado en nuestro proyecto en minoría darle instrumentos al Poder Ejecutivo —a éste o al futuro— para defender los intereses del país frente a aquellos que en algún momento no cumplan con los compromisos internacionales que la Nación ha firmado —que todavía debemos tratarlo aquí— y que está dispuesta a cumplir en el futuro.

Sin entrar en el detalle, reconocemos el inmenso valor que tiene para la República Argentina, para nuestro pueblo, que luego de sustentar posiciones tan diferentes, lo que podría ser hoy el oficialismo y la oposición, sólo estemos debatiendo cuatro o cinco artículos dentro de un total de más de cien. Creo que esto es un gran avance del Senado.

Adelantamos que vamos a votar por el proyecto de la minoría, no solamente por ser firmantes. Entendemos que hay algunos puntos importantes, entre ellos el inciso g) que debería agregarse al artículo 6º del dictamen de la mayoría —en caso de aprobarse éste— que dice: "Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza".

Para nosotros la materia viva no es invención, por elementales razones éticas y por la circunstancia de ser la vida el elemento diferenciador. Lo que preexiste en la naturaleza puede llegar a ser descubierto, encontrado; en ningún caso inventado. Si es encontrado, si es descubierto, si no es inventado, no puede ser patentado.

Por eso también hemos planteado la necesidad de que se ratifique esta no patentabilidad en otros artículos. ¿Por qué? Por aquello que venimos diciendo: lo que existe en la naturaleza no es un invento. Como en el mejor de los supuestos —como hemos dicho— se trata de un descubrimiento y, por ende, no sujeto a patentamiento por no tener altura inventiva, lo que está en la naturaleza ya existe y mal puede pretenderse patentarlo.

En tercer lugar, quiero referirme a algo de lo que hablábamos recién: la transición en las invenciones de productos farmacéuticos. Coinciden ambos proyectos en una primera parte, respecto a plantear una transición. Inclusive el

de la mayoría dice en su artículo 91 que comenzará a aplicarse a partir del 1º de enero del 2000. Repito que hemos coincidido en la necesidad de la transición. Pero ésta juega sobre dos elementos antimonopólicos fundamentales. Por un lado, al obligarnos a prepararnos para competir a los diez años estamos luchando no solamente contra el cumplimiento de las reglas del GATT sino también contra la falta de incorporación de conocimiento en quienes están produciendo en la Argentina. Al establecer diez años estamos evitando que sean desplazados por falta de preparación.

¿Por qué tomarnos el máximo de tiempo? Por una razón muy sencilla: si las naciones más desarrolladas necesitan treinta años o podrían tomarse hasta treinta años para dejar de subsidiar, con todo el poder y la productividad que el sector industrial y tecnológico tiene —porque alegan que, obviamente, terminar con los subsidios supone inclusive modificación de pautas culturales y organización territorial—, ¿cómo pueden suponer que nuestros países no necesiten el máximo tiempo disponible? ¿Cómo nosotros no vamos a usar diez años en estos temas, cuando ellos van a utilizar treinta años para suprimir en forma progresiva los subsidios agrícolas?

Claro que escuchamos el hecho de que los diez años tienen que ver con aquellos países subdesarrollados, y que nosotros no lo somos —esto no quiere decir que seamos desarrollados—. Y además, como nuestro país, como muchos otros, es un país fragmentado, en todos los temas no estamos en la misma situación.

Yo he tomado un informe no elaborado en la Argentina pero sí con participación de argentinos; me refiero al reporte que se hace todos los años en Davos sobre la competitividad en el mundo.

Analizados 41 países, vemos que en cuanto a ubicación general, en este "ranking" a la Argentina la colocan en el lugar 27, cuando México está en el 26 y Chile en el 22, y en primer lugar los Estados Unidos. Con respecto al vigor de la economía, se observa que en primer lugar están los Estados Unidos y que la Argentina se ubica en el número 35, con Chile en el 23 y México en el 30. Sin embargo, cuando en la ubicación por factores uno va hacia el rubro de ciencia y tecnología, donde quien está primero es Japón, se aprecia que la Argentina ya no está en el lugar 27 como en su ubicación general de competitividad; ni siquiera 35, como en la ubicación general del vigor de su economía, sino que figura como 37, entre los 41 países. Además, cuando uno analiza

los puntos fuertes y débiles que le dan a nuestro país, entre los ocho puntos débiles se encuentra el séptimo, que es el retraso en investigación científica tecnológica.

Podríamos abundar en mayores detalles.

Ciertamente que en una pregunta donde se habla del peligro de que la relocalización de la producción se ponga fuera del país como una amenaza severa, mientras que Chile está quinto, México sexto y el Brasil décimo, nuestro país está en el lugar 27. De esto hablábamos anteriormente, cuando recordábamos el ejemplo de Chile.

En síntesis: creemos que la realidad de nuestro país —sentimos que hemos avanzado en muchos temas— nos demuestra que justamente en este aspecto debemos realizar un esfuerzo principal. En consecuencia, para rearticular el conocimiento propio, la generación de conocimiento propio, la incorporación a la producción, la capacidad de los argentinos de incorporar conocimientos de otros lugares a nuestra producción, necesitamos de esta transición.

Y esta transición, con un final de obligación a competir, también es buen motivo para saber que esta nueva ley nos va a dar mejores posibilidades de las que a esta altura ya una anacrónica ley nos estaba ofreciendo.

El último elemento en el cual vemos algunas diferencias —hay otros, pero no son tan significativos— es el que ya he mencionado de la comparación del artículo 45 del dictamen de la mayoría y los artículos 54 y 57 del dictamen de la minoría, por mencionar algunos de ellos.

En el artículo 45, como bien se mencionó anteriormente, se establece que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización del titular. Mientras tanto, en el artículo 54 del dictamen de minoría se especifica que el otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente sin la autorización de su titular lo dispondrá el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial —como mencionamos anteriormente— y deberá ser concedido, previa comunicación al titular de la patente, dentro de los noventa días hábiles de presentada la solicitud. Además, indica que todas las decisiones referidas al otorgamiento de estos derechos serán apelables ante la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo, así como que la sustanciación del recurso no tendrá efectos suspensivos. Otro tanto se incluye luego en el artículo 57 respecto de otros aspectos. Esto tiene que ver con toda una doctrina que los propios países más

avanzados utilizan respecto a cumplir con sus obligaciones internacionales, por un lado para guardar su grado de iniciativa, y por otro para evitar la discrecionalidad que la redacción del proyecto de la mayoría podría llevar aparejada. No digo que sea así sino que podría ser. Creo que en esto sería positiva esta modificación.

En síntesis creo que quedó muy claro, por las exposiciones anteriores, que estamos en el marco de nuestras obligaciones internacionales y que cumplimos con prescripciones como las de los artículos 14 o 19 de nuestra actual Constitución reformada; que no estamos violando disposiciones internacionales sobre las cuales, como se dijo acá, en algún caso hay interpretaciones contrapuestas y para ello se concurre a Ginebra y están las decisiones correspondientes.

No se puede decir como se dijo hoy en la solicitada que se afectan tratados internacionales ratificados por la Argentina y amparados por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Se refiere a acuerdos de protección de inversiones porque hay articulados del mismo que, obviamente, la subordinan a la Constitución de la Nación, a los acuerdos bilaterales y a los compromisos mutuos que se establecen. Hemos analizado uno por uno los convenios internacionales que este Senado ratificó en función de lo que firmó el Poder Ejecutivo.

Voy a finalizar como empecé, diciendo que creo que este es un tema central, que se ha trabajado realmente con seriedad. Más aún, creo que este Senado como cuerpo y cada uno de los senadores debemos estar tranquilos por el estudio que hemos realizado. Se ha actuado con ponderación. Frente al exceso de las críticas y las opiniones no caímos en el error de contestar a la incorrección y al agravio de la misma forma sino con trabajo.

Esto es lo que el país necesita. Es importante conocer que estamos trabajando con transparencia, honestidad y pensando en los intereses superiores de nuestros consumidores, de nuestro conocimiento, de nuestra producción pero, al mismo tiempo, con la madurez que los aciertos y los errores del pasado nos están dando y sabiendo que ninguna nación se puede aislar del mundo pero que también es cierto que no hay nación si en el marco de las reglas internacionales no maximizamos nuestra cultura y nuestra independencia. Creo que hemos armonizado todos estos aspectos.

Obviamente, nosotros, con alguna pequeña modificación en particular, vamos a votar el dictamen de la minoría. Pero como sentimos que es

mucho más lo que nos hemos acercado —son tres o cuatro puntos importantes lo que nos diferencia y que por lo que hemos dialogado podrían ser superados— sin que esto sea una propuesta formal que nos obligue a un cuarto intermedio, no sería malo, como he conversado con miembros de los distintos bloques, en el clima de diálogo que nos ha animado este año, que pudiéramos acordar y armonizar los puntos que he mencionado, que en general son los que tenemos en diferencia, y le diéramos sanción con mayoría absoluta, de más de dos tercios, a este proyecto. Si así no fuera, igualmente, estamos todos trabajando. Son muchas más las cosas que unen a los proyectos de la mayoría y de la minoría.

Creo que esto le va a dar respaldo y tranquilidad a los consumidores, a los industriales, a los investigadores argentinos y a la comunidad internacional. Fue un debate que realmente ha tenido la altura, la profundidad y el trabajo necesarios. Y ojalá sea un modelo para todas las otras tareas que tiene que hacer este Congreso.

Sr. Presidente (Mazzucco). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco del bloque radical.

Sr. León. — Señor presidente: con sabiduría, los señores senadores que ya hicieron uso de la palabra han expresado su opinión, así como también el pensamiento que marca los matices de la democracia de este Senado.

Yo estoy pensando que estamos en presencia de un debate que tiene características especiales frente a las realidades nacional e internacional, y mirando cómo una vieja ley del siglo pasado se cae para que nazca un nuevo marco legislativo.

¿Y cuál es nuestro desafío? En este tema hay tres o cuatro tironeos, y quienes debemos tener la serenidad frente a ellos somos los legisladores argentinos.

Aquí hay juego de intereses entre una industria que quiere ganar dinero y otra industria que también pertenece al juego de las estructuras financieras o capitalistas; entre quienes están ligados a los de afuera y los que tienen algunos pasos mayores dentro del país.

Los de afuera aconsejan una especie de dependencia, que es lo que tal vez está marcando excesivamente el panorama internacional. Esta es la sensación que existe; esto se toca, se ve.

Algunas veces hemos conversado sobre el tema y llegamos a la conclusión de que la caída del muro de Berlín significó la acentuación de una actitud unilateral de poder que, en alguna medida, puede comprometer el criterio de

emancipación y de independencia de nuestro desarrollo, como decía el señor senador.

En el marco de ese cuadro, donde tenemos que definir con nuestro mejor patriotismo todos los sectores, pensamos que lo que interesa es que el país tenga la mejor tecnología y que su aplicación responda, en este caso en particular, a la sabiduría que exige nada más ni nada menos que la atención de la salud de nuestro pueblo. Porque si esto tiene un aspecto esencial es que no estamos defendiendo o no defendiendo pacientes para hacer una llanta de automóvil, sino que estamos buscando cómo custodiamos ese valor básico de la sociedad que es la salud de nuestra gente, contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Yo, como todos, escribí algunas cosas, pero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo ya expuesto por el presidente y los senadores de nuestro bloque y que considero inteligente que este Congreso elija como cocina de su funcionamiento algunos de los valores votados en el GATT, que será próximamente la Organización Mundial de Comercio.

En este acuerdo, y como menciones especiales del GATT, insertamos en alguna medida algunos aspectos de esta legislación. Hay un trato nacional, ése es el título, hay una cláusula de nación favorecida. Están las denominaciones de origen, el patentamiento de todas las invenciones, el plazo mínimo de duración de una patente —dice veinte años—, condiciones detalladas para las licencias obligatorias y los secretos y conocimientos técnicos comerciales.

En este caso, las que tengan valor comercial deberán protegerse del abuso de confianza y otros actos contrarios a los usos comerciales honestos.

También nuestro proyecto, considerando que debemos custodiar a consumidores, exige el mejoramiento de la relación ética entre el que consume y el que ofrece el producto, con la significación saludable que mencioné al comienzo.

También quiero olvidarme, señor presidente, de algunos matices no ideales en el tratamiento de esta cuestión, como ser las expresiones del vicepresidente de los Estados Unidos quien dijo que si no votamos este proyecto, no habrá NAFTA, en el sentido comercial de la palabra. (Risas.) Quiero olvidarme también de las expresiones de embajadores que han venido a presionar como si nosotros no fuésemos una nación independiente.

Recuerdo aquí que en una de esas reuniones que mantuvimos durante tanto tiempo dije que

comprendía la presión que ejercen quienes se mueven por intereses que yo, incluso, respeto; pero dije también que debían comprender que nosotros estamos aquí sentados no para observar a quién de los que tironean le va mejor o peor, sino para custodiar, esencialmente los intereses del pueblo argentino y para posibilitar que, como en este caso, los proyectos que votemos se ajusten a un modelo nacional y a una actitud de identidad en un mundo globalizado.

Yo sé que vivimos en un mundo que prácticamente se ha transformado en un pañuelo, pero aun para la porción del uno por ciento que tiene la industria argentina en la participación internacional, queremos sancionar una norma con el mayor prestigio y la mayor dedicación que podamos darle.

Aunque mis conocimientos de bioquímica no me hayan servido para la actividad política, conozco la significación que puede tener a nivel nacional y la importancia de lo que aquí estamos discutiendo. Y algunas consecuencias son para nuestro país.

Las reformas propiciadas en los regímenes de protección a la propiedad intelectual en los países desarrollados tienden a promover la difusión de innovaciones tecnológicas mediante el comercio con países como el nuestro, que tienen menor desarrollo. Todos sabemos que el comercio es un pájaro que sirve para el desarrollo, para el entendimiento y para la vitalidad de nuestras propias naciones, y también como alternativa para la inversión extranjera directa o para la licencia de tecnología para limitar los senderos del desarrollo tecnológico que en alguna medida tienen éxito en algunos países.

Pero para nosotros, un acceso más difícil a los resultados del avance tecnológico es una de las consecuencias previsibles de la reforma que aquí se está impulsando. Aun en el caso de poder acceder a la tecnología esto sería seguramente a costa de un mayor precio, expresado en regalías y honorarios para permitir su utilización.

Respeto mucho a los sectores y laboratorios extranjeros que también han contribuido de manera importante al desarrollo argentino. Pero en el caso de la industria farmacéutica esto tiene que ver con un conjunto de factores que van desde las características de la propia industria a nivel mundial y nacional hasta las posibilidades de apropiación de la renta tecnológica tanto en ésta como en cualquier otra industria.

Precisamente, en algunas industrias químicas, y particularmente en la farmacéutica, las patentes constituirían un medio efectivo de protec-

ción de las ventajas competitivas. De esta manera se explica que la ofensiva por las patentes elija a esta industria como un hecho importante, trascendente y para muchos principal.

Un factor importante en la industria farmacéutica, como es la alta rotación de productos, implica que en pocos años se produzcan innovaciones significativas en la producción de medicamentos.

Otro elemento a destacar es la relativa fácil sustitución, copia o imitación de composiciones. Gran parte de la síntesis o modificación de drogas y sustancias son reproducidas con un nivel tecnológico modesto por empresas de menor envergadura.

De lo expuesto surgiría una situación paradójica que constituye un motivo de constante preocupación para las empresas importantes del sector quienes, a través de sus grandes recursos económicos y políticos, desatan esta ofensiva que estamos tratando de equilibrar buscando un consenso que tenga como sujeto histórico al hombre argentino.

Por un lado, el avance tecnológico ha permitido un proceso abierto de difusión internacional de todas las innovaciones. Pero esta difusión crea un problema en cuanto a la procreación de esa renta tecnológica en función de la aparición de industrias imitadoras en países en desarrollo que no otorgan protección legal en forma de patentes.

En la Argentina, la industria farmacéutica local puede importar las materias primas e insumos necesarios para la fabricación de medicamentos gracias a la no imposición de patentes.

El monopolio que en alguna medida se propone y que crean los títulos de propiedad intelectual puede dar lugar a excesos que nuestro bloque pretende frenar con el proyecto que pone a consideración del cuerpo. Sobre todo, intenta frenar los excesos en materia de precios.

He recibido hoy una carta de una liga de defensa del consumidor vinculada con este problema. Allí se hace referencia a las patentes y los riesgos que éstas implican para el consumidor.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Oraldo N. Britos.

Sr. León. — También hace alusión a límites subjetivos y límites materiales y todo lo relacionado con la significación de los consumidores en este campo que, como decía al comienzo, pertenece nada menos que a la salud.

La declaración dice que las patentes existen para estimular la investigación pero no para sa-

crificar a los consumidores, *qué* ya tiene dificultades de acceso al consumo.

No quiero seguir con esto, pero sé que todos los que me están escuchando tienen conciencia de que esta ley no tiene la significación en cuanto al consumo sino con relación al prestigio que hay que cuidar para los consumidores.

Decía que la Argentina históricamente trató bien a las inversiones extranjeras, especialmente cuando fueron de riesgo. Pero el desarrollo de esta actitud en algunas circunstancias, antes y ahora, exige atender con una prospectiva muy inteligente el trazado de nuestras políticas. Por eso felicito a los señores senadores porque este cuerpo ha mostrado que en este tema está intentando realmente bucear de modo de descubrir la mejor respuesta a este desafío que se nos hace por una parte con relación a la interpretación que el pueblo le dé y, por otra, buscando la tecnología y la forma de acumulación.

Debemos tratar este tema con especial inteligencia a efectos de elaborar políticas económicas y financieras frente a la realidad que nos presenta la globalización. Para algunos la globalización es la modernidad. Yo no creo que sea así porque muchos aspectos de dicha modernización están retrasando la distribución de ingresos en nuestra propia Nación y en el mundo. A su vez, este proceso de globalización en los conocimientos, en la tecnología y en las comunicaciones muestra que cada vez hay más hombres con hambre en la tierra. Por eso no creo que esto sea la modernización, ya que ésta es la que crea trabajo y elabora la paz.

La semana pasada hablábamos de las Naciones Unidas, institución que cuenta con cerca de cincuenta delegaciones humanitarias o para la paz. Es decir que este organismo magníficamente creado para custodiar los valores del género humano y de los pueblos —como decía Yrigoyen— está preocupado porque cada vez hay más guerras y más hambre.

El mundo mostró que hace poco hubo que invadir un país para combatir la hambruna. Del mismo modo, hace poco tiempo se invadió un país latinoamericano para recuperar la democracia. Y se lo hizo con formas que tal vez no nos ilusionaron mucho a todos nosotros.

De todas maneras se está mostrando una acumulación y muchas veces el desarrollo que nosotros buscamos necesita de la acumulación de capitales para apuntar al crecimiento. Pero esta situación se transforma en perversa si se lleva a cabo dicho proceso acentuando la riqueza del

campo más rico y concentrando la pobreza en el campo más pobre.

Entonces, ante la pretensión de patentar y de acumular, se me ocurre que tenemos que elaborar una resistencia no violenta sino respetuosa y civilizada, teniendo en cuenta un problema de necesidad argentina que anda buscando una acumulación de hombres más educados, menos analfabetos y con mayores aptitudes.

Soy de una provincia. Por eso, ¿cómo podría con tranquilidad estar aceptando pagar patentes a laboratorios si ni siquiera tenemos los hospitales en condiciones de tratar ese bien básico que es la salud!

La propuesta liberal de nuestro tiempo, que aparece con nitidez en las negociaciones multinacionales, como por ejemplo la de la Ronda Uruguay del GATT, presiona para aceptar que el capital extranjero atienda la prestación de algunos servicios o la exploración de recursos naturales.

Yo pienso que mirando objetiva y muy respetuosamente el mundo veremos que está mostrando que aparecen restricciones al derecho de los países importadores de capital o que se los convoca para producir manufacturas destinadas a exportación sólo bajo el argumento de que tales incentivos pueden distorsionar el comercio internacional.

Los grandes países dicen que vienen a capitalizarnos. Los encontramos en el marco de los servicios. Fíjense lo que está pasando con algunas de nuestras privatizaciones. No quiero politizar este debate pero evidentemente hay empresas que ganaron licitaciones y que están privilegiando el lucro por encima de la idea que nosotros teníamos de las privatizaciones, es decir, el mejoramiento del servicio, la capitalización y la tecnología.

En consecuencia, me parece que esto también es un poco el ejemplo de lo que nosotros estamos queriendo custodiar.

A veces nos dan capital, como ocurrió con las privatizaciones que se han realizado, para trabajar en el marco de los servicios pero por ahí nos inhiben el capital necesario para poder hacer un desarrollo del trabajo y la producción y poder exportar, es decir, participar un poco en la famosa globalización.

Iba a decir algunas cosas más pero sólo voy a dar un ejemplo, que es el que motivó mi idea nacional en este tratamiento. El otro día leía un libro de la época de Eisenhower, donde encontré unas palabras del secretario de Estado Foster Dulles, que decía que hay dos maneras

de conquistar un país extranjero: una es ganar el control de su pueblo por la fuerza de las armas; otra, ganar el control de su economía por medios financieros.

Creo que ninguno de nosotros querría justificar con ningún tipo de acuerdo la pérdida de un porcentaje de nuestra limpia independencia, de nuestra esforzada emancipación.

En 1963, con Kennedy, el presidente de la reserva federal, secretario del Tesoro, Henry Fowler decía que las multinacionales de Estados Unidos operan en el exterior no sólo por su importancia comercial, sino que tienen también un papel político altamente significativo.

Entonces, es posible que no todo sea así para nosotros, pero hasta ahora, como argentinos tenemos que tratar de que todo lo que hagamos en el campo de nuestra industria, en el campo posible de nuestro desarrollo tenga también un papel altamente significativo. Ya sabemos que la Argentina no pretende invadir nada, no somos potencia nuclear; y si alguna vez quisiera ser potencia en algún sentido, sería una potencia moral; que su prestigio no sea el de la bomba sino del prestigio de la forma como vive nuestro pueblo, de la cultura que muestre nuestro pueblo y de la solidaridad por encima de las fronteras que signifique el funcionamiento de nuestra nación.

En el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, es decir resultado de un acuerdo en el GATT, entre sus fundamentos se dice: "...reconociendo, además, que es necesario realizar esfuerzos positivos para que los países en desarrollo y especialmente los menos adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades de su desarrollo económico".

Creo que estamos más cerca de esta fundamentación de la propia Organización de Comercio y del GATT, con relación a los aspectos y esfuerzos positivos para los países en desarrollo, votando la ley que en alguna medida rechaza un patentamiento obligatorio y cree las condiciones de una mayor independencia y de una mayor custodia fundacional para que esto que estamos por empezar no signifique aparecer atados a formas, a intereses; o a algunos privilegios que nosotros tenemos que rechazar.

Señor presidente: quise ser breve, mezclé muchas de mis notas, pero terminaría mi exposición afirmando mi apoyo al proyecto de nuestro bloque. No repito más las diferencias que tenemos con el respetable dictamen en mayoría.

Creemos que lo que nosotros estamos intentando votar representa mejor algunos intereses nacionales. Espero que esta ley tan tironeada, como dije al comienzo, sirva a aquello que andamos buscando. Es decir que por encima de los negocios que puedan hacer algunos sirva para la salud de todos los argentinos.

Creo que fue un personaje de Anatole France que alguna vez dijo que los pueblos, tarde o temprano, realizan el sueño de sus sabios. Y yo rogaría esta noche a Dios que nos dé un mínimo de sabiduría para tratar de realizar, a través de este proyecto de ley, el sueño de una nación con características de inteligencia, de salud, de crecimiento, de desarrollo, de independencia y de ética en las relaciones con todos los pueblos del mundo, al servicio de ese gran sujeto histórico que es el pueblo argentino.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos, del Partido Justicialista, último orador.

Sr. Alasino. — Señor presidente: nos apresuramos a sancionar un proyecto de ley de una importancia cualitativa. Esto no es una verdad de Perogrullo, porque definir la protección de la propiedad intelectual es tomar posición frente a un sistema de valores que nos permitirá, a medida que avance la especificidad de la ley, decidir o definir cosas —que aparentemente serían antinómicas— en un sentido o en otro.

De acuerdo con nuestro criterio, el proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría intenta conciliar dos posiciones aparentemente antagónicas. Evidentemente, este texto no va a conformar del todo a ningún sector, lo que de por sí ya es bueno para una ley. Digo esto porque si una norma legal tiene pretensiones de universalidad o de generalidad a nadie le debe caer del todo bien. Debe cubrir a todos, pero no debe atender íntegramente los intereses de alguien en particular.

A continuación, voy a hacer una breve reflexión acerca de cómo llegamos a esta situación cualitativa de reconocer en forma definitiva el derecho de propiedad intelectual, el derecho del inventor.

Nuestra Constitución Nacional enuncia el derecho de propiedad pero no define ni precisa qué debe entenderse por propiedad. Esto le ha permitido a nuestra Corte aproximarse a lo largo de la historia a uno u otro criterio ante lo que debe entenderse por propiedad. Pero creo no errar si afirmo que en un sentido amplio la Corte ha definido a la propiedad como aquello que es comprensivo de todos los intereses apreciables. Es el concepto generalizado de patrimonio, que

de alguna manera define y perfila lo que en nuestra cultura y civilización entendemos por propiedad, en la medida en que ella nos permite gozar y disfrutar de los bienes.

Es importante señalar que al definir el ámbito y los límites del derecho de propiedad, la Corte ha sostenido que su ejercicio nunca ha sido ni es ni puede ser absoluto. Esta es una discusión que en cierta forma se definió a partir de la sanción de la ley 17.711, que modificó los artículos 2.513 y 2.514 del Código Civil. Allí, el concepto absoluto de propiedad del Código de Vélez fue mutado por un concepto más moderno y relativo. Entonces, en el artículo 2.513 se incorporó el ejercicio regular del derecho, mientras que en el 2.514 se institucionalizó la prohibición del abuso del derecho. Por sí solas, estas dos normas excluyen para siempre dentro de la legislación argentina el monopolio de producción y comercialización.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Alasino. — En consecuencia, en nuestra legislación no hay espacio para un derecho de propiedad absoluto e ilimitado.

¡Qué cosa curiosa, señor presidente! Como dato histórico, es bueno decirlo: lo descubrimos cuando estudiábamos la reforma de la Constitución. Nuestra Constitución reconoció los derechos del inventor y las patentes — hoy patentes — y, ex profeso, los constituyentes se apartaron del proyecto que Alberdi había fundado y en el que había definido que los derechos de invención eran a perpetuidad. Los Constituyentes del '53 excluyeron esa definición y sabiamente dejaron librada a este Congreso la temporalidad del reconocimiento de la propiedad intelectual.

También es bueno traer a colación el Pacto de San José de Costa Rica, para nosotros hoy ley constitucional. Si bien aquí queda definido el criterio occidental de la propiedad — la propiedad absoluta — queda subordinado a la protección del interés social. Como contrapartida de esto, dispone que cuando para proteger el interés social deba limitarse el uso y goce de la propiedad, esta limitación debe hacerse siempre mediante el pago de una indemnización.

Digo esto porque nos aprestamos a dar envergadura de ley a la propiedad intelectual. Como decía al principio, esto que parece una verdad de Perogrullo es lo que en determinado momento nos permitirá, sin perder de vista esta

perspectiva de la ley, decidir o definir situaciones que por ahí se presentan como límites y exigen que la norma tome partido en un sentido o en otro.

Antes de continuar quiero afirmar que creemos que de los dos dictámenes en consideración es el de la mayoría el que tiene más precisiones y tiende con mucho más sentido de modernidad el tema de patentes.

Por otra parte, la decisión que toma el proyecto respecto de establecer con precisión qué no es un invento y qué no es patentable, hace tomar partido en uno o en otro sentido acerca de cuándo debe protegerse o conciliarse el interés del inventor con lo social. Por eso, creo que el primer tema conflictivo que se nos presenta — ya ha sido abordado por otros señores senadores — es el que está vinculado con los tratamientos quirúrgicos que están en boga dentro de la medicina nuclear y también los aspectos de la biotecnología y de la biogenética. Es la primera posición que adopta el proyecto para decir que en este aspecto prima el interés social sobre el individual, que estas cosas y otras no pueden ser motivo del ejercicio del derecho de propiedad individual de la patente.

En este afán de ir conciliando los intereses en un aspecto específico, creo que esta iniciativa usa la misma metodología que el GATT, dado que éste comienza definiendo los derechos de patente y también las excepciones al derecho de patente.

Empieza en el artículo 29 con el aspecto referido a este tema: qué es la patente, cuáles son los derechos que otorga. En los artículos 30 y 31, se refiere a las excepciones a ese derecho o a la exclusividad de ese derecho. Yo creo que esto no hay que perderlo de vista porque en todos los momentos en que nosotros decidamos, esta misma metodología es la que vamos a aplicar en la ley.

Por eso es oportuno que reitere la norma que para mí es clara en cuanto a las excepciones que va a hacer la ley. Me refiero al artículo 30, cuando el GATT dice que los miembros podrán proveer excepciones limitadas en los derechos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable la explotación normal de las patentes ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Creo que es la fórmula que intenta conciliar el GATT con los dos intereses, y establece cómo se va a priorizar uno sobre el otro; para cubrir el

avance de uno sobre otro, debe haber primero racionalidad y atención de los derechos.

El artículo 31 también lo considero clave cuando en su inciso a) establece que la utilización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias. Creo que el GATT sabiamente pone aquí como punto inicial el reconocimiento de la situación, de la legislación, de la tradición, de los usos, y de la situación política de cada país que va a ingresar a un sistema de libre comercio y que tal vez en los sectores de la producción o en todo, mantuvo la economía regulada o semirregulada.

Considero que estos dos artículos del GATT son los que esta norma, desde el punto de vista argentino —digamos así—, se encarga de conciliar.

Como bien decían los señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra, los proyectos han llegado a un alto nivel de consenso o de acuerdo.

Creo importante no hacer hincapié en todas las consideraciones generales de la iniciativa sino en algunos aspectos puntuales, además obviamente de remitirme, especialmente al final, a lo que es materia exclusiva de mi comisión, de la intervención de mi comisión en este dictamen.

Creo, señor presidente, que la primera cuestión novedosa que presenta el dictamen de mayoría es en lo que se conoce como importaciones paralelas. Es bueno decir aquí que en este tema el GATT no pudo definir ninguna situación; que era tan antinómica la situación para los miembros que integraban la discusión del GATT, que frente a este tema no se pudo avanzar ni llegar a un acuerdo.

Entonces, el dictamen de la mayoría propone una fórmula que en mi opinión no es la que originariamente se sugería en un proyecto de mi autoría, pero que creo permite un nivel de acuerdo que evidentemente deberá ser saldado en la reglamentación, que en este aspecto haga el Poder Ejecutivo. Esto irremediablemente será así, como también lo era en el proyecto que originariamente envió el Poder Ejecutivo a este cuerpo.

La diferencia entre los dos proyectos —el del Ejecutivo y el que hoy nos aprestamos a aprobar— reside en que el nuestro es mucho más preciso en cuanto a que define la puesta del producto en el comercio de una forma determinada y en cualquier país.

¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque el proyecto define que la forma en que el producto se debe introducir debe ser lícitamente.

Nosotros pensamos que desde el punto de vista de la futura legislación argentina debe ser lícitamente para no ser contradictorios con la forma en que esta ley defina los derechos de propiedad intelectual y a su vez éste será el punto de partida para que el Poder Ejecutivo establezca en la reglamentación con toda precisión cuál es el alcance y el sentido de la norma que sancionará definitivamente el Congreso.

Además, señor presidente, creo que la protección de la propiedad intelectual, que a partir de este momento haga nuestro país, no podrá ser obviada en la interpretación de esta ley cuando se ponga de manifiesto en los países donde se instale la patente la posibilidad de que de allí, por la vía de la importación, ingresen en el sistema comercial del GATT.

Es decir que frente a este tema hay posiciones antagónicas. Es cierto que algunos pretenden más precisiones que otros, pero creo que la forma en que el dictamen de mayoría define este tema no solamente está dentro de las facultades y las posibilidades referidas al GATT sino que además promueve un margen de movimiento que le va a permitir al país integrarse en una política de salud nacional y mundial.

Otro tema frente al cual se toman posiciones distintas, señor presidente, es el vinculado a la explotación de la patente. Creo que nosotros, al respecto, podemos rápidamente establecer que hay dos posiciones extremas. Una primera posición que exige la explotación efectiva y define que la importación no se considera explotación, y la contraria que equipara una a la otra.

Las relaciones que hacía inicialmente con referencia a lo que prevé el artículo 30 del GATT, se vinculan al hecho de que se autoriza a los países miembros a establecer un mecanismo que intente conciliar las dos posiciones. Y creo, señor presidente, que esto es lo que intenta hacer, a mi criterio con éxito, el dictamen de la mayoría en el artículo 42.

Atendiendo a la necesidad de explotación local, a la creación de puestos de trabajo y a la imprescindible reactivación que todos esperamos, nuestro proyecto empieza diciendo que la explotación debe ser local y a continuación establece excepciones. A estas excepciones las pone en cabeza de la autoridad que crea la ley que es el INPI. Téngase presente que en nuestro proyecto las autoridades del INPI son designadas por el Poder Ejecutivo con acuerdo de una comisión bicameral.

Y la regla general establece excepciones, que las podemos dividir en dos ítem: el primero,

cuando la razonabilidad económica y técnica lo requieran o lo indiquen, y el segundo, cuando el ejercicio del derecho de propiedad intelectual pueda tener un efecto negativo sobre la competencia en el mercado. Esto se ha sacado casi textualmente del artículo 40 del GATT.

Considero que esta fórmula concilia los artículos 27 y 40 del GATT, que aparecen como antagónicos; es decir, uno protegiendo una dirección y otro la contraria. Así, el artículo 27 establece lo que se conoce como cláusula de no discriminación, mientras que el artículo 40 permite aparentemente que, atendiendo a las realidades, pueda haber discriminación.

Por eso, insisto en este tema límite, sobre el cual el dictamen en cuestión busca una fórmula de conciliación de dos intereses contrapuestos. Creemos que la solución propuesta tal vez no sea original ya que el sistema se aproxima mucho al de España. Además, tanto éste como el de México —aunque este último lo relativiza a que sea materia de comercio exterior— establecen un mecanismo mixto, lo que nos da la tranquilidad de que, por lo menos en este aspecto, el dictamen de mayoría que sostenemos atiende con cierta equidad estos dos intereses.

Otro tema importante, que también lleva a situaciones límites, es el uso sin autorización del titular. Es lo que se conoce como licencia obligatoria, que nuestro proyecto lo regula en los artículos 45 y 46.

Este tema ha despertado polémicas. Algunos sostienen que esta es una licencia automática encubierta. Otros están disconformes aun con esta norma y dicen que esto dificulta todavía más las cosas. Lo cierto es que nosotros establecemos el principio de que puede haber uso de las patentes sin autorización del titular.

En este sentido, el artículo 45 establece una serie de requisitos para que esto ocurra y funcione. Se supone que hubo una negociación que insumió un plazo máximo de ciento cincuenta días entre el que es titular de la patente y alguien que fue a proponerle explotarla en condiciones que, aparentemente, podrían ser más ventajosas y que esa negociación entre particulares no tuvo éxito o no surtió efecto.

A partir de ahí, frente a esa situación, la autoridad administrativa recupera el poder de policía que tiene el Estado, es decir que no es el INPI o el Poder Ejecutivo; de todas maneras, esto lo volveremos a discutir cuando establezcamos la forma de fijar la remuneración en el caso de la licencia obligatoria.

Entonces, este no es un problema del INPI sino que es una cuestión de fondo del Estado, del poder de policía del Estado que lo empieza a ejercer cuando han fracasado las negociaciones entre particulares. Además, ese poder de policía del Estado es facultativo, es decir que lo usa si quiere y se define para un lado o para otro.

Esta actitud del Estado, su ejercicio del poder de policía y la posibilidad de denegarlo o no y de establecer una revisión judicial de su decisión, le quita la categoría de concesión automática.

Creo que en estos términos se cumple exactamente con lo que establece el artículo 31 del GATT, porque —como decía al principio— el inciso a) del artículo 31 de este acuerdo establece que la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias. por lo tanto: debe haber negociación, debe darse la causal esgrimida, la licencia no es automática y está resguardado el derecho del particular de tres maneras: primero, la autoridad de aplicación —y con esto se cumple con el GATT— debe notificar al titular de la patente antes de otorgar el uso; segundo, la autoridad administrativa fija una audiencia para que las partes lleguen a un acuerdo sobre la remuneración que percibirá el titular de la patente y, tercero, las decisiones de la autoridad administrativa serán recurribles ante la Justicia.

Sobre esta última cuestión quiero hacer una breve digresión vinculada a la forma en que nosotros vamos a calcular la remuneración. Nos ha parecido una fórmula mucho más atendible y moderna la de nuestro dictamen y no la del de la minoría que establece guarismos fijos. Y esto tiene que ver con tres circunstancias importantes: primero, aquí el Estado interviene porque la negociación entre particulares ha fracasado. Se estableció un plazo en el cual éstos no tuvieron éxito y consecuentemente, el Estado toma intervención.

En segundo lugar, creo que es mejor dejar al Estado una fórmula mucho más amplia en lugar de restrictiva para el ejercicio de su poder de policía, porque pueden darse situaciones especiales, que no alcancen a ser epidemias o estragos, y el Estado decida que se hagan con *royalty*-cero. ¿Por qué tienen que ser dos? ¿Por qué tienen que ser tres? ¿Y por qué, además, le vamos a impedir al Estado, en el caso de que tenga una serie de solicitudes de patentes que cubran un amplio espectro y que según de lo que se trate se establezca una u otra forma de remuneración en el mercado, ya sea que se trabaje con el uno o con el diez por ciento, por qué le vamos a impedir —repito— que facilite o evite

el conflicto atendiendo a la realidad del mercado que permite, en determinados momentos, pagar con más o con menos?

Desde todo punto de vista creo que incluir en una ley una cuestión casi reglamentaria es acotar el poder de policía del Estado. Y éste no se sintetiza ni se reduce a hombres que se pueden equivocar; siempre el Estado actúa a través de los hombres. Pero cuando hablamos en teoría, lo que estamos definiendo o perfilando es una ente-lequia que tiene un poder de policía que ejerce para ordenar los intereses particulares.

Es por eso que nosotros vamos a abogar para aprobar esta fórmula que, además, a algunos les ha parecido un control de precios encubierto. Y digo esto, señor presidente, porque si por un lado tratamos de mantener la economía de libre mercado y por el otro establecemos cuáles son las remuneraciones mínimas y máximas, en definitiva estamos definiendo precios. Y por vía indirecta, estamos estableciendo un control de precios. Entonces, si se quiere decir así, que se lo plantee.

Sr. Bordón. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Alasino. — Ya se la concedo.

Pero creo que como fórmula general, y dadas las pretensiones de universalidad, como corresponde a toda ley, ésta es la más apropiada.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bordón. — Quiero hacer una breve reflexión.

Aunque no coincido con el señor senador por Entre Ríos, había enfocado el tema de una manera interesante y, evitada la discrecionalidad, podría ser atractiva para un diálogo posterior la propuesta de no hablar de un número exacto. Sin embargo, tengo la sensación de que si instalamos en el debate que esto es como poner precios máximos ya no coincidiría porque son numerosos los elementos, datos, estadísticas, impuestos a la importación, exportación y otros elementos de la economía que, en muchas ocasiones, están expresados en números y que no implican un control de precios.

Entonces diría que no comparto la primera reflexión del señor senador, pero me parece interesante para establecer un diálogo. Tampoco comparto la segunda. De todas maneras, me gustaría saber si el señor senador puede reflexionar a partir de lo que acabo de decir.

Sr. Presidente (Menem). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Me he caracterizado siempre —y lo digo sin ánimo de ofender— por proclamar y manejar la honestidad intelectual con absoluto rigor. Por eso cuando digo que una cosa puede ser mirada desde un punto de vista también puede hacérselo desde otro ángulo.

Respecto de esta última parte, que sé que es la más conflictiva o la que a la oposición le puede resultar menos atractivo apoyar, aunque entienda las razones no sería honesto si no dijera que, obviamente, nosotros estamos tratando de definir y defender un sistema, de darle un marco y, a la vez, si no digo que también alguien podría sostener que lo que quiere la oposición es hacer "cavallismo" y así evitar el control de precios. Antes que lo digan otros, lo afirmo con honestidad.

Desde otro punto de vista puede decirse que ya hay un guarismo definido y de una u otra forma ese guarismo limitará el precio. Pero digo esto porque intento ser honesto y porque me adelanto a las interpretaciones, tal vez intencionadas, que se puedan hacer sobre estos temas.

A raíz de lo que he explicado es que venimos intentando convencer sobre la fórmula que ha adoptado el dictamen de la mayoría.

El otro tema contenido en nuestro proyecto y no en el de la minoría es el del *pipe line*. Lo primero que debemos señalar en este aspecto es que para entender esta figura el eje pasa por la circunstancia de que son productos que están en una etapa de desarrollo. ¿Qué diferencia hay con el proyecto del Poder Ejecutivo? Que no establecía límites para atrás y, entonces, se podía retroceder cinco o diez años y así se podría transgredir; entre otras cosas, el plazo que le damos a la patente.

Quiero agregar algo más. Si son productos que están en investigación, —y todos estamos de acuerdo porque han dicho otros señores senadores que la investigación farmacéutica puede oscilar entre los diez y doce años, desde que el sabio loco dice "¡Eureka!" hasta que la vacuna está en la farmacia— pueden pasar ocho, nueve, diez, once, doce o quince años. Por su parte, los momentos en los que se va adelantando esa investigación se reducen tal vez a lo que la gente conoce como fase con humanos, que a su vez presenta distintos momentos: con voluntarios sanos, con voluntarios enfermos, hasta que finalmente se vende el producto.

Permitir la introducción de este plazo de retroactividad implica que aquellos procesos de investigación iniciados en los dos últimos años puedan venir al país a terminar las etapas de explotación, fabricación o comercialización. Si dejamos de lado esta norma cerraremos la puerta para siempre a los procesos de investigación que se estén desarrollando en otros países.

Por un lado vamos a decir que la explotación deberá consistir en fabricación local y, por otro, vamos a impedir capturar para fabricar y desarrollar aquí aquellas investigaciones que se encuentren en la primera fase de desarrollo.

Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción muy breve?

Sr. Alasino. — Con todo gusto.

Sr. Genoud. — En realidad todas las invenciones que se están patentando en los últimos dos años ingresarían en el registro, según el texto del dictamen de mayoría. No les estamos cerrando las puertas para siempre sino todo lo contrario. Ello es así porque entrarían en el régimen de patentes tal cual está vigente en la actualidad.

De tal modo que al carecer de la protección legal con que van a contar los futuros productos farmacéuticos, todos aquellos que en estos dos últimos años estén patentándose en el resto del mundo van a poder ingresar mejor, más rápido y más barato al mercado.

Lo que establece el *pipe line* es simplemente una especie de retroactividad en la apertura del registro. Además, trae una consecuencia: cuando comience a regir la ley, los productos que van a estar bajo régimen de protección no van a ser los registrados cinco años atrás sino siete años atrás. Es por ello que el impacto va a ser mayor, ya que van a ser muchos más los productos que tendrán un sobreprecio, ya sea por el *royalty* o por la determinación que haga el titular de la patente en el caso de que exista una explotación de carácter monopolístico.

Entonces, no es que se cierre para siempre la posibilidad de utilizar esos inventos sino todo lo contrario. Van a ingresar más rápido en el mercado porque carecerán de la protección legal de la que van a gozar los productos que se patentan a partir de mañana.

Sr. Alasino. — Creo que es el efecto totalmente contrario.

Sr. Genoud. — No, no es así.

Sr. Alasino. — Lo podemos discutir toda la noche.

Sr. Molina. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Menem). — Recuerdo a los señores senadores que tienen que dirigirse a la Presidencia. Si quieren dialogar entre ustedes...

Sr. Snopek. — ...que vayan al Salón Rosado.

Sr. Molina. — Yo he solicitado una interrupción.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Como decía el señor senador Alasino, respecto del tema de la retroactividad hay un período de investigación básico en el que fundamentalmente se buscan las causas de la enfermedad. Luego viene la etapa de investigación en animales y en humanos.

Cuando nosotros reconocemos la retroactividad estamos viendo la posibilidad de obtener inversiones en el país, dado que contamos con equipos médicos, hospitales y organismos que tienen la capacidad suficiente para recibir estas inversiones. Alguien podrá decir entonces que se trata de ser conejitos de Indias, y en principio se podría pensar que es así. Pero si lo analizamos un poco, el hecho de que no exista patente significa que de todos modos alguien copia y experimenta sin que se verifique contralor por parte del Ministerio de Salud y Acción Social. A este respecto cabe señalar que el Instituto de Farmacología es un instituto que alguna vez deberá nacer luego de un estudio serio y profundo.

Se trata de atraer inversiones para las últimas fases, respecto de las cuales sí tenemos personal técnico.

No lo tenemos quizás para la investigación básica, fundamentalmente por contar con un mercado de 33 millones de habitantes. Si tuviéramos productos lícitos podríamos salir al mundo con ellos.

Sr. Presidente (Menem). — Prosigue en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Lo que el señor senador por Mendoza no dice es que si nosotros no incorporamos esto la protección de la ley va a recaer para todos los productos de una patente a partir del momento de su sanción hacia adelante.

Si coincidimos en que la investigación es de diez o doce años para los productos farmacéuticos...

Sr. Genoud. — Cinco o seis.

Sr. Alasino. — Está bien, cinco o seis.

Sr. Molina. — Continúen con el diálogo.

Sr. Genoud. — Incluyendo el trámite son cinco o seis.

Sr. Alasino. — Está bien, no discutamos.

Lo que nosotros estamos pidiendo es que a productos con investigaciones que solamente tienen dos años, no seis, es decir un tercio, y que están en vías de desarrollo no los podamos atraer para que se terminen fabricando acá. Esta es una cuestión que no admite absolutamente ninguna duda. Se podrá coincidir o no, pero lo que nosotros estamos impidiendo o prohibiendo es que terminemos desarrollando aquí un producto que está en la primera fase de desarrollo.

Sr. Genoud. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Alasino. — Después sí.

Era muy distinto el proyecto anterior del Poder Ejecutivo —aquí se confunde—. Nosotros hablábamos de diez años sin límites. Si para el señor senador por Mendoza son seis y para nosotros son diez o doce, esto sí permitía tener productos que estaban totalmente desarrollados o descubiertos. Esto es distinto. Entonces no solamente los traíamos para beneficio sino para que terminen su desarrollo aquí. Esto es sustancial y marca una diferencia entre los dos proyectos de ley y hace aparecer a éste —si es que nos encolumnamos detrás de promover el empleo, la fabricación y la importación de tecnología o de procedimientos modernos— como el más beneficioso. Hay que ser cuidadoso y tratar de no infligirle una pérdida gratuita a la economía del país.

Por estas razones, venimos en estos términos a promover y defender este instituto.

Le concedo la interrupción al señor senador por Mendoza.

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Simplemente quiero señalar una vez más que nosotros nos ajustamos a lo establecido por el Acuerdo Multilateral del GATT y a la obligación que impone a todos sus países signatarios de abrir los registros inmediatamente. No habla de abrir los registros con retroactividad. De tal modo que nosotros seguimos aferrados al marco jurídico de referencia del "Trips", capítulo referente a la propiedad intelectual del GATT.

Lo que queda incorporado en el artículo 106 del dictamen del justicialismo es un acto de generosidad con algunos países desarrollados que no tienen esa misma generosidad cuando hablamos de subsidio, *dumping*, etcétera.

Entonces, es en razón de esa filosofía que nos hemos ajustado estrictamente a la normativa internacional del GATT.

Sr. Alasino. — Convengamos, señor senador, que usted cumple a pie juntillas con el mismo GATT que les impide a los países como el nuestro dejar de soportar los subsidios agrícolas. Lo mismo que usted condena lo aplica a rajatabla. Por lo menos lo aplica en un aspecto, y en otro no.

Sr. Molina. — Continúen con el diálogo.

Sr. Alasino. — Quiero decir cuál es el mecanismo...

Sr. Presidente (Menem). — Quiero recordarles que luego pasaremos a la discusión en particular y que ahora estamos en el debate en general. Creo que todos vamos a considerar que ya han adelantado el debate en particular y que votaremos las posiciones de cada uno directamente cuando corresponda.

Le ruego al señor senador por Entre Ríos que concluya con su exposición en general.

Sr. Alasino. — Simplemente quiero terminar diciendo que nuestro proyecto de ley establece un mecanismo. Obviamente, la primera solicitud tiene un plazo de dos años hacia atrás; deberá probarse que se ha iniciado la explotación de la invención o la importación a escala comercial.

Téngase en cuenta que son productos en vías de desarrollo, en etapas de desarrollo.

Otro punto importante es que la vigencia de la concesión termina en el plazo que establezca el país de origen o, en todo caso, el límite máximo es el de veinte años, por el cual se permite gozar —de acuerdo con nuestro proyecto de ley— del derecho de patentes.

Señor presidente: este asunto se va a tratar en particular, pero quiero hacer referencia en dos párrafos a una modificación importante que hemos introducido al proyecto respecto de los plazos de caducidad. Nosotros creemos —está en el artículo 65, inciso h) de nuestro dictamen— que los plazos de investigación son mayores, creemos que desde que se inscribe la patente hasta que se vende en la farmacia pasan ocho o nueve años y hemos establecido como plazo de caducidad esos plazos, que no son caprichosos ni discrecionales, sino que son lo que la mayoría de los estudiosos en esta materia establecen con precisión como el plazo en que demora en explotarse comercialmente una patente medicinal.

También quiero hacer una referencia muy breve, señor presidente, a algunos temas puntuales que establece este proyecto de ley, vinculados específicamente a la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios. En

primer lugar, se establece como punible la defraudación de los derechos del inventor. Y hay algunas conductas vinculadas a la defraudación, que no son específicamente defraudaciones, que son asimiladas por el proyecto y por las que se da una posibilidad de pena de seis meses a tres años.

También protege con mayor precisión el secreto de la propiedad intelectual y, obviamente, agrava la sanción penal para aquella persona que por alguna calidad especial conoce el secreto del inventor y lo divulga, o para aquel que viole alguna obligación de secreto impuesta por la ley.

Este proyecto establece, para el pleito posible entre el titular de una patente y el que promueve la obtención de la licencia obligatoria, medidas cautelares especiales para atender a la protección inicial del derecho en discusión. Y establece también, apartándose de los códigos de procedimientos, una caducidad especial para estas medidas cautelares que, por el solo paso del tiempo, por la inacción del que promueve la medida cautelar, también caen.

Finalmente, creo que este proyecto cumple con el GATT cuando, en lo referente a la patente para un procedimiento, dispone la inversión de la carga de la prueba. Esta decisión que adopta el dictamen es importante, si bien es cierto que esto queda a criterio del juez. El juez es quien, discrecionalmente, podrá autorizar la inversión de la carga de la prueba. Pero lo que se ha querido impedir es lo que se conoce como prueba diabólica, es decir probar lo imposible. Si alguien tiene patentado un procedimiento y aparece la misma droga pero con otro procedimiento, y se lo obliga al titular del procedimiento patentado a probar que existe otro procedimiento para fabricar lo mismo que él fabrica, lo obligamos a probar lo imposible.

Entonces, en este caso nuestro proyecto de ley establece la inversión de la carga de la prueba, sujeta a la discrecionalidad del juez.

Los demás temas los iremos planteando a medida que se avance en la discusión en particular.

A continuación, sólo resta hacer una reflexión final. El gran avance de este Senado fue haber tomado posición frente al tema de la propiedad intelectual, que era una vieja omisión del Congreso de la Nación. Para ello, fue necesario un largo año y medio de paciente estudio para la elaboración del proyecto. Es cierto que tal vez esto haya sido posible merced a la feliz iniciativa del presidente de la Comisión de Industria, con quien tuve oportunidad de compartir semanalmente seminarios de aproximación de criterios,

con el objeto de recoger distintas opiniones. Finalmente, hemos llegado a la elaboración de estos dos dictámenes que presentan pocas diferencias. Y esto es así porque juntos recibimos los distintos informes y puntos de vista, muchas veces encontrados, y nos enfrentamos a las mismas situaciones que nos permitieron, con un criterio no desacertado, optar por una u otra posición, tratando siempre de mantener ecuanimidad y animados por un principio de conciliación de los intereses en pugna.

Este es el resultado final de un largo trabajo que ahora se plasma en los dictámenes que están a consideración del cuerpo.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar en general en primer término el dictamen en mayoría.

Sr. Genoud. — Pido la palabra señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Antes que usted, señor senador por Mendoza, había solicitado la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: ¿usted va a someter a votación en primer término el dictamen de mayoría?

Sr. Presidente (Menem). — Acabo de decirlo, señor senador.

Sr. Branda. — En ese caso solicito que se introduzca una modificación porque se produjo una omisión de carácter meramente formal. Antes del artículo 1º debería figurar: "Título I: Disposiciones generales". Por ello, sugiero que cuando se vote se tome en cuenta esta modificación.

Sr. Presidente (Menem). — Se toma nota de lo manifestado por el señor senador por Formosa.

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Es simplemente para adelantar el voto de nuestra bancada en favor del dictamen de minoría.

De cualquier manera, voy a señalar algo que es análogo a lo que manifestó el señor senador por Entre Ríos hace unos instantes. El esfuerzo de un año y medio de trabajo, realizado conjuntamente por los señores senadores de las distintas bancadas, determinó que fueran muchas las coincidencias en este tema, incluso en la filosofía general del proyecto. No obstante, han permanecido cuatro o cinco diferencias que nos obligan a votar por nuestro dictamen de minoría. Además, cabe apuntrar que también lo haremos porque en nuestro despacho formulamos un planteo técnicamente diferente en cuanto al modo de instrumentar todo el articulado.

Por las razones expuestas, reitero que nuestro bloque va a votar en favor del dictamen de minoría.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bordón. — En igual sentido, deseo volver a señalar la satisfacción que ya expresara en mi exposición por la cantidad de puntos coincidentes de ambos dictámenes. De cualquier manera, dada la imposibilidad de acordar íntegramente un único texto —hecho que he conversado hace pocos minutos con distintos señores senadores—, el bloque PAIS va a votar favorablemente el dictamen de minoría, que compare junto con el bloque de la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general el dictamen de mayoría.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en particular.

—Se enuncia y aprueba el artículo 1º.

Sr. Secretario (Piuze). — La Secretaría informa que antes del artículo 1º iría colocado "Título I: Disposiciones generales".

—Se enuncia el artículo 2º.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Nosotros vamos a proponer que se elimine "la concesión de" o que en su defecto, se sustituya "la concesión" por "el otorgamiento".

Lo fundamos brevemente. En el derecho argentino la palabra *concesión* se refiere a un instituto del derecho administrativo, lo que puede llamar a equívocos en la interpretación de este artículo.

El mejor texto podría ser: La titularidad del invento se acreditará con los siguientes títulos de propiedad intelectual...

Sr. Molina. — Acepto.

Sr. Presidente (Menem). — Lo acaban de aceptar.

Se va a votar el artículo 2º, sustituyendo "la concesión" por "el otorgamiento de los siguientes títulos..."

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — Más correcto es "que se acreditará con los siguientes títulos de propiedad industrial...". No hace falta "el otorgamiento de", que es...

Sr. Genoud. — Son dos opciones que dejamos a criterio de la mayoría.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la mayoría.

Sr. Molina. — Vamos a aceptar "el otorgamiento".

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 2º con la modificación propuesta, que fue aceptada por la comisión.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 3º.

Sr. Secretario (Piuze). — Título II, capítulo I.

—Se enuncia el artículo 4º.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — El inciso c) dice: "Para el caso de los modelos de utilidad se considerarán únicamente los conocimientos técnicos que se hayan hecho públicos en el país". Solicitamos suprimir este párrafo por cuanto ya está en el artículo 58 del proyecto Molina. Vamos a leerlo...

Sr. Presidente (Menem). — Supresión no del párrafo sino de la frase.

Sr. Genoud. — Sí, del párrafo.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Todo el párrafo?

Sr. Genoud. — Reitero: eliminar la frase "Para el caso de los modelos de utilidad se considerarán únicamente los conocimientos técnicos que se hayan hecho públicos en el país", porque esto es una reiteración del artículo 58 del proyecto Molina.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Vamos a aceptar la modificación propuesta.

Sr. Genoud. — Además, respecto del artículo 4º, el inciso d) establece: "Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente". Vamos a proponer en reemplazo de "persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente" "persona experta y con conoci-

mientos medios en la materia técnica correspondiente”.

Sr. Molina. — No aceptamos.

Sr. Genoud. — Doy los fundamentos...

Sr. Molina. — Esta definición...

Sr. Genoud. — En el artículo 20 del proyecto del bloque oficialista se utilizan estos mismos términos: “persona experta y con conocimientos medios en la materia”. De tal modo que correspondería utilizar la misma frase porque se trata del mismo tema. Es una simple razón de coherencia gramatical en el texto.

Sr. Molina. — No aceptamos la modificación. Entendemos que es materia de reglamentación y nos parece correcta la redacción que hemos adoptado.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con la supresión aceptada en su inciso c), no así la otra propuesta.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia y aprueba el artículo 5º.

— Se enuncia el artículo 6º.

Sr. Bordón. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bordón. — Respecto de este artículo, que establece que “No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley...”, propongo una modificación que, de alguna manera, adelanté en el tratamiento en general.

Nosotros entendemos que la materia viva no puede ser invención; puede ser descubierta, encontrada. En consecuencia, no puede ser considerada como invento y, obviamente, en la medida en que este artículo establece de manera precisa qué consideramos como invención para la norma nosotros vamos a proponer que se agregue como inciso g) del artículo 6º el inciso g) del artículo 9º de nuestro dictamen de minoría, que dice textualmente: “Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.”

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Señor presidente: nosotros vamos a aceptar la modificación propuesta, si bien en el artículo 7º decimos que no son patentables.

De todas maneras, por técnica legislativa nos parece más acertada la propuesta del señor senador por Mendoza.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º con el

agregado de un inciso g) tal como fuera propuesto por el señor senador por Mendoza.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 7º.

Sr. Bordón. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bordón. — Señor presidente: voy a hacer una propuesta en la misma línea que la anterior.

Este artículo se refiere a lo que no es patentable. Nosotros proponemos eliminar párrafos en la redacción original y hacer un agregado. Voy a especificar lo que planteamos eliminar y agregar, y luego leeré textualmente el artículo tal como quedaría. De ser necesario leerlo nuevamente, después acercaría la redacción a Secretaría.

El artículo 7º, inciso b), dice: “La totalidad del material biológico y genético...”. Proponemos eliminar lo que viene a continuación, que es: “...existente en la naturaleza...”. Después dice: “...o su réplica...”, y ahí plantearíamos incorporar “o aislación”. A partir de allí seguiría diciendo “...los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales”. Ahí viene una coma, que para nosotros sería punto final, y eliminaríamos: “...y libres, tal como ocurre en la naturaleza.”

En síntesis, la redacción que proponemos para el inciso b) del artículo 7º sería: La totalidad del material biológico y genético, su réplica o aislación, y los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales.

Las modificaciones que proponemos responden, primero, a un criterio en que hemos coincidido todos los presentes respecto a que la expresión “existente en la naturaleza” entendemos que está de más, por aquello de que lo que existe en la naturaleza no es un invento. Y el tema de incluir la palabra “aislación” responde a que entendemos que los mismos principios que nos llevan a excluir del patentamiento el material biológico y genético y su réplica se deberían aplicar a su aislación.

En esto estamos guiados no sólo por los temas que se han discutido en el plano de la protección y características de la protección, sino por elementos bioéticos que creo son compartidos por los miembros de esta Cámara.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Por una cuestión de redacción, señor presidente, la comisión no va a aceptar la propuesta porque entiende que cambia todo el sentido del artículo.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º según el texto del dictamen de mayoría.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Piuizzi). — Capítulo II, Derecho a la patente.

— Se enuncian y aprueban los artículos 8º y 9º.

— Se enuncia el artículo 10.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: aquí estamos frente a una situación delicada, porque en el inciso *b*) de este artículo 10, penúltima frase, dice: "...el empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma".

Quiere decir, para dar una explicación genérica, que se trata del empleado que realiza una invención en horas de trabajo en una empresa. Por esta norma el empleador tiene derecho a la titularidad mientras que el artículo 91 de la ley de contrato de trabajo reivindica para el empleado ese invento.

Sr. Molina. — ¿Me permite una interrupción? ¿De qué dictamen está hablando?

Sr. Genoud. — Estoy hablando del artículo 10 del dictamen de la mayoría que se ha votado.

Sr. Presidente (Menem). — Todo el análisis que se hace, señor senador, es el dictamen en mayoría que se ha aprobado.

Sr. Genoud. — Me refiero al artículo 10, inciso *b*), penúltima frase. El último párrafo dice así: "Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso *a*), cuando el trabajador realizara una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta [aquí leo la frase a la que me refiero], el empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención [o sea, el propietario de la invención es el dueño de la empresa] o a reservarse el derecho de explota-

ción de la misma..." Esto contradice el artículo 91 de la ley de contrato de trabajo.

El despacho de la minoría propone que donde dice "el empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención", se reemplace por "le pertenecerá a él la titularidad de la invención, pero el empleador podrá reservarse dentro de los noventa días de realizada la invención, el derecho de explotación de la misma". O sea, el titular del invento va a ser el empleado y el empleador, que ha contribuido obviamente con su empresa a la invención, solamente tendrá el derecho de explotación. Eso significa que el empleado y el empleador se tendrán que poner de acuerdo económicamente para la explotación de ese invento.

Formulamos esta propuesta porque advertimos que hay una contradicción con el artículo 91 de la ley de contrato de trabajo que, lamentablemente, no tengo en mi banca.

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — No vamos a aceptar la modificación porque el inciso *b*) tiene dos hipótesis distintas. La primera está referida al contrato de trabajo, en el primer párrafo, y la segunda es una situación diferente. Por eso no vamos a aceptar la modificación propuesta por el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Simplemente para que recuerden los señores senadores que este tema va a Diputados, que tendrá tiempo suficiente para estudiarlo; vamos a leer detenidamente cómo va a regresar este artículo. Tengo la plena seguridad de que para compatibilizarlo con la ley de contrato de trabajo, se le dará la redacción por nosotros propuesta.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 10 del dictamen en mayoría.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia y aprueba el artículo 11.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Después del artículo 11, nosotros proponemos dos artículos sobre los cuales los asesores del bloque justicialista han sido puestos en conocimiento. Proviene del proyecto de ley del senador Ricardo Lafferrière. El

primero dice así: "Las disposiciones del artículo anterior también serán de aplicación en el ámbito de los entes públicos de investigación y universidades nacionales". Esto se propone porque siempre se habla del empleado y el empleador en la actividad privada. Lo que se pretende es que esta norma también se aplique en el ámbito de los entes públicos de investigación y universidades nacionales.

Y el otro artículo, el 16, dice así: "Los ingresos provenientes de la explotación de las patentes de las cuales son titulares los entes públicos de investigación y las universidades nacionales, serán percibidos directamente por los organismos respectivos quienes los destinarán a financiar sus actividades de investigación y desarrollo".

Reitero, de no incorporar estos dos artículos va a quedar una laguna respecto de cuál es la suerte que corren los empleados administrativos que cumpliendo funciones en entes públicos realizan una investigación.

Sr. Alasino. — ¿Por qué no lee el primero?

Sr. Genoud. — El artículo 15, de nuestro proyecto, que correspondería al 12 del proyecto de la mayoría, dice: "Las disposiciones del artículo anterior también serán de aplicación en el ámbito de los entes públicos de investigación y universidades nacionales".

El artículo 16 —el 13 de ustedes— dice así: "Los ingresos provenientes de la explotación de las patentes de las cuales son titulares los entes públicos de investigación y las universidades nacionales, serán percibidos directamente por los organismos respectivos quienes los destinarán a financiar sus actividades de investigación y desarrollo".

Esto está en un proyecto del señor senador Lafferrière de hace dos años y se nutre de la legislación española.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Genoud. — Son los artículos 15 y 16 del dictamen en minoría. A nuestro juicio estos dos artículos deberían insertarse a continuación del 11 del despacho de la mayoría.

Quiero señalar que estos temas fueron comentados a los asesores del bloque de la mayoría a efectos de no provocar sorpresas con la discusión en esta oportunidad.

Me pregunto qué pasaría si un empleado administrativo del INCYTH realiza un invento revolucionario. ¿A él no se le aplicará ninguna de las normas que hemos estado analizando para el caso de la actividad privada?

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: el concepto de empleado o trabajador, como el del empleador, no excluye al sector público del privado, sobre todo en los incisos a) y b) del artículo 10. No está excluido, si bien es cierto que tampoco está expresamente indicado.

Por eso, la reglamentación dirá cómo se aplica en los organismos. Pero es tanto empleado el del sector privado como el del público.

Sr. Genoud. — Señor presidente: nosotros entendemos que estos dos artículos perfeccionan el proyecto de ley, porque se trata de una relación de carácter administrativo y, además porque se determina el destino de los fondos que resultan de la explotación de la invención.

Sr. Presidente (Menem). — A fin de ordenar el debate, la Presidencia señala que el artículo 11 está aprobado y que el señor senador por Mendoza propone el agregado de dos artículos más.

Se va a votar el agregado propuesto por el señor senador por Mendoza.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda rechazada la propuesta.

Sr. Secretario (PiuZZi). — Capítulo III.

— Se enuncian y aprueban los artículos 12 a 25.

— Se enuncia el artículo 26.

Sr. Oyarzún. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Tierra del Fuego.

Sr. Oyarzún. — Señor presidente: advierto que en todo el desarrollo del texto del proyecto de ley se habla de Administración Nacional de Patentes, sin embargo, este artículo está encabezado con la expresión: "La Oficina de Patentes..."

Considero que se trata simplemente de un error de redacción, pero quisiera saber si se trata de la Administración Nacional de Patentes o de otro organismo.

Sr. Molina. — Aceptamos la corrección y le agradecemos la observación al señor senador por Tierra del Fuego.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 26 sustituyendo "Oficina de Patentes" por "Administración Nacional de Patentes".

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 27.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — En el segundo párrafo, donde dice: "La Administración Nacional de Patentes deberá requerir copia del examen de fondo realizado por oficinas extranjeras...", debería utilizarse el término "podrá" y no "deberá".

Está dentro de las facultades de la Administración Nacional de Patentes el requerir esos elementos a las oficinas de patentes internacionales.

Sr. Molina. — Aceptamos la modificación.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 27 con la modificación propuesta y aceptada.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncian y aprueban los artículos 28 y 29.

— Se enuncia el artículo 30.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Solicito que se sustituya el artículo 30 por el siguiente: "Cumplidos los requisitos de patentabilidad establecidos por la presente ley, la Oficina de Patentes procederá a extender el título".

Creo que es inapropiado hablar de aprobar todos los exámenes que correspondan. No se aprueban exámenes sino que se cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en la presente ley.

No se crean que todas estas modificaciones responden al capricho del legislador sino que forman parte de las muchas propuestas recibidas en las audiencias públicas, que han sido debidamente registradas, archivadas y clasificadas.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Puede leer nuevamente el señor senador por Mendoza la propuesta de modificación?

Sr. Genoud. — Sí, señor presidente: "Cumplidos los requisitos de patentabilidad establecidos por la presente ley, la Oficina de Patentes procederá a extender el título".

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Vamos a aceptar exclusivamente el cambio de la palabra "exámenes" por "requisitos". Es decir que la redacción quedaría de la siguiente manera: "Aprobados todos los requisitos que correspondan, la Administración

Nacional de Patentes procederá...", y continúa como figura en el dictamen.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 30 con la modificación aceptada por el señor miembro informante de la mayoría.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncian y aprueban los artículos 31 a 34.

Sr. Secretario (Piuze). — Capítulo IV. Duración y efectos de las patentes.

— Se enuncian y aprueban los artículos 35 y 37.

Sr. Secretario (Piuze). — Capítulo V.

— Se enuncian y aprueban los artículos 38 a 41.

Sr. Secretario (Piuze). — Capítulo VI.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Solicito, señor presidente, que se enuncien los artículos más lentamente a fin de poder compaginar toda la documentación que tenemos porque sinceramente en algunos casos no he tenido tiempo de sugerir modificaciones.

— Se enuncia el artículo 42.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Voy a solicitar, señor presidente, la eliminación de la última parte del artículo 42, tal como ya lo expresara en la exposición en general. Creo que la obligación de explotar las invenciones patentadas en el país no debe admitir excepciones de ningún tipo. Por otra parte, dejar esta atribución en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial nos parece una delegación excesiva de facultades.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — No aceptamos esta modificación y ya hemos explicado por qué en el tratamiento en general.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 42 tal como figura en el dictamen.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia y aprueba el artículo 43.

Sr. Secretario (Piuze). — Capítulo VII

— Se enuncia y aprueba el artículo 44.

Sr. Secretario (PiuZZi). — Capítulo VIII.

— Se enuncia el artículo 45.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: es en este artículo en donde radica la mayor diferencia que tenemos con el despacho de la mayoría. Aunque se trate sólo de una palabra, ésta hace girar en ciento ochenta grados el sentido de esta norma.

Nuestra propuesta consiste en lo siguiente: donde dice "podrá" debería decir "deberá". Además se deberían sustituir las palabras "usos de esa patente" por "otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente".

No quiero abundar en conceptos que ya hemos expuesto en el tratamiento en general de este proyecto, pero esto significa entregar al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial la posibilidad de que exista o no monopolio en la fabricación de un producto. Nosotros pretendemos...

Sr. Alasino. — ...

Sr. Presidente (Menem). — Le ruego al señor senador por Entre Ríos que respete al orador en el uso de la palabra.

Sr. Genoud. — Nosotros aspiramos, señor presidente, a que en este caso se cumpla con la letra y con el espíritu del GATT en el sentido de que exista una patente semiautomática. Es decir, cumplidos los requisitos que establece el GATT, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial deberá limitarse a conceder la patente y deberá, por supuesto, realizar todos los trámites que están previstos, como ser la audiencia de las partes, la fijación de una remuneración adecuada y la apelación judicial.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, del bloque PAIS.

Sr. Bordón. — Muy brevemente, señor presidente, quiero manifestar mi coincidencia con la propuesta de modificación.

Con todo respeto quiero decir que hemos buscado pero no encontramos ni conocemos antecedentes sobre el otorgamiento de tan amplia discrecionalidad en un tema de tanta trascendencia. Por esta razón, reiteramos el pedido de que se acepte esta redacción, que nosotros hemos planteado en el artículo 54 del dictamen de minoría.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Señor presidente: ya hemos explicado en el tratamiento en general de qué se trata esta cuestión. Las palabras "podrá" y "deberá" tienen una significación tremenda porque definen si hay o no licencias automáticas. Y no hay ningún país en el mundo que acepte esta legislación que se está proponiendo. Canadá tenía este tipo de normativa y su entrada al GATT hizo que la perdiera.

Creo que si realmente queremos integrarnos a la economía mundial con seriedad, por lo menos desde el punto de vista de nuestra comisión, esta propuesta no va a ser aceptada.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia ruega a los señores senadores no reproducir la discusión que ya se ha dado en general porque si no discutimos tres veces el mismo tema, en general, en particular y nuevamente en particular.

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bordón. — No se enoje, señor presidente, creo que lo hemos hecho con mucha sobriedad de palabras.

Simplemente, deseo hacer una aclaración. Esto fue por la necesidad de ingresar en el NAFTA y en algunos puntos, en función del Mercosur, sí hemos hecho concesiones de ese tipo. Una cosa no implica la otra; son dos determinaciones diferentes porque hay concesiones mutuas similares.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: como parece que es patrimonio del señor senador por Mendoza cumplir con el GATT, quiero hacer una referencia concreta al punto b).

Dice que sólo podrán permitirse esos usos, cuando antes de hacerlo el potencial usuario ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no han surtido efecto en un plazo prudencial. Reitero que dice: sólo podrán permitirse, no deberán permitirse.

Sr. Genoud. — ¿Y?

Sr. Presidente (Menem). — Señores senadores: el GATT lo vamos a debatir en pocos días más; estamos discutiendo ahora la ley de patentes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 45.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 46.

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — El tercer párrafo dice: "El INPI notificará al titular de la patente el incumplimiento de lo prescripto en el párrafo precedente..." El párrafo precedente no prescribe nada. Debería referirse al primer párrafo o al artículo 42...

Sr. Molina. — Al primer párrafo.

Sr. Alasino. — Entonces, quedaría: "...el incumplimiento de lo prescripto en el primer párrafo..."

Sr. Molina. — La Comisión acepta la modificación.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 46 con la modificación sugerida por el señor senador por Entre Ríos y aceptada por la Comisión.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 47.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Simplemente para aclarar una cuestión gramatical.

Propongo que el artículo comience diciendo: "Será otorgado el derecho de explotación conferido por una patente..." y no decir "...uso de una patente..."

Sr. Molina. — No tenemos inconveniente.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Se acepta?

Sr. Molina. — La Comisión acepta la modificación.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 47 con la modificación sugerida por el señor senador por Mendoza y aceptada por la Comisión.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 48.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Estoy tratando de hablar lo menos posible, pero voy a pedir a Secretaría que vaya un poco más lento y nos deje un poco de tiempo entre los artículos.

En este artículo también planteo una cuestión gramatical. Donde dice "...la concesión de su uso..." correspondería decir, igual que en el artículo anterior: "...el otorgamiento del derecho de explotación conferido por una patente..."

Sr. Molina. — La Comisión acepta la modificación.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 48 con la modificación planteada por el señor senador por Mendoza y aceptada por la Comisión.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 49 y 50.

—Se enuncia el artículo 51.

Sr. Villarroel. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca del Frente Cívico.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: advierto que en el dictamen de la mayoría no hay una norma que reenvíe, como sí ocurría en cambio en el dictamen de la minoría, a las normas de la ley de procedimiento administrativo en cuanto a los requisitos del acto administrativo. Sabemos que uno de los requisitos del acto administrativo, y bajo pena de nulidad en la ley respectiva, es la de ser acto fundado; vale decir, con expresión de los fundamentos. Y esto es particularmente importante en el caso de esta norma porque es la norma previsor de la revisión judicial de las decisiones que se tomen sobre este punto concreto de los usos no autorizados o la remuneración razonable. Y mal se puede abrir con la amplitud debida el derecho de defensa que supone la revisión judicial, si es que no se exige de modo taxativo y preciso en el acto administrativo, cualquiera fuese su sentido, sea emitido con expresión de fundamentos.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Está en uso de la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Por eso propongo que en el texto de ese artículo se diga que en todos los casos las decisiones relativas a los usos o a la remuneración que corresponda cuando ésta sea procedente deberán contener expresión de fundamentos y estarán sujetas a revisión judicial. Esta es la redacción que propongo.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — Señor presidente: la ley 19.549/72, de procedimientos administrativos, expresa en su artículo 1º que: "Las normas del procedimiento que se aplicará ante la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos, con excepción de los organismos militares y de defensa y seguridad, se ajustarán a las propias de la pre-

sente ley y a los siguientes requisitos...". Esta ley es imperativa y no meramente declamativa. Allí se señalan los casos en los que hay que recurrir por cualquier acto, actividad o hecho de la administración.

Como inciso f) figura el debido proceso adjetivo y sustantivo según el cual las decisiones deben ser fundadas. Por ello sería repetitivo aceptar tal sugerencia. Es más, en el propio dictamen de mayoría se han establecido disposiciones en materia recursiva que son reiterativas de lo que ya está prescripto por la ley de procedimientos administrativos. No creo que haga falta aclaración de tipo alguno ni reenvíos. Como dije, esta norma es imperativa. Además, así lo ha expresado la Corte declarando la nulidad de una serie de actos administrativos fundándose en las disposiciones de la ley de procedimientos administrativos.

Sr. Villarroel. — ¿Me permite una brevísima interrupción?

Sr. Presidente (Menem). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — En este caso vale con más razón aquello de lo que abunda no daña.

Recuerdo que las normas de la ley de procedimientos administrativos resultan aquí profundamente alteradas, no sólo porque las decisiones a las que se está refiriendo son consecuencia eventual de una serie de tratos de naturaleza privada entre el requirente de la licencia forzosa y el titular del derecho, sino además porque, según la redacción que la mayoría ha insistido en darle a la norma precedente, la resolución administrativa es de carácter discrecional, no reglada.

De manera que hay un verdadero interés jurídico, que aparte garantiza mejor el derecho de defensa, en que se diga explícitamente —y me parece que no cuesta nada— que el acto administrativo por el cual se resuelvan estas cuestiones debe contener expresión de fundamentos. De otra manera es muy difícil intentar una revisión judicial cuando el eventual apelante, en términos generales, o impugnante, para ser precisos, no sabe con cuáles eventuales razones tiene que contender ante el órgano judicial.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Señor presidente: nos parece que por técnica legislativa no corresponde sobreabundar. Es suficiente con la ley que ha leído el senador Snopek, de procedimientos. En cualquier provincia, antes de litigar que, natural-

mente —y esto puede quedar como expresión del legislador— en caso de que se genere una resolución, ésta debe ser fundada. Una vez finalizada la vía administrativa, queda expedita la vía judicial. Además, todas las decisiones siempre son recurribles por vía judicial.

Por estas razones, no aceptamos la modificación propuesta.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 51 tal como figura en el dictamen de mayoría.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 52 y 53.

Sr. Secretario (Piuizzi). — Capítulo IX.

—Se enuncian y aprueban los artículos 54 y 55.

Sr. Secretario (Piuizzi). — Título III.

—Se enuncian y aprueban los artículos 56 a 61.

Sr. Secretario (Piuizzi). — Título IV.

—Se enuncian y aprueban los artículos 62 a 64.

—Se enuncia el artículo 65.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: en el artículo 65 se habla de la caducidad de la patente y del certificado de modelo de utilidad y en el punto b) dice que la caducidad será "Por renuncia del titular".

Propongo agregar algo que ya estaba en nuestro despacho en minoría, que decía: "Por renuncia del titular. En caso que la titularidad de la patente pertenezca a más de una persona, la renuncia se deberá hacer en conjunto. La renuncia no podrá afectar derechos de terceros". De esta forma se completa la idea de la renuncia.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Vamos a aceptar la modificación propuesta, que está de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de nuestro proyecto. De todas maneras, entendemos que aquí es pertinente la aclaración.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 65 con la

modificación propuesta por el señor senador por Mendoza y aceptada.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 66 a 69.

Sr. Secretario (PiuZZi). — Título V, Capítulo I.

—Se enuncian y aprueban los artículos 70 a 74.

Sr. Secretario (PiuZZi). — Capítulo II.

—Se enuncian y aprueban los artículos 75 a 77.

Sr. Secretario (PiuZZi). — Título VI:

—Se enuncian y aprueban los artículos 78 a 83.

—Se enuncia el artículo 84.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Entre los artículos 83 y 84 proponemos que se incorpore un artículo que diga: "La acción penal reconocida al titular de la patente o modelo de utilidad en este título es privada".

Sr. Molina. — ¿Cómo?

Sr. Genoud. — Es privada, como en todas las legislaciones. En el dictamen en mayoría se ha omitido el carácter de la acción penal que da motivo a las distintas infracciones o delitos que prevé la ley.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — Señor presidente: en el derecho y en la doctrina legal argentina, sobre todo en la procesal, está generalmente aceptado que la pretensión punitiva la ejerza fundamentalmente el Estado y no los particulares. Son muy raros los casos en donde se deja la vindicta a lo privado. A mi entender esto es volver sobre algo que nos ha costado mucho superar en el pasado y acercarnos a la ley del Tali6n, a la defensa por mano privada. Nos parece que quien debe perseguir y reprimir a los piratas es el Estado, sobre todo cuando constitucionalmente se ha creado la figura del ministerio público con autonomía e independencia.

O sea que la potestad punitiva de perseguir este tipo de delito lo tendrá el Estado sin perjuicio de que eventualmente en algún código

procesal aparezca algún tipo de intervención adhesiva del privado o del particular.

Concretamente, por principio, no me parece que la vindicta tengan que ejercerla los privados, sobre todo cuando hay intereses públicos en juego, sino que debe hacerlo el Estado.

Sr. Alasino. — Entonces se rechaza la propuesta.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — No se acepta el agregado propuesto.

Sr. Genoud. — Simplemente quiero señalar que estamos ignorando lo que existe en prácticamente todas las legislaciones de patentes del mundo es una acción privada en razón de que es el modo de procurar una solución patrimonial cuando existe un conflicto. Por ejemplo, el titular de la patente a quien se le viola el derecho porque un tercero está fabricando su producto tiene la posibilidad de denunciarlo penalmente, pero siendo una acción privada puede resolver el conflicto a través de una solución de carácter económico y luego desistir de la acción.

En esto no hay una lesión pública clara para que sea el Estado el promotor de la acción. No tenemos tiempo — porque estamos trabajando con una gran celeridad, lo que no se compadece con la importancia de este proyecto — para hacer un cuarto intermedio y referir toda la legislación que establece que este tipo de acciones penales son privadas. Para eso está el sistema bicameral; luego la Cámara de Diputados va a acoger todas esas modificaciones sin distinción de bloque y, entonces, cuando nos critiquen, no se queje la bancada justicialista.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — En esto hay una cuestión de principios. Hay algo que debemos erradicar de las prácticas procesales y es el amagar o amenazar con las denuncias o con las cuestiones penales para buscar resarcimiento civil. Esto es desnaturalizar el sistema procesal argentino, señor presidente: y entrar por esta vía en una suerte de chantaje para no resolver los conflictos en la instancia que corresponde. Por eso no aceptamos este criterio.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 84 tal como figura en el dictamen en mayoría.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 85 al 92.

Sr. Secretario (PiuZZi). — Título VII.

— Se enuncian y aprueban los artículos 93 al 98.

Sr. Secretario (PiuZZi). — Título VIII.

— Se enuncian y aprueban los artículos 99 al 103.

— Se enuncia el artículo 104.

Sr. Massat. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Massat. — Señor presidente: más allá del despacho en mayoría surgido de las cinco comisiones, el bloque justicialista propone una modificación en el primer párrafo del artículo 104, donde dice: "...no serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes del 1º de enero del año 2000". Nuestro bloque propone que sea antes del 1º de enero del 2003.

Sr. Genoud. — ¿A qué artículo se refiere, señor presidente?

Sr. Presidente (Menem). — Se refiere al artículo 104. Y se propone la sustitución de "2000" por "2003".

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, bloque PAIS.

Sr. Bordón. — En nuestro dictamen en minoría, figuraba el 1º de enero del 2005.

Voy a ser breve. Ya lo hemos fundamentado. Nos parece que es lógico que nos tomemos estos diez años que nos da el GATT. He fundamentado también por qué razón estamos dentro del GATT tomándonos diez años y creo que esto va a permitir una mejor transición. Entonces, ya que estamos proponiendo tomarnos un lapso de tiempo hasta el 2003, podemos plantear la posibilidad de llegar hasta el 2004. Perdón, hasta el 2005. Lo que pasó es que con tantos años uno se confunde.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Bordón. — No, la suya va a terminar en esa época. (*Risas.*) Mejor dicho, la suya no va a terminar nunca, senador Britos. Perdón, señor presidente, estaba hablando del senador vitalicio que tenemos acá.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Bordón. — Al final del artículo proponemos un agregado. Después de donde dice: "a aplicarse a partir del 1º de enero del año 2.000.", proponemos el siguiente párrafo: "En el supuesto de que la República Argentina no rati-

fique el acuerdo suscripto en el marco de la Ronda Uruguay del GATT, el Poder Ejecutivo podrá postergar la puesta en vigencia de la presente ley prevista en el párrafo anterior. Podrá proceder del mismo modo en el supuesto de que por cualquier razón no pudiera darse estricto cumplimiento al compromiso de reducción de subsidios agrícolas establecido en el mencionado acuerdo."

Es claro que la incorporación del patentamiento farmacéutico podrá beneficiar a la Argentina en la medida en que actuemos bien, porque obligará a los laboratorios nacionales a hacer un mayor esfuerzo en términos de inversión, de investigación y de desarrollo. Pero es obvio que en las negociaciones del GATT, que llevaron a cabo los propios representantes argentinos, esto beneficia en un sentido más directo a Estados Unidos y a países de la Comunidad Europea.

También es cierto que ellos se tomaron exactamente unos treinta años en materia de subsidios agrícolas. Acaban de ocurrir algunos acontecimientos en los Estados Unidos, concretamente en el plano electoral, que han motivado el surgimiento de distintas opiniones, que podrán cumplirse o no, respecto de abrir el debate sobre lo que oportunamente planteó la administración del gobierno norteamericano, y podría ocurrir que el nuevo Parlamento de los Estados Unidos propusiera una relación diferente al respecto.

Por este marco de situaciones que podrían producirse en otros países propiciamos la incorporación del citado párrafo que le dará un atributo al Poder Ejecutivo de la Nación a fin de poder dar un cumplimiento más libre y específico del espíritu de la ley que hoy vamos a aprobar y del espíritu de lo que acordó la Argentina con más de cien países en el marco del GATT.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Tierra del Fuego.

Sr. Oyarzún. — Anteriormente, había acercado un texto alternativo a este artículo 104, partiendo de la base de que hay dos posiciones que han sido ampliamente explicitadas. Una, la del proyecto del dictamen en mayoría, que habla de cinco años; y la otra, del proyecto del dictamen en minoría, que habla de diez años. Las dos posiciones son aceptadas por el GATT y no son técnicamente objetables en función de los compromisos internacionales de nuestro país.

Vale decir que en el afán de aunar criterios y de encontrar una fórmula de equilibrio, propongo un período de transición de ocho años para la entrada en vigencia de la patentabilidad

de los productos farmacéuticos, que es coincidente con lo que proponía el señor senador por Santa Fe, es decir, a partir del 1° de enero del año 2.003.

Si usted lo considera procedente, señor presidente, se podría dar lectura por Secretaría al artículo propuesto.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Es en lo único en que se diferencia?

Sr. Oyarzún. — Así es.

Sr. Presidente (Menem). — Es la modificación propuesta. De modo tal que no hace falta darle lectura.

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza del bloque radical.

Sr. Genoud. — El bloque radical reitera su apoyo a la tesis de los diez años de transición.

No voy a redundar en todos los argumentos dados inicialmente, pero consideramos que sería un grave error de nuestro país renunciar a un solo día de los términos y plazos que nos concede el GATT, que son simétricos con otros plazos que perjudican a la Argentina.

En segundo lugar, sostenemos que no podemos renunciar a un plazo de transición del que han gozado prácticamente todos los países desarrollados del mundo que se incorporaron al régimen patentista.

Si bien diez años para la puesta en vigencia de la ley pueden aparecer como excesivos, a poco que se analice el tiempo necesario desde la solicitud, el trámite de otorgamiento, y la experimentación, hasta la puesta en el mercado —que en promedio insumen seis años—, se observará que resulta un plazo más que moderado para la puesta en vigencia de esta ley.

Además, participamos del agregado que en su momento hizo el bloque PAIS a este artículo 111, para el caso de que el GATT no entre en vigencia ni se cumplan los plazos establecidos para los subsidios agrícolas: que este plazo de diez años pueda ser ampliado por disposición del Poder Ejecutivo.

Hoy más que nunca adherimos a este criterio en razón de que nos están llegando noticias acerca de que como consecuencia del resultado de los últimos comicios en los Estados Unidos habría un replanteo en aquel país de no ratificar el GATT, cosa que espero no ocurra. Pero ante la sola posibilidad de que esto pueda suceder, cobra especial relevancia este agregado al artículo 111.

En una palabra, si no hay ratificación del GATT o por diversas razones no hay cumpli-

miento de los términos para los subsidios agrícolas, el Poder Ejecutivo queda facultado para ampliar incluso el término de diez años.

Sr. Presidente (Menem). — Estamos tratando el artículo 104, señor senador.

Sr. Genoud. — Es el 104 del despacho en mayoría y el 111 del despacho en minoría.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Señor presidente: el Poder Ejecutivo nacional ha remitido a este Parlamento hace ya casi cuatro años la propuesta de reconocer el derecho de patente al inventor en el caso de medicamentos. Es decir que ya llevamos más de tres años y aún estamos discutiendo qué plazo otorgamos.

Quiénes firmamos el despacho de comisión —senadores Romero, Snopek, Martínez, Martínez Almudevar y quien habla, entre otros— entendimos que era un plazo aceptable porque el GATT dice: para los países en vías de desarrollo hasta diez años. Era un plazo aceptable; cuatro que estamos discutiendo y cinco que nosotros proponemos son nueve; se trata de un plazo aceptable.

Pero en virtud de la propuesta que hace el senador por Tierra del Fuego y la que ha hecho el señor senador por Santa Fe, entendiendo que no existe unanimidad en nuestro bloque a los efectos de compatibilizar y lograr un término acorde con las necesidades de los laboratorios nacionales para su reconversión teniendo en cuenta la producción nacional, es que vamos a aceptar en este artículo, como única y exclusiva, la modificación que propone el senador por Tierra del Fuego, solicitando que se dé lectura por Secretaría.

Sr. Presidente (Menem). — El artículo 104 es el del despacho. Lo único que cambia es 2000 por 2003.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 104 con esta modificación.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 105.

— **Sr. Snopek.** — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Snopek. — El artículo 105 también habla del año 2000. ¿Tendría que ser 2003, de acuerdo con lo votado en el artículo 104?

Sr. Presidente (Menem). — Le formulan una pregunta al señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Estaba distraído. Puede responder el señor senador por Entre Ríos, que está colaborando.

Sr. Alasino. — Sí, está bien.

Sr. Presidente (Menem). — Preguntan si en el artículo 105...

Sr. Molina. — Sí, también se modifica, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Entonces habría que reemplazar 2000 por 2003.

Sr. Genoud. — No, no corresponde, señor presidente; no tiene nada que ver.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia advierte que son hipótesis distintas.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Según consultas al equipo, es exactamente 2003.

Sr. Genoud. — No.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 105, en el que se sustituye "2000" por "2003".

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 106.

Sr. Storani. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Storani. — Voy a pedir que se lea por Secretaría una propuesta que quiero hacer a la Cámara. Se trata de salvar una omisión en el proyecto originario, que tampoco ha sido advertida por alguno de los otros proyectos ni por los dictámenes en mayoría ni en minoría.

Solicito que se lea por Secretaría. Lo he hecho llegar en este momento.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Artículo 106?

Sr. Storani. — Sería en lugar del artículo 106.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura:

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

"Todos los laboratorios fabricantes de especialidades medicinales deberán destinar e invertir como mínimo el 3 por ciento de su utilidad anual en investigación para el descubrimiento de nuevas drogas originales y/o tecnología, dejando constancia en sus balances anuales".

Sr. Storani. — Señor presidente: voy a fundamentar brevísimamente esta propuesta.

Este artículo no sustituye al 106; es un nuevo artículo que a esta altura del debate solicito que se inserte, porque considero que al contemplar

una norma tan completa como ésta hemos dejado un vacío en este aspecto que implica invertir en investigación obligatoriamente.

Es decir, de la utilidad de los laboratorios de especialidades medicinales se deduciría un tres por ciento para investigación, obligatoriamente invertido, y del que debe darse cuenta en los respectivos balances.

Le pido al señor miembro informante de la mayoría que considere la posibilidad de esta inclusión.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Señor presidente: lamentablemente, como comprenderá el señor senador por Córdoba, una propuesta a esta altura de la noche, con las características que nos señala, teniendo el proyecto un año de estudio, es algo que no puedo analizar en este instante.

Considero que es algo demasiado serio. También podríamos destinar un porcentaje para el Instituto de Farmacología y, así sucesivamente, también hacerlo para la investigación del SIDA.

Señor presidente: creo que realmente hay que hacer un estudio muy profundo; hay que meterse en el costo de los laboratorios, y no estoy en condiciones en este momento como para decir sí o no.

Por ello, y en consulta con el resto de los integrantes de la comisión, debo manifestar que no vamos a aceptar la propuesta.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Storani. — Señor presidente: el afán era llenar un vacío que, como autor de uno de los proyectos que ha sido objeto de consideración en estos dictámenes, había dejado. No es porque no lo hubiera pensado en su momento sino porque en la redacción final y en la presentación se me pasó por alto.

Quiere decir que lo dejo librado al futuro porque posteriormente quizá tengamos la chance de volver a considerar esta propuesta, o no,

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar la propuesta formulada por el señor senador por Córdoba.

— La votación resulta negativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda rechazada la propuesta.

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: quiero dejar constancia de nuestro total rechazo a este artículo, por las razones expuestas anteriormente.

Sr. Presidente (Menem). — ¿A cuál artículo?

Sr. Genoud. — Al artículo 106. No al propuesto por el señor senador Storani — que voté favorablemente —, sino al artículo 106 del dictamen en mayoría que establece el *pipe line*.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, bloque PAIS.

Sr. Bordón. — Señor presidente: para manifestarme en un mismo sentido.

Creo que de la misma forma en que rechazamos la propuesta en la cual dábamos atribuciones al Poder Ejecutivo, esto significa más allá del GATT y quedarnos sin elementos que le puedan permitir precisamente al Poder Ejecutivo, en cada momento, defender mejor el espíritu de lo acordado en el GATT y el de esta norma.

Pero, obviamente, como ya se nos ha dicho con anterioridad que no se está de acuerdo, sólo

quería dejar explicitado que nuestro bloque va a votar negativamente el artículo 106.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 106.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncian y aprueban los artículos 107 y 108.

— El artículo 109 es de forma.

Sr. Presidente (Menem). — Queda sancionado el proyecto de ley¹. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Pasamos a cuarto intermedio hasta mañana a las 10 y 30, de acuerdo con el plan de labor aprobado al comienzo de esta sesión.

— Son las 23 y 34.

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

¹ Ver el Apéndice.